

REPUBLICA ARGENTINA

# DIARIO DE SESIONES

## CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

46ª REUNION — Continuación de la 4ª SESION ORDINARIA DE PRORROGA  
FEBRERO 15 DE 1995

Presidencia de los señores diputados Alberto Reinaldo Pierri,  
Carlos Alberto Romero y Carlos Ernesto Soria

Secretarios: doctores Esther H. Pereyra Arandía de Pérez Pardo,  
Enrique Horacio Picado y Ariel Puebla

Prosecretarios: doctor Juan Estrada y señor Juan Carlos Stivale

### DIPUTADOS PRESENTES:

ABASTO, Ángel Leánidas  
ABINAGGLE, Carlos Enrique  
ACEROLAZA, Florencio Gilberto  
ALBAMONTE, Alberto Gustavo  
ADAME, Felipe Teófilo  
ALBERTI, Juan Carlos  
ALCALA, Néstor Ricardo  
ALCABA, Ernesto Pedro Andrés  
ALCOGARAY, Álvaro Carlos  
ALVAREZ, Carlos Raúl  
ALVAREZ ESCRIBER, Raúl August  
ALVAREZ GARCIA, Normando M.  
ANTONIO, José María  
ARACONES DE JUAREZ, Mercedes  
ARANDA, Saturnino Danitti  
ARGUELLO, Jorge Martín Arturo  
ARIAS, César  
ARMENDARIZ, Alejandro  
ARRECHETA, José Salvador  
AYALA, Susana Beatriz  
BALESTRA, René Melvacio  
BALESTRINI, Alberto Edgardo  
BALESTRINI, Miguel Alberto  
BALTER, Carlos Mario  
BARBERA, Eliseo  
BARDOTTI, Atilio Hector  
BARRIONUEVO, Eduardo E.  
BAUM, Daniel  
BECKER, Carlos Armando  
BERCERA, Nicolás Eduardo  
BENEDETTI, Jorge Enrique  
BENZI, María Cristina  
BERMONGARAY, Antonio Tomás  
BERMÚDEZ, María del Pilar  
BIANCHI SILVESTRE, Marcela  
BISCHOF, Enrique Alberto  
BONINO, Miguel Ángel  
BONOMI, Silvia Mónica  
BORDA, Osvaldo  
BRACCHI, Osvaldo Américo  
BRANDA, Carlos Ernesto  
BRAVO, Alfredo Pedro  
BRESER, Adalberto Edgardo  
BRUNELLI, Naldo Raúl A.  
BRUZZO, Omar Abdulló  
BUSSI, Antonio Domingo  
CABIRÓN, Juan Carlos  
CALLABA, Aníbal  
CAMANO, Eduardo Oscar  
CÁMARA, Mario Ángel

CAMPERO, Rodolfo Martín  
CARCA, Elisa Beatriz  
CASARI de ALARCIA, Leonor  
CASTILLO, José Luis  
CASTILLO, Oscar Aníbal  
CASTRO, Carlos José  
CERBALLOS, Walter Alberto  
CORCHUETO ELASCO, José M.  
COSTALLI, Juan Carlos  
D'ALESSANDEO, Miguel  
D'AMBROSIO, Ángel Mario  
DAUB, Jorge Carlos  
DELLÁ, Roberto Antonio  
DEL PABLO, Lilián  
DELLEPIANE, Carlos Francisco  
DÍAZ MARTÍNEZ, Jorge Raúl  
DIGÓN, Roberto Secundino  
DI TULLIO, Héctor Horacio  
DONNI, Luisa Cristina  
DEISALDI, María Rita  
DUMÓN, José Gabriel  
DURANONA y VEDIA, Francisco de  
DURRINO, Marcela Margarita  
FABRISIN, Carlos Alberto  
FALLETI, Julio César José  
FAYAD, Víctor Manuel  
FELGUEZAS, Ricardo Ernesto  
FERNÁNDEZ GILL, Guillermo  
FERNÁNDEZ MEJIDE, Graciela  
FIGUEROA, Pedro Octavio  
FOLLONI, Jorge Oscar  
FRAGOSO, Francisco Ulises  
FUNES, Carlos Dulcio  
GALANTE, Pedro Jorge  
GALVÁN, Raúl Alfredo  
GALLO, Orlando Juan  
GARAY, Nicolás Alfredo  
GARCÍA MORENO, Miguel Ángel  
GAUNA, Juan Octavio  
GAZIA, Rodolfo Mauricio  
GIMÉNEZ, Défor Abel  
GIMÉNEZ, Ramón Francisco  
GIOJA, José Luis  
GOLPE, Carlos Horacio  
GOLPE, Néstor Lino  
GÓMEZ CENTURIÓN, Carlos E.  
GONZÁLEZ, Antonio Erman  
GONZÁLEZ CABANAS, Tomás W.  
GONZÁLEZ GAVIOLA, Juan II.  
GRANADOS, Dulce  
GREEN, Gustavo Adolfo  
GUZMAN, María Cristina

HARDY, Aníbal Osvaldo  
HERNÁNDEZ, Antonio María  
HERRERA, Bernardo Eligio  
HERRERA ARIAS, Manuel H.  
HUMADA, Raúl  
HARRECHE, Julio César  
ITURBE, E. del Valle  
JAYNARENA, José Horacio  
JUNCOSA, Rodolfo Aldo  
KAMMERATH, Germán Luis  
KELLY, Elsa Diana Rosa  
KESSLER, Ana Raquel  
KOTH, Carlos  
LAFALLA, Arturo Pedro  
LAHOZ, José Fernando  
LAMBERTO, Oscar Santiago  
LARRABURU, Dámaso  
LECONTE, Ricardo Guillermo  
LEGUIZAMÓN, María Laura  
LOPEZ, Alcides Humberto  
LÓPEZ, José Augusto  
LÓPEZ ARIAS, Marcelo E.  
LYNCH, Carlos Alberto  
LLOPIS, Enrique Raúl  
MACEDO, Horacio Antonio  
MACHADO, Oscar Alfredo  
MAIDANA, Elsa Ignacia  
MANFREDOTTI, Carlos  
MAQUEDA, Juan Carlos  
MARCOLLI, Juan Miguel A.  
MARCOS, Ricardo Ernesto  
MARTÍNEZ, Esteban  
MARTÍNEZ, Manuel Luis  
MARTÍNEZ, Silvia Virginia  
MARTÍNEZ GARBINO, Emilio R.  
MATHOV, Enrique José  
MATZEIN, Jorge Rubén  
MENDOZA, Claudio Ramiro  
MENEM, Carlos Omar  
MERCADER, Martha Evelina  
MERCADO LUNA, Ricardo Gastón  
MICHELLI, Marco Aurelio  
MICHETTE, Salomón Antonio  
MIGLIOZZI, Julio Alberto  
MIRALLES de ROMERO, Norma  
MOLARDO, Elvio Francisco  
MOLINAS, Ricardo Francisco  
MONTIEL, Sergio Alberto  
MOREAU, Leopoldo Raúl  
MORELLO, Emilio Pedro  
MULLER, Mabel Hilda  
MUNIAGURRIA, Marcelo Julio

MUNOZ, Marcelo Bernardo  
MURIEL, Néstor Jorge  
NACUL, Miguel Camel  
NATALE, Alberto Adolfo  
NEDER, Jorge Humberto  
NEGRI, Mario Raúl  
NEEVA, Alejandro Mario  
NIÑO, Jorge  
OLIVERA, Enrique José  
ORGAZ, Carlos Alfredo  
ORQUIN, Leopoldo Manuel  
ORTEZ MALDONADO, Gastón H.  
PARADA, Alberto  
PARAJÓN, José María  
PASCUAL, Rafael Manuel  
PELÁEZ, Víctor  
PELLIN, Osvaldo Francisco  
PERALTA, Aníbal Pedro  
PÉREZ, Jorge Teófilo  
PERNASSETTI, Horacio F.  
PESCE, Félix  
PICCININI, Ana Ida  
PICHETTO, Miguel Ángel  
PIERRI, Alberto Reinaldo  
PINTO, Guillermo  
POLINO, Héctor Teodoro  
PRAT, Alfredo Ernesto  
RÉ, Ricardo Horacio  
RODRIGO, Esteban Joaquín  
RODRIGUEZ, Jesús  
RODRIGUEZ, Mabel E.  
RODRIGUEZ SANUDO, Hugo B.  
ROGGERO, Humberto Jesús  
ROIG, Ángel  
ROJO, Rubén Darío  
ROMERO, Carlos Alberto  
ROMERO, Humberto Antonio  
ROY, Irma  
RUBINI, Mirta Elsa  
RUIZ PALACIOS, José David

SAADI, Ramón Eduardo  
SALINO, María Antonia  
SAMPETRO, Darcí  
SANTÍN, Eduardo  
SARQUIZ, José Alberto  
SCELZI, Carlos José  
SEBASTIANI, Claudio A.  
SMITH, Santos  
SOLANAS, Fernando E.  
SORIA, Carlos Ernesto  
SPINOSA, Augusto Juan  
STORANI, Federico T.  
SUCARIA, Neyer  
SUEIRO, Carlos Adolfo  
TENEV, Carlos  
TEODOSIU, Jorge Nicolás  
TOGNI de VELLY, Adriana  
TOLOMEO, Leonor E.  
TOMA, Miguel Ángel  
TOPA, Raúl Roque  
TOTO, Francisco Patricio  
TRETTEL MEYER, Raúl  
TROYANO, Silvia Elena  
VALCARCEL, Juan Manuel  
VARELA, Néstor Ángel  
VARELA CID, Eduardo  
VAZQUEZ, Roberto  
VENESIA, Gualberto Edgardo  
VICCHI, Raúl Horacio  
VIGLIONE, Atilio Oscar  
ZICARELLI, Orlando A.  
ZUCCARDI, María Cristina

## AUSENTES, EN MISION OFICIAL:

BULLRICH, Patricia  
PERRINI, Gioconda Eulalia

## AUSENTES, CON LICENCIA:

CERDERA, Rogelio Rafael

KAENLEE, Ernesto Rolando  
SCHIARETTI, Juan  
TERRAGNO, Rodolfo Héctor

AUSENTES, CON SOLICITUD  
DE LICENCIA PENDIENTE  
DE APROBACION  
DE LA HONORABLE CAMARA:

ALVAREZ, Carlos Alberto  
AYETZ, Liliana  
CLOSS, Ramón Alberto  
ESTÉVEZ BOERO, Guillermo E.  
FLORES, Rafael Horacio  
IBARRIA, José María  
LOSADA, Luis Enrique  
MENECHINI, Javier Reynaldo  
NOVAU, Pedro José  
SÁNCHEZ GALDEANO, Roque  
USANDIZAGA, Horacio Daniel  
ZAVALLA, José Luis

## AUSENTES, CON AVISO:

ACHEM, Antonio  
ALENDE, Oscar Eduardo  
GUERRERO, Luis Serafín  
MENDOZA, Martín  
PAROLA, José María  
PATTERSON, Ricardo Ancell  
PEFE, Lorenzo Antonio  
POLO, Luis Nicolás  
RICO, Aldo  
RODRIGUEZ, José  
SOBRINO, Margarita María  
VAZQUEZ, Silvia Beatriz  
VITAB, José Alberto

— La referencia acerca del distrito, bloque y período del mandato de cada señor diputado puede consultarse en el Diario de Sesiones correspondiente a la sesión preparatoria de fecha 11 de mayo de 1934.

## SUMARIO

1. Cuestión de privilegio planteada por el señor diputado Dumón con motivo de expresiones vertidas por el señor ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación, doctor Domingo Cavallo. Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales (5.878-D-94). (Pág. 5706.)
2. Continúa la consideración del dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Previsión y Seguridad Social y de Justicia en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre régimen de solidaridad previsional y reformas al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (55-P.E.-94). Se sanciona con modificaciones. (Pág. 5708.)
3. Moción de orden formulada por el señor diputado D'Ambrosio para que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento a fin de proponer el tratamiento del asunto al que se refiere el número 6 de este sumario. Se aprueba. (Pág. 5759.)
4. Moción del señor diputado D'Ambrosio para que se trate sobre tablas el asunto al que se refiere el número 6 de este sumario. Se aprueba. (Pág. 5760.)
5. Aclaración formulada por el señor diputado Lambertto respecto de la votación del asunto al que se refiere el número 2 de este sumario. (Pág. 5760.)

6. Consideración del proyecto de declaración del señor diputado D'Ambrosio y otros por el cual se repudia el atentado contra el escritor y periodista Alberto C. Vila Ortiz, perpetrado en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe (5.859-D-94). (Pág. 5760.)
7. Cuestión de privilegio planteada por el señor diputado Soria con motivo de la actitud asumida por el bloque de la Unión Cívica Radical en la sesión. La Presidencia no la somete a votación por considerarla imprecendente. (Pág. 5762.)
8. Apéndice:
  - A. Sanciones de la Honorable Cámara. (Pág. 5762.)
  - B. Asuntos entrados:
 

Proyecto de declaración. (Pág. 5769.)

—En Buenos Aires, a los 15 días del mes de febrero de 1935, a la hora 16 y 3:

## I

## CUESTION DE PRIVILEGIO

Sr. Presidente (Pierri). — Continúa la sesión.

Sr. Dumón. — Pido la palabra para plantear una cuestión de privilegio.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Para una cuestión de privilegio tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

**Sr. Dumón.** — Señor presidente: en nombre propio y en el del bloque de la Unión Cívica Radical vengo a plantear una cuestión de privilegio con motivo de las expresiones vertidas por el señor ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación, doctor Domingo Cavallo.

El artículo 68 de la Constitución Nacional es bastante terminante al respecto; mucho más lo es el artículo 109 del reglamento de esta Cámara. Hay una función elemental de mantener el decoro de las instituciones. El señor Cavallo dijo la semana pasada que la situación de los jubilados se verá afectada porque "esos señores no interrumpen sus vacaciones". Los legisladores —dijo Cavallo— serán responsables de que se interrumpa totalmente el crédito hacia la Argentina y de que entremos en un período de escasez de recursos y recesión.

No quiero detenerme en la referencia de las vacaciones; casi es risueño que se diga a los legisladores que la Argentina va a caer en un desastre porque se postergue el tratamiento de un proyecto de ley una semana cuando, en medio de la crisis que tuvo que soportar el país, el propio ministro no interrumpió sus vacaciones. No quiero entrar en esto. Lo que me da pena es la angustia y el desatino de este hombre descontrolado, que ya no puede decir que la culpa de lo que nos pasa es del gobierno anterior. La culpa de lo que nos pasa es de la política que él instrumentó, que fijó las tarifas que determinaron una estructura de precios que convirtió a nuestro país en uno de los más caros del mundo para producir. Esta estructura de precios ha repercutido en la balanza comercial, donde el saldo negativo solamente se pudo cubrir con ingresos de divisas de fondos financieros. Este desequilibrio expuso a la Argentina más de lo que ya lo estaba por la deuda externa, y la hizo aún más dependiente del capital, ese capital que entra y sale con rapidez cuando las ondas del mundo pareciera que no son las mejores.

El cambio de política de la Reserva Federal de los Estados Unidos, la modificación de las tasas de interés y finalmente el episodio de México demuestran cuán vulnerable ha resultado la política que ha llevado a cabo Cavallo.

Además, como ya se ha dicho desde nuestra bancada en este recinto, el gasto público de la Argentina no sólo creció a límites incomparables, sino que es el más ineficiente que hemos conocido, porque a pesar de lo que votamos, en favor de los destinatarios del gasto en salud, educación

y vivienda no llega casi ninguno de los pesos que se extraen del bolsillo de los contribuyentes.

Frente a esta situación cabe preguntar quiénes son los responsables: ¿los legisladores o el ministro de Economía? ¿No sería mejor para el país que el doctor Cavallo ejerciera elementalmente una vieja cualidad de los cristianos —no sé si es creyente—, que es la de proceder con un poco más de humildad, un poco menos de arrogancia, algo más de tolerancia y, sobre todo, que no se le escape esa vena autoritaria que parece salirle desde su propio pasado?

Un poco más de tolerancia hacia el funcionamiento de las instituciones. Porque está equivocado el señor ministro, ya que esta Cámara trabajó hasta el último día del año pasado y lo siguió haciendo. Se han introducido importantes modificaciones al proyecto. Por supuesto que mantenemos nuestras discrepancias, pero debo reconocer que también hubo una actitud de conciliación y de diálogo con la bancada Justicialista, que llevó a que el miércoles pasado se concluyera un acuerdo en extensas horas de deliberación donde nuestro bloque expuso sus observaciones.

El miércoles de la semana pasada fui encomendado para explicar a los otros bloques cuáles eran los cuestionamientos más importantes a los efectos de tratarlos ese día en el recinto y sancionar el proyecto. Lamentablemente, cuando llegué para avisar que habían concluido las deliberaciones, los diputados ya se habían retirado por el cansancio de la espera.

En esa oportunidad no quise contestar al señor diputado Polino —por quien tengo gran afecto y respeto— porque no lo encontré cuando vine a explicar las negociaciones realizadas y hacia dónde habíamos avanzado.

Queremos preservar el sistema de reparto, y es nuestra intención no dar al ministro de Economía la oportunidad de que meta la mano y lo desequilibre. Era legítima nuestra pretensión y fuimos escuchados. No solamente estaba la bancada Justicialista, porque durante las deliberaciones también estuvo el señor diputado Durafina y Vedia, de la UCEDE; él fue testigo partícipe y allí tratamos de obtener el fruto más adecuado para este tema.

Sin embargo, hay algo más grave todavía, que es el hecho de que se hace gala de una literatura que conocimos con exceso en nuestro país en las décadas del 60 y del 70. Es la literatura de que el Parlamento es una mala noticia y los políticos son una mala palabra. Sostengo que hay algunos que no vienen,

pero hay otros que venimos, que no faltamos, que estamos siempre; hay políticos deshonestos, pero son muchos más los honestos que vienen a trabajar. No merecemos que se nos ponga en un mismo nivel a unos y otros. Por allí el presidente de la Nación ha dicho que nos pagan para trabajar. No sé si desde el primero hasta el último funcionario del Ejecutivo laborará las horas que lo hacen algunos de los legisladores que conforman las bancadas que existen en este Parlamento.

¿Qué cosa significa este argumento de venir a cargar las tintas siempre sobre un órgano de la República que ejerce el mandato popular?

¿Qué cosa es denigrar a los hombres que hacen de mediadores entre la sociedad y los organismos del Estado? ¿Qué cosa es ésta de pretender que estos hombres sean reemplazados?

Es cierto que nuestras organizaciones políticas nos han colocado en este lugar y que en muchos casos no tenemos padrinos. Tenemos los bolsillos dados vuelta y estamos llenos de deudas. Sin nuestro partido no habiéramos alcanzado este lugar. Muchos de nosotros somos hijos de almaceneros: ¿cuál es el pecado? ¿Quiéren reemplazarnos por empleados de empresas? ¿Qué se pretende hacer con estos argumentos?

¿Acaso la culpa de esta crisis y de esta situación la tiene el Parlamento porque se demora una semana en el tratamiento de un proyecto? Realmente es lamentable que el ministro de Economía no se modere, porque él tiene que saber que la primera señal que se necesita para dar seguridad a los mercados es la tranquilidad, la sensatez y no hablar de más, porque si la economía de un país tiembla al demorarse una semana el tratamiento de un proyecto se debe a que ese país está muy mal, y la responsabilidad es del gobierno que el señor ministro de Economía integra.

Debe existir más serenidad. Lamentamos que el doctor Cavallo haya hecho firmar al presidente de la República un decreto nulo de toda nulidad, desafortunado en un gobierno que dio un paso institucional tan importante como la reforma de la Constitución. La Justicia ha puesto las cosas en su lugar y este Parlamento seguramente encontrará la respuesta legal.

Todo este asunto comienzo con una postura que afecta nuestros fueros y el decoro de esta Cámara de Diputados. Por eso planteo esta cuestión de privilegio a la que solicito se le otorgue carácter preferente —y así invito a votar a todos los integrantes de la Cámara por estar involucrado su propio decoro—, y voy a proponer que la Cámara de Diputados declare su desa-

grado por las expresiones del señor ministro de Economía en oportunidad del tratamiento del proyecto de ley de solidaridad previsional, y lo inste a abstenerse en el futuro de efectuar procedimientos y exhibir comportamientos lesivos al respeto de las instituciones. (*Aplausos prolongados.*)

**Sr. Presidente (Pierri).** — Se va a votar si la cuestión de privilegio planteada por el señor diputado por Buenos Aires tiene carácter preferente. Se requieren dos tercios de los votos que se emitan.

—Resultado negativo.

**Sr. Presidente (Pierri).** — La cuestión pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

**Sr. Di Tulio.** — [Para qué aplaudieron si iban a votar en contra]

2

## REGIMEN DE SOLIDARIDAD PREVISIONAL

(Continuación)

**Sr. Presidente (Pierri).** — Continúa la consideración en particular del dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Previsión y Seguridad Social y de Justicia en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre régimen de solidaridad previsional y reformas al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (expediente 55-P.E.-94)<sup>1</sup>.

Se va a votar el artículo 1º.

—Resultado afirmativo.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.

**Sr. Figueroa.** — Señor presidente: en relación con el artículo 1º, habida cuenta de que la votación no fue realizada en forma nominal ni electrónica, quiero dejar constancia de mi voto negativo, del mismo modo que lo haré respecto de los demás artículos del proyecto.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Se tendrá en cuenta, señor diputado, así como el voto negativo del señor diputado Golpe, cuyo pedido de aclamación en tal sentido me ha hecho llegar.

En consideración el artículo 2º.

<sup>1</sup> Véase el texto del dictamen en el Diario de Sesiones del 21 y 22 de diciembre de 1994, página 4970, y del texto con las modificaciones propuestas, en el Diario de Sesiones del 8 de febrero de 1995, página 5550.



Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

**Sr. Sueiro.** — Señor presidente: en la sesión anterior habíamos propuesto que directamente se pasara a la votación de este artículo.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

**Sr. Natale.** — Señor presidente: estamos participando del debate pero no sabemos a ciencia cierta cuál es el texto final del despacho que se está considerando.

Por gentileza de algunos legisladores, hace algunos minutos hemos recibido una fotocopia de un proyecto que suponemos que es el que está considerando la Cámara. Hace instantes me armaron otra copia a máquina de dos o tres artículos que habrían sido introducidos a último momento por sugerencia del bloque de la Unión Cívica Radical; por lo menos eso es lo que se nos dijo.

Como no tenemos conocimiento cabal de cuál es el dictamen que se está considerando...

**Sr. Presidente (Pierri).** — La Presidencia supone que usted no estuvo presente la semana pasada. Por lo tanto, no como una recriminación sino como una forma de esclarecerlo, le hago saber que se mantiene el texto dado a conocer en la reunión anterior.

**Sr. Natale.** — Estuve presente la semana pasada, señor presidente.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Entonces tendría que saber qué es el mismo artículo. Si quiere le doy lectura.

**Sr. Natale.** — No tengo esa pretensión excesiva, pero sí que se nos reparta el texto de lo que se está considerando para saber qué es lo que voto, porque tengo dos dictámenes sobre mi banca.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Es el mismo dictamen que se repartió la semana pasada, cuyo artículo 2º dice: "Modifícase el artículo 16 de la Ley 24.241, el que queda redactado de la siguiente forma: Artículo 16. — Naturaleza del Régimen y Garantía del Estado..."

**Sr. Natale.** — Este lo tengo, señor presidente; pero ¿y estos dos agregados que hay sobre mi banca relacionados con modificaciones a incluir sobre el déficit de las cajas previsionales y reducción de aportes patronales?

**Sr. Presidente (Pierri).** — Eso no lo tengo, señor diputado.

Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

**Sr. Vicchi.** — Señor presidente: el bloque de la Unión Cívica Radical aclara que votará negativamente —como lo ha hecho en el artículo 1º— los artículos 2º a 11 —parte integrante del capítulo I—, a excepción del artículo 9º.

Finalizado el tratamiento del capítulo I pondremos la incorporación de dos nuevos artículos.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

**Sr. Armendáriz.** — Señor presidente: cuando el miércoles pasado expuse en este recinto traté de definir el sistema de reparto. Dije que se trata de un sistema conocido en todo el mundo, en donde el trabajador aporta y el empresario hace lo propio a través de una contribución, formándose así una masa de dinero que es la que finalmente se reparte.

De esta forma se crea un sistema de solidaridad porque los que aportan en este momento tienen la seguridad de que los que vienen después harán exactamente lo mismo; algo así como una cadena solidaria o especie de contrato intergeneracional.

Cuando estos sistemas de reparto comienzan a caer —como ocurre en la mayoría de los países del mundo— aparece un tercer pilar, esto es, el aporte del Estado; de manera que a partir de ese momento el sistema de reparto se sustenta en un trípode que es precisamente el que acabo de mencionar.

En los países europeos esto está perfectamente definido y algunos de ellos tienen incluso porcentajes fijos. Esta situación la señalé el miércoles pasado, pero como había muy pocos señores diputados creo conveniente recordar aquí que en países como Bélgica o Suiza el Estado aporta al fondo del sistema de reparto el 25 por ciento, mientras que en Inglaterra el Estado se hace cargo de algunos otros aspectos y aporta solamente el 5 por ciento.

En nuestro país hemos incorporado hace años una serie de elementos importantes a efectos de que el Estado contribuya en esta cuestión. Así fue como en su momento se establecieron gravámenes sobre las tarifas de gas, los pulsos telefónicos y los combustibles, y posteriormente se agregaron otros como el ya conocido 16 por ciento del IVA, el 20 por ciento del impuesto a las ganancias, el 15 por ciento de la coparticipación federal y el 30 por ciento de las privatizaciones. En los últimos tiempos todo esto generó una masa importante de recursos que ha hecho que el sistema se fuera sosteniendo a pesar de que cada tanto —lo señalamos también el miércoles

pasado— extracciones efectuadas en varias oportunidades provocaron que el sistema tuviera dificultades de tipo financiero.

**Sr. Presidente (Pierri).** — La Presidencia solicita a los señores diputados que están conversando en sus bancas, que dejen de hacerlo, para poder escuchar al orador que está en uso de la palabra, o bien que se retiren del recinto para continuar con sus pláticas.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

**Sr. Armendáriz.** — Como acaba de expresar el señor diputado Vicchi, voy a votar en contra de este artículo pero antes quiero fundamentar mi postura.

No termino de comprender por qué se le ha agregado el término "asistido" a la expresión "régimen de reparto". La palabra "asistir" significa ayudar desde el punto de vista económico, social, médico e incluso asistencial, ya sea desde el ámbito privado o público.

Técnicamente la asistencia tiene un espíritu benéfico, un carácter graciable y no contributivo; en cambio, la previsión —que es lo que estamos tratando porque en definitiva estamos reformando la ley previsional— es una forma de seguridad social que tiene conceptos más profundos, pues está previendo y disponiendo las medidas necesarias a fin de brindar una cobertura frente a contingencias sociales e incluso cuando cesa su actividad laboral. Dentro de este tema de la previsión podemos destacar las expresiones de invalidez, vejez y muerte del individuo. Por ello no comprendo por qué se incorporó el término "asistido" a este artículo 2º, que viene a modificar el artículo 16 de la ley 24.241.

Además se agrega en dicho artículo la expresión "basado en el principio de solidaridad". Creo que en este caso ha habido un error conceptual porque este principio es solidario mientras es universal. Desde el momento en que se votó la ley 24.241 —que divide a todo el sistema previsional argentino en un sector que es el de reparto y otro de capitalización— esto deja de ser solidario; de lo contrario no nos estaríamos lamentando, quienes tenemos este sistema de reparto, que alrededor de 160 millones de pesos por mes se vayan a las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones. De manera que coincido con lo señalado por el señor diputado Vicchi. Reitero que voy a votar en contra de este artículo. Fundamentalmente quiero dejar constancia de que lo haré por las dos razones que he expresado.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires,

**Sr. Santín.** — Señor presidente: desde el punto de vista de cómo se redactan las leyes, da la sensación de que los artículos 1º y 2º están repetidos. Quisiera que los señores diputados conozcan qué decía el artículo que pretendemos modificar. En consecuencia, voy a dar lectura al artículo 16 de la ley 24.241, que dice: "El Estado nacional garantiza el otorgamiento de las prestaciones establecidas en este título, las que se financiarán a través del régimen de reparto." Esto significa que el trabajador efectúa aportes y recibe contribuciones durante su vida activa con el objeto de que, cuando le corresponda jubilarse, pueda mantener el nivel de vida que tenía cuando era un trabajador activo. Por eso las leyes previsionales hablaban del 70 y el 82 por ciento. Se suponía que quienes ingresaban a la pasividad no debían abonar los gastos de viáticos por ir a trabajar todos los días. Por lo tanto, esos porcentajes eran la posibilidad de mantener el mismo nivel remunerativo de la etapa activa.

¿Por qué prevé la ley que debe considerarse el promedio de las remuneraciones de los diez últimos años para calcular el haber jubilatorio? Si se observa el comportamiento de la curva de salarios de la población económicamente activa, se encontrará que quienes comienzan a trabajar a los 18 años de edad presentan en general el salario más bajo, que luego crece en forma ascendente hasta los 40 o 41 años; a partir de esta edad se mantiene estable o crece en forma muy pequeña. Entonces, ese procedimiento de cálculo del haber brindaba al trabajador la posibilidad de mantener el nivel de vida anterior al momento de la jubilación.

¿Qué sucede ahora? En este proyecto el gobierno dice que se va a garantizar la prestación en función del nivel establecido en el presupuesto. Desde el punto de vista lógico alguien podría preguntarse cómo se podría pagar una cifra superior a la prevista en el propio presupuesto. Lo que planteo es que existe una limitación específica al reclamo que tienen los jubilados. En función de informaciones periodísticas o dadas por el Poder Ejecutivo se dice que existen 60 o 70 mil causas que esperan sentencia, lo que representaría para el Estado un costo cercano a los 1.300 millones de pesos.

El gobierno ha entendido que asiste razón a todos estos reclamos presentados ante la Justicia. Si no fuera así, la Justicia rechazaría los pedidos y el Estado no tendría que hacerse cargo de esta deuda. Por lo tanto, ello muestra que la ANSeS liquida incorrectamente las jubilaciones y pensiones de la sociedad. En consecuencia, poner un límite en la partida presupuestaria significa poner límites a los derechos de aquellos que

aportaron para poder obtener una jubilación parecida al salario que percibían al momento de ejercer la actividad.

La consecuencia final será que la única decisión posible consistirá en adoptar el régimen de capitalización, ya que teóricamente allí los aportes estarán atados a la suerte de los negocios de las administradoras. Sobre este particular conviene señalar que en los seis primeros meses de su vigencia el sistema de administradoras de fondos en nuestro país tuvo rentabilidad negativa. Este es un hecho inédito en el mundo, ya que hasta ahora todos los regímenes de capitalización que se pusieron en marcha lograron altas tasas de rentabilidad en los primeros meses. En nuestro país ocurrió lo contrario.

De todas maneras, en el sistema de capitalización el haber futuro está ligado a lo que se aporte, en tanto que en el sistema de reparto la jubilación estará limitada por lo que el oficialismo establezca que se pueda pagar en el presupuesto.

En la práctica esto generará en la sociedad una falta de voluntad de aportar sobre el total de lo que se gana porque en definitiva la jubilación será aquella que la ANSeS quiera.

Es sabido —esto lo puedo demostrar con varios fallos que tengo en mi oficina— que el 98 por ciento de los reclamos que se han hecho ante la Justicia corresponden a jubilados que ganan entre 200 y 400 pesos y que solicitan haberes entre 600 y 700 pesos. Esto significa que el ingreso que percibían cuando estaban en actividad fue recortado por la ANSeS.

Si avanzamos en el sentido propuesto lo que estaremos haciendo no será justamente buscar previsibilidad sino recortar los derechos de aquellos que van a jubilarse de aquí en adelante.

Lo que solicito, fundamentalmente, es que el artículo 16 quede redactado tal como estaba, manteniendo el régimen de reparto según lo establecido en la ley 24.241. Este es un sistema más conservador, pero a la vez mucho más previsible en el futuro.

Por otra parte, si se establece un tope para lo que se puede pagar, el Estado debe tratar a todos por igual. Si la Argentina tiene problemas de recaudación —tal como se ha evidenciado a partir del último trimestre de 1994— e inconvenientes para pagar sus acreencias, es necesario poner en un mismo sitio de igualdad a todos los acreedores del Estado, llámense éstos compromisos internacionales frente a la deuda, subsidios otorgados a las empresas privatizadas o haberes que debemos pagar a nuestros jubilados.

No es posible que siempre haya un sector que sea el pato de la boda en la política de este gobierno. Si hay que decidir a quién se pone límites en los pagos siempre se elige a los jubilados.

Cuando los intereses de la deuda aumentaron el gobierno no sólo no se amargó sino que hasta festejó, porque pensó que eso crearía recesión en otros países lo cual incidiría fuertemente para que consumieran más en la Argentina. Finalmente esto costó a nuestro país, el año pasado, cerca de 700 millones de dólares. Sin embargo, el ministro de Economía no salió a decir que las decisiones de la reserva federal ponían en riesgo el plan económico de la Argentina ni tampoco planteó que al haber caído la recaudación sólo se podía pagar lo previsto presupuestariamente.

En definitiva, lo que solicito es que se dé un tratamiento igualitario a todas las acreencias del Estado. No es posible que haya un sector, que es el más vulnerable, al que siempre se le impongan recortes en sus ingresos, en tanto que a otros se les paga con alegría y sin chistar.

Por último, pido que de ahora en más los artículos se voten en forma nominal.

**Sr. Presidente (Pierri).** — La Presidencia desea saber si el pedido de votaciones nominales formulado por el señor diputado resulta suficientemente apoyado.

—Resulta suficientemente apoyado.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

**Sr. González Gaviola.** — Señor presidente: en primer lugar, quiero pedir disculpas por haber llegado con retraso a esta sesión, aunque éste ha sido intencional. Ha estado en mi espíritu y en mi esperanza que esta sesión no continuara, pues tengo la impresión de que en ella se va a consumir una infamia que hará retroceder en cincuenta años las políticas sociales de la Argentina. Dado que nosotros, los diputados, tenemos dos formas de votar —levantar la mano o habilitar el quórum—, estaba esperando que la conciencia de los legisladores en relación con un tema tan importante como el que nos ocupa no permitiera consumir esta infamia.

Digo eso porque hace más de un año, con mucho esfuerzo, tratamos de modificar un sistema previsional en crisis, intentando lograr para ello un equilibrio entre distintas propuestas y otorgando a la vez libertad al ciudadano argentino para que pudiera optar por diferentes metodologías, con el fin de construir un futuro que

tuviera algún tipo de seguridad. Desgraciadamente, toda la legislación de políticas sociales, que se basó en otorgar un rol al Estado en relación con la sociedad civil y con el mercado, hoy está por ser desmoronada.

El basamento de las políticas sociales en la Argentina fue el derecho protegido. Ello, porque cuando en los términos de una ecuación hay desniveles de fuerza, el Estado debe transferir poder hacia aquel sector vulnerable; de lo contrario, en una lucha sin reglas, este último irremediablemente termina perdiendo. Por eso, la legislación previsional argentina se basa en el derecho protegido, y en consecuencia, pretende proteger a un sector de la sociedad que es vulnerable biológicamente; tal es el caso de las personas que al llegar al estado de vejez, invalidez o muerte de un familiar no pueden protegerse adecuadamente ni proveer a su subsistencia mediante empleo o capacidad laboral.

Fue a raíz de ello que en la década del 40, especialmente, el movimiento peronista, sancionó una serie de normas basadas en el derecho protegido, tratando así de que la relación entre el capital y el trabajo estuviese armonizada a fin de que ambos sectores pudieran sobrevivir potenciándose mutuamente y no que uno viviera en desmedro del otro.

Por ello el concepto de haber jubilatorio se planteó como un salario sustitutivo para las personas, que en determinada etapa de su vida no pueden trabajar, pero que igualmente tiene que seguir manteniendo un nivel de ingreso que les permita vivir de manera adecuada.

La mecánica de los regímenes de reparto o de capitalización, a los que la Argentina recurrió en forma diferente —depende del período histórico—, estaba ligada con esto: otorgar previsibilidad y seguridad al anciano, al llegar a la contingencia de la vejez, al inválido, al momento de invalidez, o a la viuda, al perder la vida su derechohabiente.

El proyecto de ley que hoy se pretende sancionar en este recinto echa por tierra eso y viene a convalidar un modelo de país que sinceramente creo que debemos repudiar. El Estado genera tres status distintos: uno para el propio Estado —que tiene la mayor cantidad de privilegios—, otro para el sector empresarial y otro para el jubilado.

Es cierto que en la actualidad las relaciones entre el capital y el trabajo se encuentran comprometidas y que las viejas recetas del derecho laboral o previsional pueden romperse, pues a raíz de la irrupción de la tecnología la competitividad desmorona el derecho protegido tal como estaba concebido. Nuestra obligación

como legisladores es encontrar un nuevo equilibrio y no potenciar el desequilibrio que en esta crisis se está produciendo.

Si creemos que el problema de la competitividad lo vamos a resolver usando el salario, la jubilación y el empleo como variable de ajuste, obtendremos el siguiente resultado: un país como el que estamos teniendo, donde el valor adquisitivo del salario es cada vez menor y la cantidad de puestos de trabajo demandados sin satisfacción es cada vez mayor.

No constituye un tema sin importancia el hecho de que hoy estamos cerrando un círculo vicioso, donde en la nueva articulación del rol del Estado se invierten las relaciones entre el sector privado y el laboral, cuando en realidad aquél debería disminuir esas diferencias y no potenciarlas.

El proyecto de ley en discusión, que por otro lado fue sancionado en general en forma engañosa ya que el texto del que hoy disponemos no tiene ninguna relación con el que aprobáramos en aquella oportunidad, echa hacia atrás todo lo que venimos proponiendo, porque al sistema de seguridad y previsión social lo transforma en otro de caridad a asistencia en el cual el único que tiene responsabilidades definidas es el trabajador, a quien sin preguntarle si le alcanza el salario que percibe, todos los meses lo obligan a aportar el 11 por ciento de su haber o el 27 si tiene la desgracia de ser autónomo.

Mientras tanto el Estado guarda para sí la potestad de derivar recursos hacia sectores menos vulnerables que el de los jubilados; así mismo, en forma graciosa y dependiendo de la circunstancial mayoría parlamentaria, decide cuál es la cantidad de recursos que destinará al sector pasivo.

La única precisión que se ha hecho se refiere al aporte que harán los trabajadores, pero no ocurre lo mismo con los beneficios que éstos recibirán. También se ha establecido la reducción del aporte patronal sin tener en cuenta con qué recursos genuinos se sustituirán esos fondos.

El equilibrio del sistema previsional no pasa por sobrecargar al trabajador sino por incorporar a otros sectores del país para financiar solidariamente al sector pasivo, en razón de que tales grupos generan recursos y no hacen uso del trabajo humano; me estoy refiriendo al sector de capital intensivo y al tecnológico dependiente.

Considero que ésta es la forma en que deberíamos avanzar a fin de lograr solidaridad en

el financiamiento del sistema previsional, en vez de sobrecargar al trabajador que tiene ya serias dificultades para conseguir empleo.

Por otra parte, se plantea esta solución en un momento en el cual una de las hipótesis que se consideraban viables para la solución de la crisis previsional está demostrando graves deficiencias. Digo esto porque es indudable que el sistema de capitalización individual denota graves falencias, no sólo porque el Estado no mantiene una comunicación adecuada con los futuros beneficiarios sino porque, además, ha ocultado información que hubiera evitado que mucha gente sufriera grandes pérdidas.

Esta era la discusión que manteníamos con el señor ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos, quien negaba la posibilidad de que se originaran crisis como la que estamos atravesando, como consecuencia de lo ocurrido en México, que ha derivado en una huida masiva de capitales.

Recuerdo que durante un año y medio discutimos lo relativo a la seguridad de las garantías. Gracias a Dios, logramos instaurar una administradora con responsabilidad estatal y un régimen de garantías diferenciadas, como es la dependiente del Banco de la Nación. Esta es la única administradora que ha preservado el ahorro de aquellos que optaron por el sistema de capitalización individual.

Todos los artículos del proyecto de ley en discusión le dan al trabajador el estatus de *kelper*, porque, tal como ocurre con el financiamiento, también en el aspecto jurídico se plantean tres niveles, lo que origina que un jubilado que antes podía litigar sin cargo y sin costas se vea sometido ahora al pago de costas onerosas, además de la extensión que ahora sufrirán los trámites judiciales. Antes, llegar a una sentencia demandaba aproximadamente dos años, ahora deberán esperar por lo menos cinco años.

A lo anteriormente señalado corresponde agregar que si por casualidad algún jubilado logra una sentencia favorable a su petición no tendrá garantías de que efectivamente percibirá la suma que le corresponde, porque el Estado declarará inembargables los fondos de la ANSES. Esto no es otra cosa que una gran infamia en contra de los actuales y futuros jubilados.

En razón de que estamos a punto de consolidar una infamia basada en la profundización de un modelo que el 70 por ciento de los argentinos repudia, invito a aquellos partidos políticos que se sienten opositores a no consentir este procedimiento cuyo fin es destruir el sistema previsional argentino.

Todos sabemos que existen dos formas de votar una de ellas es mediante nuestra presencia, aunque de palabra digamos lo contrario. Por ello, invito a los bloques opositores a que procedamos a dejar sin quórum a la Honorable Cámara a fin de que este tema se discuta nuevamente en las comisiones hasta que salga un proyecto votable.

Esto de ninguna manera es votable porque va en contra de su único destinatario, que es el trabajador, y tiene dos privilegiados: el Estado, que rehúsa su responsabilidad de ser garante de que haya seguridad social, y un modelo desequilibrado en todo, en el cual se favorece al sector productivo a expensas de que el trabajador quede desprotegido.

No es éste el espíritu de armonía que tenemos que tener los argentinos en esta nueva etapa para construir un país nuevo. No son éstas las recetas que están permitiendo a los países más desarrollados salir adelante. Los países más desarrollados están tratando de reconstruir un Estado con nuevos roles y funciones que permitan armonizar capital, trabajo y tecnología, sin profundizar los desequilibrios, como nosotros lo estamos haciendo.

Por lo expuesto, invito a la Unión Cívica Radical y a los partidos provinciales, que sé que de corazón no están a favor de este proyecto, a que hagamos abandono del recinto y no demos quórum, para que esta sesión no termine de convalidar esta infamia en contra de los actuales y futuros jubilados.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por el Chaco.

Sr. Frago. — Señor presidente lo único que falta es que ahora nos vengan a dar lecciones de cómo tenemos que actuar.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Frago. — Seguramente las autoridades de mi bloque van a responder políticamente al señor diputado preopinante. Simplemente digo que la creación novedosa de alternativas electorales fogosas como una estrella no van a hacer quebrar la voluntad política de un partido de cien años, cuya contribución al funcionamiento del sistema democrático es esencial a la vida de la República.

Hoy este bloque seguirá debatiendo este proyecto de ley. Creo que lo mejor que podemos hacer para valorizar el funcionamiento del Parlamento es facilitar el trámite de sanción de las leyes.

Esta será la única oportunidad en que voy a hacer uso de la palabra durante este debate, por lo que aprovecho la ocasión para fundar

mi voto contrario —y así quiero que quede constancia— a todos y cada uno de los artículos —desde el primero hasta el último— de este proyecto de ley. Si se siguiera el criterio que propuso el señor diputado Sautín de votar en forma nominal, seguramente quedaría constancia de mi posición, pero como no estoy seguro de que tal sugerencia prospere quiero señalar que voy a votar en contra de todos los artículos.

Considero que muchas normas de esta iniciativa son inconstitucionales; otras son contradictorias y en general todas presentan una alta litigiosidad, precisamente por esas características. Espero que los jueces con dignidad —que los hay y muchos en la República— no sean injustamente criticados por defender las normas de la Constitución.

Además voy a votar en contra porque este proyecto representa una burla a los jubilados provinciales que fueron transferidos a la Nación con engaños y subterfugios. Incluso voy a votar por la negativa porque la redacción de algunos artículos de este proyecto pasará a ser ejemplo de lo que no se debe hacer, por lo menos en materia de lenguaje, y me refiero específicamente al artículo 10, cuando nos habla de que se trata de un ley federal, como si estuviéramos acá frente a una ley que no es federal. Esta es naturalmente y por su contenido una ley de la Nación.

Finalmente, voy a votar en contra porque creo que tanto en los procedimientos judiciales como en la forma en que se prevé el pago a los jubilados respecto de las deudas tanto litigiosas como no litigiosas, se retrotrae la situación de la Argentina a aquellas épocas en que las relaciones entre el Estado y el ciudadano estaban presididas por el principio de la irresponsabilidad del primero.

Lo único que falta aquí es que en lugar de decir: "La Cámara de Diputados y el Senado de la Nación sancionan con fuerza de ley ..." se diga: "Por cuestiones y razones de Estado se dispone ...", y con esto completáramos el principio general contenido en la iniciativa.

Por estas razones deseo dejar constancia —salvo que votemos en forma nominal artículo por artículo— de mi voto negativo desde la primera hasta la última de las normas de este proyecto. (Aplausos.)

**Sr. Presidente (Pierri).** — Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.

**Sr. Garay.** — Señor presidente: antes de expresar cuál ha de ser la voluntad de este bloque sobre el proyecto y particularmente sobre este artículo 2º, que constituye tal vez la base filosófica, la economía general de esta norma

que se pretende sancionar, quiero señalar que hemos sido partícipes de una filosofía que llevó a este país a alcanzar una economía de mercado que no tiene regreso. No existe político alguno que pueda pregonar de nuevo el dirigismo o el control y aspire a triunfar en la Argentina.

Considero que, finalmente, nos hemos puesto a la altura del mundo con este nuevo mecanismo de la economía, sin perjuicio de algunas o muchas objeciones que hacemos al gobierno nacional, no sólo en ese aspecto sino también en muchos otros vinculados particularmente con la seguridad jurídica.

En este artículo 2º, así como también en el 1º y en muchísimos otros, el proyecto expresa reiterativamente la modalidad que se habrá de adoptar para pagar a los jubilados, estableciendo una pauta fija, congelada, permanente, estable, unilateral y autoritaria.

El artículo 2º expresa que solamente se pagará lo que establezca el presupuesto, y no prevé otra modalidad. Esto se compadece con el artículo 7º y con muchos otros particularmente vinculados con el régimen procesal, donde para enervar una acción al Estado le basta expresar que no tiene recursos presupuestarios suficientes. Ese es el mecanismo general de la ley. No se tienen en cuenta los derechos adquiridos. Los aportantes no sabrán a ciencia cierta si llegado el momento de jubilarse podrán recibir su contraprestación. Aquí desaparece el sentido que tenía la legislación en cuanto a que el Estado devolvía los aportes recibidos durante la actividad de un individuo. En esta norma —esto refleja en parte este artículo 2º— se violenta el principio de la ley previa, el principio de reserva, en la medida en que el ciudadano no sabe a qué atenerse en lo que respecta a su propio futuro.

Hasta ahora, mientras existía una pauta...

**Sr. Presidente (Pierri).** — La Presidencia ruega a los señores diputados que guarden silencio, ya que no se puede continuar con el murmullo.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Corrientes.

**Sr. Garay.** — Decía que con la ley vigente, quien aportaba sabía por qué lo hacía y cuánto percibiría. Por lo menos, tenía una expectativa, que a veces se cumplía y otras no, pero no decaía su derecho a percibir el 82 por ciento de lo que cobra un activo. Esa es la diferencia entre el estado de derecho y el estado autoritario.



En todo caso ese principio de reserva o de ley previa permite al ciudadano vislumbrar lo que sucederá con su propia vida y lo posibilita asimismo para tomar decisiones en resguardo de su ancianidad, como en el caso de cualquier ley de jubilaciones. Pero cuando la norma que se pretende sancionar establece que no habrá movilidad y que no se pagará un centavo más de lo que el presupuesto prevé para ese fin, lo que estamos creando es un derecho al revés; no el que surge de la propia norma, a la que se aferra el ciudadano, sino el que vendrá de la autoridad, el imperio del rey o la voz del príncipe, que podrá establecer cuál ha de ser la prestación. Todo esto hace imprevisible el futuro de quien contribuye.

A esto se le llama autoritarismo, por contraposición a lo que es el estado de derecho. En uno el individuo nada le debe a la autoridad sino a la ley porque no depende de la buena voluntad de aquélla; depende de la ejercitación de sus derechos ante un poder que es capaz de hacerle cumplir al propio Poder Ejecutivo las normas que rigen en la materia.

Entonces, si a esta norma se le agregan disposiciones que agravan mucho más la situación, como son las que regulan las sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien haga sus aportes sólo sabrá cuánto va a percibir según el momento en que se jubile. Esa persona podrá haberse jugado la vida en una actividad, con eficiencia y a favor del crecimiento del país, pero llegada su pasividad tendrá que recibir por piedad o por dádiva lo que por derecho no podría negársele de ninguna manera.

De esta forma advertimos que se invierte no sólo un régimen jurídico determinado, como puede ser el de las prestaciones jubilatorias, sino un mecanismo constitucional. Ahora todo llega a la Corte, a diferencia de los otros mecanismos en que a la Corte se llega sólo por una cuestión de inconstitucionalidad o por casos especiales de recursos ordinarios cuando el monto así lo justifica, de acuerdo con una ley que tampoco me parece constitucional pero que está vigente. Entonces, como ahora todo llega a la Corte —repito una vez más—, ésta va a terminar sancionando una ley porque sus fallos deberán ser obligatoriamente seguidos por los jueces de primera instancia. Es decir, la norma resultante de la sentencia va a ser aplicable *erga omnes*, esto es, contra todos.

Sabido es que toda resolución judicial termina resolviendo un conflicto individual entre dos o más partes; pero aquí damos a la Corte

Suprema de Justicia de la Nación la calidad de legislador. Cuando la Corte resuelva un solo caso de los que establece esta norma, en adelante no tiene sentido el litigio o la controversia, no tiene sentido que las partes lleguen a un proceso que siempre significa costos, ya sea materiales o morales, por el disgusto que implica todo pleito judicial.

Estamos invirtiendo el sistema republicano porque nos estamos apartando del mecanismo de división, independencia y contralor de los poderes. ¿Quién va a poder controlar ese mecanismo cuando la Corte exprese en una sentencia un determinado fallo que va a ser absolutamente inapelable a menos que se modifique la ley?

Coincido con lo manifestado por el señor diputado González Gaviola y me dirijo especialmente a la mayoría y a la oposición: no dejemos que esta norma se sancione. Aquí no estamos hablando de una oposición sistemática porque nuestra actuación es conocida en apoyo de lo que creemos conveniente, pero también tenemos la suficiente vehemencia para contrarrestar lo que consideremos lesivo para el sistema republicano.

Por lo expuesto, el Pacto Autonomista Liberal va a votar en contra de esta norma que pretende entronizar un sistema autoritario, aniquilar el estado de derecho y perjudicar el sistema republicano de gobierno convirtiéndolo en una monarquía.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

**Sr. Polino.** — Señor presidente: en primer lugar quiero aclarar que voy a hablar en nombre del bloque Unidad Socialista —Honestidad, Trabajo y Eficiencia—.

En segundo término, dejo constancia de que hacemos nuestras todas las argumentaciones formuladas por el señor diputado González Gaviola, las que suscribimos íntegramente, así como también las expresiones vertidas por el señor diputado Garay que pertenece a un partido político que muchas veces se encuentra en las antípodas de las ideas del socialismo. En este caso concreto coincidimos plenamente con lo que acaba de señalar el señor diputado preopinante en defensa del estado de derecho, de las instituciones y de los sectores sociales más desprotegidos.

Quiero utilizar algunos argumentos de la Comisión de Previsión Social de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, institución a la que me honro en pertenecer, como seguramente también ocurrirá con muchos señores diputados de diversas bancadas políticas, pues es un cuer-

po colegiado pluralista en el que se reflejan todas las posiciones políticas, inclusive las que están representadas en esta Cámara.

Me voy a permitir comentar algunas consideraciones hechas por esta asociación ya que robustecen la tesis de los que sostenemos que con la aprobación de esta ley esta noche estaremos mutando al sistema jubilatorio estatal.

Los diputados tenemos una gran responsabilidad que va más allá de nuestra presencia en esta Cámara, porque de lo que hagamos o dejemos de hacer va a depender la suerte de millones de argentinos que seguramente nos van a demandar no haber asumido el comportamiento histórico que deberíamos haber adoptado, actuando sin seguir las presiones inaceptables del Poder Ejecutivo nacional, que ha tratado de desprestigiar a esta institución de la República. Así han comenzado algunos otros presidentes americanos, que luego terminaron dando un zarpazo a las instituciones legislativas; ahora están gobernando sin la incomodidad de escuchar las voces disidentes. Ocurra que existan fuerzas a los que les molesta la oposición y, si por ellos fuera, hoy tal vez no estaríamos sentados en este recinto.

El socialismo ha participado de extensas luchas en defensa de los derechos de los trabajadores, de los jubilados y de los pensionados, a los que no podemos tirar gratuitamente por la borda. No nos hacemos ilusiones con la introducción de algunas modificaciones positivas que propician de limitadas bancadas con respecto a este proyecto de ley. Ello es así por la sencilla razón de que el Poder Ejecutivo ha hecho uso y abuso no sólo de los decretos de necesidad y urgencia, sino también del veto. Lo que hoy por la tarde se acuerde en esta Cámara como positivo o por lo menos, como una transacción que en alguna medida va a contemplar los intereses de la clase pasiva, podría ser burlado mañana por el Poder Ejecutivo mediante el ejercicio del veto parcial, que es una atribución nueva que se ha agregado indebidamente, porque las normas jurídicas deberían volarse o promulgarse globalmente.

El veto parcial significa dejar en vigencia el artículo que lo contiene al Poder Ejecutivo y anular aquél con el que no está de acuerdo. Ello constituye una violación de la estructura constitucional vigente. Lamentablemente, luego el Congreso no ha utilizado el recurso constitucional de la insistencia para hacer prevalecer su punto de vista.

Nosotros hemos votado el proyecto en general por la negativa en el mes de diciembre de 1984. Hoy también lo haremos con cada uno de los

artículos, y por eso queremos que las votaciones sean nominales y que el señor presidente ordene la publicación de la lista de cada votación en algún medio de prensa, a fin de que la opinión pública registre sin ninguna duda quién estuvo a favor de este proyecto, que es la culminación de un conjunto de normas jurídicas que ha tomado el Poder Ejecutivo para liquidar el sistema jubilatorio estatal, como lo afirmé en la interpelación al señor ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos sin que haya sido desmentido.

Todavía estamos a tiempo de que algún legislador del oficialismo anotado en la lista de oradores explique en qué lugar de la Tierra un Poder Ejecutivo como el nuestro, que luce gala de sus logros y exhibe como un éxito la reforma del Estado por haberlo desburocratizado, dinamizado y haberlo hecho más eficiente, hace propaganda luego en favor de un sistema jubilatorio privado en perjuicio de otro estatal del cual es responsable de su eficacia o ineficiencia.

El sistema de reparto presenta muchos defectos, pero por culpa de los pésimos gobiernos anteriores que utilizaron los recursos de los trabajadores destinados a los jubilados para finalidades que en nada se relacionaban con el sistema previsional.

En ningún país del mundo, ya sea con gobiernos liberales, conservadores, socialdemócratas o socialistas, el Estado ha renunciado a sus obligaciones en el ámbito de la seguridad social. Ese es un deber irrenunciable del Estado, y en la Argentina es una garantía constitucional establecida en el artículo 14 bis de nuestra Carta Magna, que no ha sido alterada por los convencionales constituyentes en la última reforma.

Al comienzo de mi exposición señalé que iba a utilizar argumentos de la Comisión de Previsión Social de la Asociación de Abogados de Buenos Aires. Esta asociación señala: "Desde 1981 en adelante, el incumplimiento del Poder Ejecutivo al régimen de movilidad establecido en la ley 18.037, provoca los reclamos por reajustes de las jubilaciones en sede judicial." Esta es la razón de los actuales reclamos.

Continúa diciendo: "Esta constituye la única solución individual posible dentro del marco legal. En lugar de cumplir con la movilidad de las prestaciones, en forma automática y para todos los beneficiarios, las distintas administraciones prefieren confiscar, pleitear y luego de muchos años terminar pagando menos de lo debido, a algunos decenas de miles de jubilados, ganándose las diferencias de los millones de beneficiarios que nada reclaman." Este es un aspecto

sustancial. Hablamos de los que van a la Justicia en reclamo de sus derechos, pero hay millones que por diversas razones, incluso por desconocer que les asiste el derecho, no utilizan la vía judicial y el Estado se queda con esos recursos.

La asociación agrega que se producen los juicios para solucionar confiscaciones masivas y se ve a los abogados como a los cultores de la "industria del juicio", cuando lo único que hacen es patrocinar a sus clientes que buscan amparo ante la Justicia.

Prosigue su argumentación de esta manera: "La falsedad de esta idea es demasiado evidente. En ningún lugar del mundo un jubilado tiene que hacer un juicio para que le paguen la movilidad que le corresponde. Entendemos que sería absurdo obligar a los trabajadores a pleitear para cobrar sus salarios, como es ridículo pretender que se reajusten los haberes previsionales en el ámbito judicial, cuando es la administración del sistema previsional el órgano natural para esos fines."

Luego agrega: "Si una sentencia reconoce créditos fundados en la inconstitucionalidad de las normas vigentes y no existe una previsión presupuestaria para su pago, aquélla no debe cumplirse." Así se establece en el proyecto de ley. Esto quiere decir que la prevalencia de la Constitución Nacional queda supeditada a la ley de presupuesto, y sólo lo que ésta contemple deberá cumplirse. Cualquier derecho constitucional de un particular estaría sujeto para su cumplimiento a la previsión presupuestaria. En síntesis, la ley de presupuesto pasa a ser la ley suprema de la Nación en reemplazo de la Constitución Nacional, la que es bien clara al garantizar las jubilaciones móviles.

Quiero señalar que las jubilaciones móviles no están relacionadas con la desvalorización del signo monetario ni con los procesos inflacionarios, como sostiene capciosamente algún ministro del Poder Ejecutivo, queriendo así engañar a la opinión pública. Aquella movilidad está basada en la norma constitucional; para corroborarlo basta acudir a las fuentes de la Convención Constituyente que aprobó la disposición respectiva, según la cual las jubilaciones y pensiones tienen que moverse en función de los salarios que perciben los trabajadores en actividad.

Por otro lado, si bien desde el plan de convertibilidad la paridad cambiara se mantiene en la misma relación —un peso vale un dólar—, el costo de vida ha aumentado más de un 62 por ciento. Esta situación, que no fue contemplada en los salarios que perciben los trabajadores sino en una mínima parte, a raíz de

las cláusulas constitucionales debió haberse reflejado en las retribuciones de la clase pasiva. Estamos queriendo engañarnos a nosotros mismos y al conjunto de la sociedad con respecto a normas muy claras que no dejan lugar a la más mínima controversia doctrinaria o jurisprudencial.

La Comisión de Previsión Social de la Asociación de Abogados de Buenos Aires también dice lo siguiente: "El nudo de la discusión ANSeS - Cámara de Seguridad Social consiste en determinar si luego de la ley 23.928, de convertibilidad, el mecanismo de movilidad del artículo 53 de la ley 18.037 ha quedado derogado por el artículo 8º de aquélla. Para la ANSeS la movilidad de las prestaciones es una indexación prohibida por la ley. Si los haberes de los activos no se hubieran movido en el período abril 1991 hasta octubre 1993, no habría discusión posible, ante la evidencia de la estabilidad salarial. Pero lo cierto es que la misma encuesta elaborada por la Secretaría de Seguridad Social muestra hasta ahora un incremento en los salarios de los activos del 64 por ciento, pero conforme al mecanismo de movilidad del citado artículo 53 este aumento debería trasladarse a los pasivos. Podemos considerar que el Estado dejará de pagar cientos de millones de dólares si triunfa la tesis del Poder Ejecutivo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el famoso "caso Benito". A esto habría que agregar el último fallo que se acaba de conocer.

Y continúa: "En concordancia con lo anterior, en el nuevo proyecto de Confiscación Previsional se propone la inmovilidad de las prestaciones en caso de movilidad de las remuneraciones de los activos o movilidad del sueldo individual en actividad. En consecuencia, debe derogarse por ley el antiguo principio previsional consagrado por la Corte sobre 'la debida proporcionalidad entre el haber de pasividad con el de la actividad', 'el carácter sustitutivo' que aquél tiene y el molesto artículo 14 bis de la Constitución que consagra la movilidad de las prestaciones."

Agrega luego: "En un alarde de acrobacia constitucional se proyecta además transformar en federal a la legislación previsional, a pesar de lo establecido en el artículo 75, inciso 12, de la Constitución Nacional. De este modo, la Corte puede actuar como tribunal de apelación - casación y tendrá bajo su dependencia jurisprudencial a la Cámara de la Seguridad Social. No se tiene en cuenta que los jueces de ese tribunal se limitan a aplicar la doctrina de la Corte y que adoptaron los métodos de rea-

justos ya elaborados por la Cámara de Apelaciones del Trabajo."

Hace pocos meses juramos las reformas introducidas a la Constitución, que en el inciso 12 del artículo 75 establece que corresponde al Congreso dictar los códigos Civil, Comercial, Penal, de Minería, y del Trabajo y Seguridad Social, en cuérpos unificados o separados, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales y provinciales, según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones.

En los últimos tiempos y de manera confusa se le ha dado carácter de superley a esta norma que en realidad no la tiene, ya que dentro de nuestro ordenamiento jurídico es la Constitución Nacional la única que tiene un rango superior. Por lo tanto, no corresponde supeditar el resto de las leyes a normas que no tienen un carácter jurídico superlativo. La única superley de la cual todos debemos ser esclavos en su cumplimiento es la Constitución de 1853 con las reformas subsiguientes.

Lamento no disponer del tiempo necesario para demostrar que el Poder Ejecutivo es el único y exclusivo responsable del desfinanciamiento de las cajas de jubilaciones.

Hoy, con el proyecto que esta Cámara votará, estaremos sepultando definitivamente el sistema jubilatorio estatal o de reparto. De ese modo los millones de argentinos jubilados o a jubilarse quedarán a merced de empresas privadas que de la jubilación sólo harán un buen negocio financiero. Una vez más el Estado argentino ha claudicado a sus deberes irrenunciables como es el de proteger y defender la seguridad social. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Natale. — Señor presidente: es por todos conocida nuestra posición coincidente con las importantes transformaciones económicas que se han realizado en el país. Así mismo, muchas veces hemos dicho que valoramos los esfuerzos que este gobierno hizo para atender la deuda que se mantenía con todos los integrantes del sistema previsional que durante muchos años se había acumulado y que se pretendió solucionar a través de los bonos de consolidación, que fue la única posibilidad de reparar largos años de desajustes entre las jubilaciones que se tenía derecho a cobrar y las efectivamente percibidas.

Valoramos también el esfuerzo que se hizo para encontrar un nuevo mecanismo previsional distinto al anteriormente vigente. De todos mo-

dos cuando se discutió la ley 24.241 señalamos que no la considerábamos la vía adecuada y formulamos críticas al régimen establecido por dicha norma.

La demostración cabal de que esa ley no resolvió los problemas previsionales —como se la pretendió presentar en aquel momento— son estas reformas que ahora estamos discutiendo, que además son distintas a lo que había propuesto el Poder Ejecutivo a fines del año pasado, y que constan de una serie de quitas y de emiendas realizadas a última hora. Este hecho me llevó a preguntar a la Presidencia cuál era efectivamente el texto que se estaba discutiendo en particular, porque tengo dudas acerca de la fidelidad de los tres ejemplares que obran sobre mi banca.

También tenemos conciencia cabal de las dificultades presupuestarias por las que atraviesa el gobierno nacional. Lo dijimos en el debate del proyecto de ley de presupuesto. Frente a la alegría del Ministerio de Economía, que nos presentaba un presupuesto equilibrado, señalamos el déficit que estaba encubriendo y las prevenciones que teníamos para el cumplimiento de las metas fiscales en 1995. De manera tal que lo que decimos no es producto de un desconocimiento de las dificultades económicas que el Estado nacional afronta en 1995.

Introducir una reforma como la que propone el artículo 2º de este dictamen significa lisa y llanamente terminar con la garantía del Estado para aquellos que hubiesen adherido al sistema público previsional; es decirles a los jubilados y pensionados: señores, les pagaré lo que quiera y lo que pueda, y mis compromisos, mis obligaciones, no llegarán más allá de lo que anualmente disponga pagarles en función de lo que establezca la ley de presupuesto. Evidentemente esto está reñido con la ética política esencial con la que el Estado debe tratar a sus ciudadanos. El Estado no puede crear un sistema previsional y luego desbaratarlo por decisión unilateral; no puede crear expectativas que luego se transformen en realidades negativas como consecuencia de las decisiones que presupuestariamente se adopten. Ya no es el Estado que no paga las obligaciones que eventualmente tuviera que atender porque no tiene recursos, sino que es el Estado que unilateralmente dice: mi obligación de pago no va más allá de lo que yo, por mi cuenta, disponga que se debe pagar. Evidentemente este artículo 2º es un ejemplo de lo que no puede hacer el Estado en su relación con los ciudadanos que lo integran.

Por estas razones, que coinciden con lo que exponía hace un instante el señor diputado

ray, y por otras que aquí se han hecho valer, en nombre del bloque Demócrata Progresista, del Movimiento Popular Jujeño y del bloque del Partido Autonomista de Corrientes anticipo nuestro voto negativo a este artículo 2º y a la mayor parte de los artículos que integran el proyecto en consideración. (Aplausos.)

**Sr. Presidente (Pierri).**— Tiene la palabra el señor diputado por Capital.

**Sr. Rodríguez (Jesús).**— Señor presidente: tengo la convicción de que estamos frente al tratamiento especial de un tema muy sensible. Especial por muchas razones; en primer lugar, porque desde el restablecimiento de la democracia en diciembre de 1983 no recuerdo un proyecto de ley que haya tenido este tratamiento desdoblado en la Cámara de Diputados, o que haya merecido la discusión y el análisis que tuvo en distintos momentos, con diferencia de meses.

Recordemos que esta norma apareció en la Cámara aquel 3 de noviembre del año pasado cuando el señor ministro de Economía compareció en este recinto.

La segunda razón por la cual el tratamiento es especial es porque a nadie se le escapa que en momentos en que el tema del déficit fiscal está en el centro de la discusión, la implicancia que sobre el conjunto del gasto público tienen los aspectos vinculados con el sistema previsional hace que sin ningún tipo de dudas la discusión que estamos dando en la Cámara tenga repercusiones en el mercado financiero, en el nivel de tasas de interés y en las expectativas que los distintos actores económicos tienen sobre el futuro inmediato de la Argentina. Y la tienen sin ninguna duda por el contexto internacional en que esta discusión tiene lugar.

Estamos hablando de una cuestión que repercute sobre el gasto público, que tiene que ver con el déficit fiscal de un país como la Argentina, que necesita varios miles de millones de dólares al año que deben ser tomados en el mercado internacional para equilibrar las cuentas.

Otra razón por la cual es especial se debe al hecho de que tampoco recuerdo una norma que haya involucrado tan directamente a los tres poderes del Estado. Por dos razones y por dos episodios esta normativa implicó a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Lo hizo cuando en el mes de diciembre el Poder Ejecutivo sancionó un decreto que —como fue señalado por el señor diputado Gauna la semana anterior— era manifiesta y claramente inconstitucional. Tanto era así que la Cámara de la Se-

guridad Social, luego de que el señor diputado Gauna planteara en nombre de la Unión Cívica Radical esa característica del decreto en este recinto, en esta semana coincidió con la posición del radicalismo y determinó la inconstitucionalidad de la norma.

El segundo momento en el cual este tipo de cuestiones involucra al Poder Judicial radica en el bien conocido reclamo formulado por el doctor Massaccesi, gobernador de la provincia de Río Negro, en términos del desvío de fondos calculados y aprobados por nosotros, que ascendía a alrededor de 5.200 millones de dólares y que el conjunto de las provincias había cedido para el sistema de la seguridad social, que todavía no sabemos qué destino han tenido; lo que sí sabemos es que no fueron recibidos por el sistema de la seguridad social.

Sabiendo la especial significación que tiene este debate hoy en la Argentina, luego del 20 de diciembre del año pasado y lo que pasó en México, después de tanta discusión acerca de si la Argentina era o no parecida a México, estoy seguro de que después de que la administración Clinton dispuso la asistencia financiera de 50 mil millones de dólares a México, a nadie en la Argentina se le ocurrió pensar que nuestro país era México; claramente no lo era.

Sostenemos desde la Unión Cívica Radical, con enorme responsabilidad no exenta de firmeza y con la cautela que no omite la claridad en la fijación de posiciones, que no vamos a recorrer el mundo diciendo que no hay que prestar a la Argentina, ni vamos a pedir a los organismos internacionales de crédito que suspendan los préstamos financiados para nuestro país, y tampoco manifestar que el déficit no importa; pero sí vamos a recorrer el camino que es equidistante entre el crédito que puede llevar a complicaciones al conjunto de los argentinos —me importa poco el gobierno—, y el silencio que podría ser interpretado como complicidad frente a una situación por demás difícil como la que vive la Argentina.

El ministro estuvo en este recinto en noviembre del año pasado y básicamente nos dijo dos cosas: que había problemas en el sistema de la seguridad social y que ellos estaban originados en los juicios. Le demostramos con números oficiales de la ANSeS que ello era falso, que los juicios que involucraban a ciudadanos que reclamaban haberes por más de dos mil pesos era sólo el uno por ciento de los que se estaban tramitando y que tenían sentencia firme de cámara.

Nos dijo también que no había problemas fiscales, que la recaudación crecía, que el gasto estaba controlado; pero todo eso es falso. En enero y febrero cayó la recaudación, no se controló el gasto y todos los actores económicos de la Argentina saben que hay un problema fiscal en ciernes. Si alguien piensa que tal problema fiscal se resuelve de esta manera se equivoca.

Mi compañero de bancada, el señor diputado Dumón, se refirió a las declaraciones del ministro. Quien habla no podría hacerlo mejor que él. Pero me gustaría agregar algunos comentarios porque francamente creo interpretar la reacción de muchos de los colegas sentados en las bancas cuando escuchamos tan reiteradamente de boca de funcionarios del equipo económico que siempre el problema está en otro lado. A veces el problema es culpa de las provincias, y en otras oportunidades las complicaciones están originadas en la demora y vagancia de los señores legisladores, en el capricho de los jueces, en México, en el sector externo o en la economía internacional; nunca he escuchado decir al señor ministro o a algún funcionario del equipo económico que hubieran cometido un error.

Hoy nos encontramos ante la situación de que hay que bajar el gasto en todos lados. Se reducen las asignaciones presupuestarias en educación y en salud; se condena sin juicio y sin números sobre la mesa a todas las administraciones provinciales. Todos sabemos quién es un buen administrador en cada provincia y cada municipio, y quién no lo es. Hay un solo ciudadano que no tiene responsabilidad alguna, que maneja en forma impecable los recursos públicos y que a través de los últimos avisos publicitarios nos insta a pagar los impuestos porque esa plata se destina a fines nobles.

Voy a dar algunas cifras. Entre 1991 y 1995 el gasto del conjunto de las provincias argentinas creció el 80 por ciento. La fuente es el presupuesto de cada una de las jurisdicciones. Es verdad que se trata de una cifra preocupante; hay que gastar menos y ahorrar más. Es una ley de hierro en una economía familiar y por lo tanto mucho más en la economía de un país y en la hacienda pública.

Veamos ahora cómo ha gastado el Poder Ejecutivo nacional. Todos sabemos —y nadie va a sonrojarse o asustarse por esto— que el presidente de la Nación es un hombre que tiene un estilo dispendioso para asignar el gasto público. Todos conocemos los gastos que se han efectuado en helicópteros, en aviones, así como en la quinta de Olivos, en la Casa Rosada y en Chapadmalal. Entre 1991 y 1995 el gasto de la Pre-

sidencia de la Nación aumentó un 38 por ciento, es decir, menos de la mitad que las provincias. La fuente es el presupuesto de la Nación Argentina. Por su parte, el gasto del conjunto de la administración nacional —que incluye a todos los ministerios y a la SIDE, que gasta mucho— aumentó un 50 por ciento.

La pregunta que merece ser respondida es cuánto aumentó el gasto de la jurisdicción Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación entre 1991 y 1995. La respuesta es que se incrementó en un 92 por ciento. El ciudadano que ejerce el cargo de ministro de Economía y que con ese tono admonitorio algunas veces, y autoritario las más, impone normas y conductas a todos —a las provincias, al Poder Judicial, a los maestros, a los investigadores científicos—, es el que más gasta en la Argentina. Es la jurisdicción que más aumentó el gasto público en los últimos cuatro años: de 1.850 millones de pesos en 1991 pasó a más de 3.500 millones en 1995.

Sr. Presidente (Pierri). — La Presidencia advierte que ha vencido el tiempo de que dispone el señor diputado para hacer uso de la palabra.

Sr. Rodríguez (Jesús). — Señor presidente: solicito autorización para extenderme unos minutos.

Sr. Presidente (Pierri). — Si hay asentimiento, así se hará, se prorrogará su término, señor diputado.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Pierri). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Rodríguez (Jesús). — Señor presidente: está claro que hay que gastar menos. Desde este bloque ya sugerimos que hay que poner atención en los 220 millones de dólares que se destinan por año a los gastos de Inteligencia, sin rendición de cuentas. Predicamos la necesidad del control porque sería bueno que en la Argentina tuviéramos lo que tienen muchos países desarrollados del mundo, como Alemania y Estados Unidos, donde una comisión del Congreso controla el gasto reservado. Por supuesto que hemos insistido en que esta cifra debe ser revisada porque es realmente inaceptable; también insistiremos en que debe haber control, porque hoy no hay absolutamente ninguno.

En momentos de gran dificultad como los que atraviesa la Argentina, cuando hay una oposición que, entre el grito que puede complicar la situación de los argentinos y el silencio cómplice, opta por el camino intermedio, lo primero que hay que hacer es restablecer la confianza, y ello se hace desde el Poder Ejecutivo, empe-



zando por reconocer el estado de derecho y el equilibrio de los poderes, y por no desacreditar a todos y cada uno de los que piensan de manera distinta a los funcionarios de dicho poder. Estos deben entender que hay que terminar con esta democracia de un solo poder, que hay que respetar la existencia de la democracia republicana, del equilibrio de los poderes, que es inaceptable e insostenible que se pretenda hacer crecer al mundo que debe invertir en la Argentina, que debe prestar dinero a la Argentina porque hacen falta más de 10 mil millones de dólares este año, cuando simultáneamente se intenta resolver los problemas fiscales de la mano de un decreto inconstitucional.

Los señores diputados tienen que saber que no tenemos ningún sentimiento de culpa; no tenemos que ir al analista o psicólogo de la política, como si hubiéramos sido nosotros los responsables de la destrucción del sistema público de reparto. Nosotros no votamos afirmativamente esta ley. Si alguien tiene que ir a consultar al Freud de la política, que vaya; no será la Unión Cívica Radical. En ese sentido, tanto las imputaciones que con alguna ligereza, y las sugerencias políticas que con alguna irresponsabilidad se hacen, valen para otros y no para los hombres de la Unión Cívica Radical.

Después de tantas cosas que se dicen y que se leen en los diarios, después de tantos comentarios que aparecen publicados por ahí, aclaro que si después de aprobarse esta norma nos preguntan si los jubilados van a ganar más plata de la que ganan hoy, diremos rotundamente que no. No van a ganar más. ¡Y en buena hora que hemos podido evitar que se sigan erosionando los recursos del sistema de seguridad social!

Si nos preguntan si el sistema público de reparto será más sólido y confiable con esta norma, también responderemos negativamente. Lo cierto es que se sigue haciendo crecer desde el Poder Ejecutivo el negocio de las AFJP.

Por último, hay una norma por la que se pretende allegar recursos al sistema de la seguridad social, en detrimento del INDER, que está en liquidación. Es una correcta decisión, aunque hubiéramos querido que fuera el total de los recursos y no sólo la mitad.

Pero quiero llamar la atención sobre un hecho determinado: todos los que estamos aquí hemos leído los diarios y no hemos podido encontrar a ningún funcionario responsable de las maniobras del INDER. Seguimos por todos los medios las acciones, las actuaciones de un juez; conocemos los detenidos, sabemos los procedi-

mientos y estamos al tanto de todos los pasos procesales. Reitero: estamos hablando de 600 millones de dólares que un conjunto muy reducido de funcionarios —cuatro— distribuyó de manera discrecional y arbitraria entre muy pocas compañías de seguros en el lapso de dos años. ¿Saben cuál es nuestra preocupación? Que uno de esos funcionarios, removido de su cargo precisamente por supuesta responsabilidad por acción u omisión en la utilización discrecional y arbitraria de esos 600 millones de dólares, está hoy como responsable de la administradora de fondos de jubilaciones y pensiones del Banco Nación.

Nuestra preocupación es múltiple porque desaparece el sistema público de reparto y los mismos funcionarios que dilapidaron 600 millones de dólares —no sabemos qué hicieron con ese dinero— ahora pretenden manejar la AFJP del Banco Nación. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.

Sra. Fernández Meijide. — Señor presidente: costaría muchísimo argumentar todavía más en contra de esta iniciativa.

Quiero recordar algunas expresiones que se han vertido en este recinto, como las del señor diputado Jesús Rodríguez cuando mencionó la extensión de los involucrados e interesados en este tema. A esta enumeración hay que agregar el sujeto principal, que no son los funcionarios ni el gobierno ni la *city* ni los interesados del exterior en invertir —a los cuales no desprecio en absoluto—, sino nada más y nada menos que la población pasiva actual, la del futuro e incluso los legisladores aquí sentados que hayamos elegido uno u otro sistema de jubilación. Salvo que fabriquemos o tengamos algún bien especial que garantice nuestro futuro, nuestra propia jubilación se verá implicada.

Como conozco bastante el tema de nuestros derechos, quiero hacer una reflexión en este sentido: ni aun nuestra condición de legisladores nos salvará de las consecuencias que acarreará seguir posponiendo la decisión ética a la ventaja personal.

No voy a referirme a los argumentos expresados por la bancada justicialista, que ha tomado una decisión política y por eso está aquí, a pesar de que muchos de sus miembros rechazan esta norma tan fuertemente como nosotros. Allá ellos con su conciencia y su disciplina partidaria.

Apelo a quienes tan brillantemente han argumentado en contra de esta iniciativa. Estamos hablando de personas que con la sanción de esta norma se encontrarán en situación de debili-

dad; ya señalé en forma detallada el nivel de debilidad que alcanzarán.

Solicito a la Presidencia que llame la atención de los señores legisladores para que escuchen a quien está en el uso de la palabra, tal como lo hizo con oradores anteriores. Además sugiero que la Presidencia empiece por sentar el ejemplo.

Espero que no se esté dando quórum en función de ceder al chantaje, cuando se acusa erróneamente de que los diputados no queremos trabajar. Aquí siguen sin estar los legisladores que nunca están. Otorgar o no quórum es una movida política legítima cuando está en juego el interés público, que ha sido explicado por todos los que me precedieron en el uso de la palabra. Por ello el Frente Grande, representado por el bloque de Alternativa Federal, esperaba que no se formase el quórum. Había decidido no ingresar al recinto mientras el quórum no estuviese constituido. Nuestra representación numérica todavía no incide, desgraciadamente, sobre las decisiones de esta Cámara. No sucede lo mismo con otras bancadas.

Los argumentos tan fuertemente esgrimidos en este recinto nos habilitarían para que, preocupándonos por el interés general de un sector tan grande de la población, nos retiráramos de este recinto, no permitiéramos la sanción de este proyecto y forzáramos una nueva discusión. Ninguno de los representantes del bloque Alternativa Federal tiene una posición *guru*. No estamos en la oposición por la oposición misma. Sabemos que hay que hacer modificaciones, pero no queremos que se perjudique a tanta gente, como se lo va a hacer.

Esta norma que se pretende aprobar marca la diferencia entre lo que es una medida de gobierno y una medida de Estado. Un gobierno puede intentar salvarse y esgrimir, aunque sea implícitamente, una razón de Estado, pero no existe ninguna política de Estado cuando se compromete el futuro de un sector del país que, si los jubilados sobreviven, está en crecimiento.

Entonces apelo a la postura ética y de principios. Es muy difícil dar credibilidad a determinados argumentos cuando se solicita la aprobación de un proyecto con estas características. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Sueiro. — Señor presidente: quiero ser breve porque, en definitiva, no se ha planteado ninguna modificación al artículo en consideración.

Sr. Presidente (Pierri). — El señor diputado Santín si lo ha hecho. ¿La va a aceptar, señor diputado?

Sr. Sueiro. — No, pero quisiera seguir avanzando en mi exposición.

Quería señalar que he escuchado discursos que realmente parecerían estar referidos a otros proyectos de ley. Ha existido un discurso y una retahíla permanente vinculada con el sistema de reparto. Un sistema previsional en definitiva es una herramienta, un mecanismo o un instrumento que tiene por finalidad encontrar la solución a la contingencia social de la pasividad.

Ese es el objetivo de cualquier sistema previsional, que puede ser de reparto puro, de capitalización, mixto, de seguridad social, de seguro social, japonés o cualquier otro que se quiera señalar. Ahora resulta que nuestro sistema de reparto adquiere la categoría de un dogma. Hoy parece ser una verdad revelada, que no puede ser corregida. Cuando se observa el sistema de reparto vigente y se lo analiza a la luz de la situación de nuestros jubilados, sin duda se advierten serias falencias que van desde una jubilación mínima de 150 pesos hasta decisiones judiciales que han llegado al dislate de otorgar haberes de 10 mil pesos o más. Reparemos en que una jubilación de esa magnitud representa más de 70 veces un haber de 150 pesos.

Supuestamente dicen que este es un sistema solidario. Me pregunto dónde está la solidaridad, la justicia y la equidad de este sistema de reparto, que elevamos a la categoría de dogma. Este sistema no tiene tales virtudes; aparecen, en el principio, en la enunciación, en el discurso, pero no en la realidad. Este no es un sistema solidario; sólo fue fundado como tal.

Quienes defienden este sistema con tanto ahínco sostienen que lo vamos a condenar a muerte, que lo destruiremos; pero ello ocurrirá si no lo modificamos, si lo dejamos tal como está. Esa es la única realidad y la que importa para nuestros jubilados.

En la historia de la República Argentina el gobierno que más fondos destinó al sector pasivo ha sido el actual. Nuestro gobierno destinó 14.250 millones de pesos para cancelar deudas generadas por otras administraciones. Esta es la realidad, y sin embargo dicen que no somos solidarios ni sensibles con nuestros jubilados. ¿En qué se basan para hacer esta afirmación?

Sr. Armendáriz. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con autorización de la Presidencia?

Sr. Sueiro. — No concederé interrupciones, señor presidente. He sido respetuoso cuando otros legisladores hicieron uso de la palabra y

por ello pido al señor diputado Armendáriz que tenga la amabilidad de esperar un poco.

Debemos corregir de una buena vez este sistema de reparto que —repito— tanto se defiende. Muchos sostienen que es necesario dignificar al Parlamento para que ocupe el lugar que le corresponde como uno de los poderes esenciales de la democracia, y justamente en virtud de la corrección de fondo que proponemos al sistema, anualmente el Congreso debe determinar, a través del presupuesto, los fondos que se asignarán al sector pasivo.

Este es el sistema más transparente y democrático. Entre todos los sectores políticos debatiremos cuánto asignaremos y de dónde se obtendrán los fondos para pagar a los jubilados y, fundamentalmente, determinaremos qué incrementos se otorgarán para evitar las distorsiones de este sistema supuestamente solidario. Podremos disponer incrementos para aquellos que perciben haberes de 150 pesos para que alcancen por lo menos los 450 pesos que establece la ley. Por su parte, los que ganan 5, 8 o 10 mil pesos tendrán que esperar. Eso es solidaridad; lo demás es verso, discurso y charla.

Me llama la atención que cuando hablamos de afectación de recursos algunos se rasguen las vestiduras y digan que estamos quitando garantías a los jubilados porque nos limitamos a los fondos que se originan y que expresamente prevé el presupuesto.

Voy a leer dos párrafos concretos de un tratadista del sistema previsional. Uno de ellos dice: "El sistema nacional de jubilaciones opera en un régimen de reparto, lo que significa que todas las sumas que se recaudan se aplican al pago de las prestaciones correspondientes a ese período, sin que exista posibilidad alguna de ampliar el gasto más allá de los recursos disponibles". El otro párrafo dice que "no son ilimitados los recursos disponibles, y no existe la posibilidad material de incrementarlos más allá de las previsiones presupuestarias". Esto significa sintéticamente, reafirmando lo que sostenemos nosotros, que los únicos recursos disponibles son los que fija el presupuesto nacional.

¿Sabe quién dijo aquello, señor presidente? No fue el presidente Menem ni el ministro Cavallo ni el secretario Schulthess; lo dijo el ex presidente Alfonsín...

**Sr. Matzkin.** — ¿Quién lo dijo?

**Sr. Susse.** — El ex presidente Alfonsín en el decreto 2.196/86, un decreto de necesidad y urgencia por el que se declaró la emergencia del sistema previsional argentino. Esto, que está bien, es lo que nosotros hoy queremos institucionalizar mediante una ley, pues en su mo-

mento quedó en medio del camino y se originaron deudas que terminamos pagando todos.

Estamos dispuestos a debatir aquí, entre todos los sectores políticos, cuánto vamos a otorgar anualmente a los jubilados para corregir las distorsiones producidas e incrementar el haber de los que menos tienen. Para ello haremos un seguimiento anual. Esta es la real, efectiva y práctica solidaridad.

Pensaba decir más cosas, pero lo que he manifestado es suficiente. Nuestro bloque está actuando no con presiones sino con la convicción de que el mecanismo para resolver la situación del sistema de reparto debe establecerse anualmente por este Congreso, con el fin de concretar definitiva y efectivamente la solidaridad que se reclama pero que hoy no existe. *(Aplausos prolongados.)*

**Sr. Presidente (Pierri).** — Se va a votar nominalmente el artículo 2º.

—Se practica la votación nominal.

**Sra. Secretaria (Pérez Pardo).** — Sobre un total de 197 señores diputados presentes, han votado 109 por la afirmativa y 82 por la negativa, registrándose además 5 abstenciones.

—Votan por la afirmativa los señores diputados: Abihaggle, Aceñolaza, Albamonte, Alcala, Alsogaray, Alvarez (C. R.), Alvarez Echagüe, Aragonés de Juárez, Aranda, Argüello, Arias, Arrechea, Ayala, Balestrini (A. E.), Balestrini (M. A.), Barberá, Barriounevo, Baum, Becerra (N. E.), Benzi, Bermúdez, Bianchi Silvestre, Borda, Bracchi, Branda, Bresser, Cámara, Camaño, Casari de Alarcía, Castillo (J. L.), Castro, Corchuelo Blasco, Costelli, D'Alessandro, Daud, Dellepiane, D'az Martine, Domni, Drisaldi, Durañona y Vedia, Durieu, Funes, García Moreno, Gazia, Giménez (R. F.), Gioja, Golpe (C. H.), González Cabañas, Granados, Green, Hardy, Herrera, Herrera Arias, Iturr, Kammerath, Kessler, Lafalla, Lahoz, Lamberto, Larraburu, Leguizamón, Llopis, López (J. A.), López Arias, Macedo, Manfredotti, Maqueda, Martínez (E.), Martínez (S. V.), Martínez Garbino, Matzkin, Mendoza (C. R.), Menem, Michelli, Migliozi, Miralles de Romero, Müller, Muniagurria, Nacul, Níño, Parada, Pérez, Pesce, Pichetto, Ré, Rodríguez (M. E.), Rodríguez Sañudo, Roggero, Rojo, Romero (C. A.), Romero (H. A.), Roy, Rubini, Ruiz Palacios, Salino, Sampietro, Scelzi, Sebastiani, Smith, Sucaria, Susse, Tenev, Togni de Vely, Toma, Toto, Valcarcel, Varela, Venesia y Zicarelli.

—Votan por la negativa los señores diputados: Alberti, Algaba, Alvarez García, Antelo, Armendáriz, Balestra, Balter, Becerra (C. A.), Benedetti, Berhongaray, Bischof, Bruzzo, Bussi,

Cabrón, Callaba, Campero, Carca, Castillo (O. A.), Ceballos, D'Ambrosio, D'Elia, Del Fabro, Dumón, Fabrissin, Fayad, Felgueras, Fernández Gill, Fernández Meijide, Figueroa, Folloni, Galante, Galván, Gauna, González Gaviola, Guzmán, Hernández, Ibarreche, Jaumarena, Juncosa, Kelly, Koth, Leconte, Lynch, Machado, Maidana, Marcos, Mathiev, Mercader, Mercado Luna, Molardo, Molinas, Morello, Muriel, Muñoz, Natale, Neder, Negri, Nieva, Olivera, Orgaz, Orquín, Ortiz Maldonado, Paezón, Pelaez, Pellini, Peralta, Pernasetti, Piccinini, Polino, Prat, Rodrigo, Roig, Santín, Storani, Teodosiu, Topa, Trottet Meyer, Troyano, Vázquez (R.), Vicchi, Viglione y Zuccardi.

—Se abstienen de votar los señores diputados: Brunelli, Digón, González, Humada y Escobar.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración el artículo 3º.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Armendáriz. — Señor presidente: en la revista que en 1992 editó la Secretaría de Seguridad Social —y que envió a todos los señores diputados— se consignaba que al 8 de julio de 1989 la deuda en materia previsional ascendía a 5 mil millones de dólares.

¿De dónde surgía este monto? Fundamentalmente surgió como consecuencia de lo acontecido en 1978, época en la que se modificó el sistema de liquidación de las jubilaciones; lo que trajo como consecuencia la generación de deudas.

Por ese motivo, cuando el doctor Alfonsín asumió la primera magistratura la deuda ya alcanzaba a los 2.500 millones de dólares, monto que se duplicó y llegó a los 5 mil millones.

En la revista aludida se señalaba que desde julio de 1989 hasta 1992 la deuda previsional se había incrementado en otros 2.500 millones, motivo por el cual el monto final ascendía a 7.500 millones de dólares.

La primera serie de Bocones intentó solucionar este problema, pero como se efectuaron liquidaciones incorrectas en las cuentas individuales de los jubilados, se generaron nuevas deudas, por lo cual se ha mencionado esta cifra del orden de los 13 o 14 mil millones de dólares. De todos modos rechazo la afirmación realizada en el sentido de que la mayor cantidad de deuda se originó en el período en el que el doctor Alfonsín fue presidente de la República.

También se ha hecho referencia al decreto firmado por el doctor Alfonsín mediante el que se paralizó el pago de los juicios previsionales. Con total honestidad intelectual debo asumir este error cometido por el entonces gobierno

radical por haber recurrido a ese tipo de procedimientos, pero no se puede gobernar la República copiando errores.

En el diario "Clarín" del día de la fecha se publica un artículo del doctor Germán Bidart Campos —cuya lectura recomiendo al bloque Justicialista— en el que señala que, mientras no se cumplimenten todos y cada uno de los puntos establecidos en el artículo 99 de la Constitución, se estará cometiendo una aberración jurídica y cayendo en una inconstitucionalidad, tal como ha ocurrido con el decreto de necesidad y urgencia número 2.392/94, al que también aludió el señor diputado Gauna en la reunión anterior y que con gran honestidad jurídica ha rechazado la Cámara de la Seguridad Social.

Recomiendo al gobierno que intente copiar los buenos ejemplos del pasado en lugar de reiterar antiguos errores, porque si la anterior gestión se ha equivocado no se puede transitar el mismo camino; hay que modificarlo y mirar hacia el futuro.

Coincidió con lo establecido en la primera parte del artículo 3º porque de esa manera se intenta reparar un error que cometimos. Esta es la forma de actuar cuando se comete una equivocación: volver atrás y revisarla.

Cuando en junio del año pasado sancionamos la ley 24.347 cometimos un error al incorporar a la ley 24.241 el artículo 24 bis, donde establecimos con gran sentido social la jubilación por edad avanzada porque no se hizo la corrección correspondiente del artículo 17, que detalla las distintas prestaciones. Entonces, en la parte primera de este artículo había que reparar este error del artículo 17.

Pero la segunda parte de este artículo realmente vuelve a incurrir en un error que se viene repitiendo a lo largo de toda esta normativa, y consiste en que se habla de que se van a establecer de acuerdo con la partida presupuestaria correspondiente los máximos y los mínimos. Esto es una utopía; es una expresión de voluntarismo.

El otro miércoles escuché que un distinguido diputado decía que esto de la determinación presupuestaria implicaba un avance manifiesto del Parlamento, que iba a poder fijar los montos correspondientes. Pero la práctica señala otra cosa: las cifras van a venir mandadas —y muy ajustadas— por parte del Ministerio de Economía, y si a este Parlamento se le ocurre modificarlas seguramente el artículo correspondiente va a ser vetado por el Poder Ejecutivo. Sabemos, por lo que ha ocurrido desde hace unos

años a esta parte, que este Poder Ejecutivo es de pluma fácil cuando se trata de observar leyes.

Recuerdo precisamente el 29 de noviembre del año pasado cuando tratábamos el presupuesto con profundo sentido social. Tuve una gran emoción cuando escuché que desde la propia bancada Justicialista se anunciaba una partida, es decir un nuevo artículo, incrementando en 10 millones de pesos los recursos, para este año 1995, del Hospital de Pediatría "Doctor Juan P. Garrahan". Lo que pasó con ese artículo es que el Poder Ejecutivo lo vetó, con lo que dicho hospital tiene que seguir con el presupuesto que vino del Poder Ejecutivo, que es exactamente igual al anterior. De manera tal que no hay ninguna posibilidad de que pueda brindar más y mejores servicios que los que presta en la actualidad.

Por eso, si bien acepto que en la primera parte del artículo es salvable el error, rechazo de plano su segunda parte y adelanto en este sentido nuestro voto negativo.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Santín. — Señor presidente: recién se refería el señor diputado Sueiro a que era bueno que el presupuesto determine específicamente cuánta plata tenemos para inyectar al sistema. Con respecto a este punto me parece que nadie se opone porque los gastos deben tener algún grado de previsibilidad. Pero nosotros ya votamos el presupuesto 1995, de modo que, en función de lo que decía el señor diputado Sueiro y tratando de adaptar este proyecto de ley al presupuesto que ya sancionamos, hoy deberíamos estar rediscutiendo el presupuesto 1995 porque nosotros lo votamos sobre otra base: el sistema jubilatorio era otro. No está previsto en el presupuesto 1995, por ejemplo, cuánta es la plata que vamos a dedicar al pago de las deudas; tampoco están previstos cuáles son los mínimos o los máximos del sistema.

Por lo tanto hoy deberíamos estar discutiendo el presupuesto 1995. Pero no ocurre así. Este no es un planteo nuevo. En todas las discusiones que hemos tenido sobre este proyecto nosotros dijimos: "traigamos el presupuesto 1995 junto a esta iniciativa y rediscutamos para poner límites en función de este nuevo ejercicio". Pero esto no fue así. Entonces, la solidaridad que planteaba hace un rato el señor diputado Sueiro se esfuma porque no hemos dicho cuáles son las jubilaciones mínimas.

Como aquí dice que el presupuesto señala los máximos y los mínimos, al no estar indicada la

jubilación mínima, en la práctica puede ser cualquiera.

En definitiva lo único que estamos determinando son las jubilaciones máximas, con lo cual coincidimos, pero también hay que dejar la hipocresía de lado. Hemos demostrado con números que si estableciéramos que ningún jubilado puede ganar más de dos mil pesos podrían dársele 2,75 pesos más a cada jubilado. ¿Esa es la solidaridad a la que se refiere el señor diputado Sueiro? Porque el tema de la solidaridad que se plantea este gobierno es especial. Siempre se la entendió como la que debe existir entre los jóvenes y los viejos, los sanos y los enfermos, los ricos y los pobres. Pero este gobierno modificó ese concepto, y ahora los pobres deben ser solidarios entre sí, los enfermos se tienen que arreglar como puedan y los jubilados tienen que ser solidarios con ellos mismos para sobrevivir. Entonces ésta es la discusión que debe llevarse a cabo sobre el concepto de solidaridad, en este régimen o en el que se establezca.

De allí que incluir un párrafo en este artículo por el que se determina que el presupuesto nacional fijará los mínimos y los máximos significa que estamos congelando los salarios de los jubilados por lo menos hasta el presupuesto del año 1996. Hasta ese momento no hay ninguna discusión. Se acabó, al menos por este año, la solidaridad. Por lo tanto frente a este tema nuestro bloque tiene una posición estricta.

El señor diputado Sueiro también se refirió al decreto de suspensión de los juicios dictado durante el gobierno del doctor Alfonsín. Ese decreto decía que no había dinero, y que por eso se suspendían los pagos; lo que no hizo fue suspender los derechos; los ciudadanos mantuvieron su derecho a reclamar al Estado. Es decir, no les cambiamos las reglas de juego frente al sistema previsional. Nadie perdió su derecho sino que, frente a una iliquidez momentánea, se les dijo que se postergaba el pago.

Este proyecto no sólo elimina los derechos sino que determina que recién se comenzará a pagar en 1996, pero siempre y cuando en el presupuesto nacional se incluya alguna partida para el pago de esas deudas; ése es el esquema solidario que plantea el señor diputado Sueiro y el bloque que integra. Por lo demás, el señor diputado Jesús Rodríguez formuló dos preguntas que el señor diputado Sueiro no contestó y que son las siguientes: ¿Mañana los jubilados van a ganar más? ¿Mañana los jubilados van a mantener sus derechos? En definitiva, los habrán perdido con esta ley. (Aplausos.)

**Sr. Presidente (Pierri).** — Se va a votar nominalmente el artículo 3º.

—Se practica la votación nominal.

**Sra. Secretaria (Pérez Pardo).** — Sobre 187 diputados presentes han votado 110 por la afirmativa y 73 por la negativa, registrándose además 3 abstenciones.

—Votan por la afirmativa los señores diputados Abihaggle, Aceñolaza, Albamonte, Alcalá, Alsogaray, Alvarez (C. A.), Alvarez Echagüe, Aragonés de Juárez, Aranda, Argüello, Arias, Arrechea, Ayala, Balestrini (A. E.), Balestrini (M. A.), Barberá, Barrionuevo, Baum, Becerra (N. E.), Bermúdez, Bianchi Silvestre, Borda, Bracchi, Branda, Breser, Cámara, Camañó, Casari de Alarcia, Castillo (J. L.), Castro, Corchuelo Blasco, Crostelli, D'Alessandro, Daud, Dellepiane, Díaz Martínez, Donni, Drisaldi, Durañona y Vedia, Durrien, Folloni, Funes, García Moreno, Gazia, Giménez (R. F.), Gioja, Golpe (C. H.), González Cabañas, Granados, Green, Hardy, Herrera, Herrera Arias, Iturre, Juncosa, Kammerath, Kessler, Lafalla, Lahoz, Lamberto, Leguizamón, Llopis, López (J. A.), López Arias, Macedo, Maidana, Manfredotti, Maqueda, Martínez (E.), Martínez (S. V.), Martínez Garbino, Matzkin, Mendoza (C. R.), Menem, Michelli, Miglione, Miralles de Romero, Müller, Muniagurria, Nacul, Parada, Pérez, Pesce, Pichetto, Ré, Rodríguez (M. E.), Rodríguez Sañudo, Roggero, Rojo, Romero (C. A.), Romero (H. A.), Roy, Rubini, Ruiz Palacios, Salino, Sampietro, Seelzi, Sebastiani, Smith, Sucaria, Sueiro, Tenev, Togni de Vely, Escobar, Toma, Toto, Valcarcel, Varela, Venesia y Zicarelli.

—Votan por la negativa los señores diputados Alberti, Antelo, Armendáriz, Balestra, Becerra (C. A.), Bischof, Bruzzo, Bussi, Cabirón, Callaba, Campero, Carca, Castillo (O. A.), Ceballos, D'Elia, Del Fabro, Fabrisin, Fayad, Felgueras, Fernández Gill, Fernández Meijide, Figueroa, Galante, Galván, Garay, Gauna, González Gaviola, Guzmán, Hernández, Humada, Ibarreche, Jaunarena, Kelly, Koth, Leconte, López (A. H.), Machado, Mathov, Mercader, Mercado Luna, Molardo, Molinas, Morelo, Muriel, Muñoz, Natale, Neder, Negri, Nieva, Olivera, Orgaz, Orquín, Ortiz Maldonado, Parajón, Peláez, Pellin, Peralta, Pernasetti, Piccinini, Pinto, Polino, Prat, Rodríguez (J. J.), Roig, Santín, Sarquíz, Storani, Teodosius, Topa, Trettel Meyer, Vicchi, Viglione y Zuccardi.

—Se abstienen de votar los señores diputados Balter, Digón y González.

**Sr. Presidente (Pierri).** — En consideración el artículo 4º.

Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

**Sr. González Gaviola.** — Señor presidente: quisiera formular algunas observaciones al artículo 4º teniendo en cuenta que lo que está en discusión es si este proyecto es solidario o no.

Comparto las afirmaciones vertidas por el señor presidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social en el sentido de que los sistemas previsionales son instrumentos cuyo objeto debe ser brindar una prestación o un servicio, que es la seguridad en un determinado momento de la vida.

Debemos plantear si vamos a discutir la solidaridad después de haber generado reglas de juego globales, o si vamos a debatir cómo se desenvuelve en el conjunto de la sociedad. Tal vez el sistema de financiamiento sea el que demuestre con más claridad cómo funciona la solidaridad en este proyecto de ley que el oficialismo se apresta a sancionar, porque en la modificación de este artículo podemos observar cómo funcionan con distinta responsabilidad los diferentes sectores que componen la vida nacional. Vemos que el único sector cuyo aporte es inelástico y estrictamente definido es el trabajo personal, ya que de ninguna manera puede escapar al monto claramente establecido del 11 y 27 por ciento para relación de dependencia y autónomos, respectivamente.

El resto de los sectores que tendrían que contribuir a financiar este régimen que pretende ser solidario posee flexibilidades que en la práctica están sirviendo para desfinanciar el sistema previsional. Concretamente la inducción al traspaso de los activos actuales hacia el sistema de jubilación privada generaría un desfinanciamiento de 3 mil millones de pesos anuales si la totalidad de los activos optara por el sistema de capitalización individual.

Por otro lado, una política indiscriminada de devolución de impuestos por parte del gobierno a los sectores de la producción —y en el presupuesto de este año al sector del trabajo— hace que otro flujo de casi 2 mil millones de pesos se vaya del sistema previsional en forma de rebaja de aportes patronales para dar distintos beneficios al sector de la producción y al de servicios.

Me pregunto si es solidario que restemos aportes al sistema previsional para dar, por ejemplo, un incremento en sus ya holgadas ganancias a una industria que tiene una serie de protecciones y privilegios. Sin ir más lejos, una de las terminales de la industria automotriz en la Argentina ha tenido en el balance de 1993 una



ganancia de 100 millones de pesos sobre 400 millones invertidos, esto es, una tasa de rentabilidad equivalente al 25 por ciento. Aclaro que las industrias automotrices del primer mundo ni sueñan con tener utilidades de este tipo. Además son sometidas en la apertura del mercado a la competencia y no cuentan con marcos regulatorios especiales como en nuestro país.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º de la Honorable Cámara, doctor Carlos Alberto Romero.

**Sr. González Gaviola.** — Sin embargo, una de las cosas que plantea la solidaridad previsional de este gobierno es que este señor que está teniendo tasas de rentabilidad del 25 por ciento no pague más aportes patronales, porque pareciera que los jubilados que perciben 140 pesos están bien pagos. Les decimos que se guarden en el bolsillo esa diferencia. Ni siquiera pedimos que se reconvierta tecnológicamente la industria automotriz para modernizarse, que mantenga o incremente la cantidad de puestos de trabajo que posee o que baje el precio de los automóviles, que en la Argentina es de casi el doble que en otros países con los que podríamos competir.

Entonces, ésta es la solidaridad invertida, por la cual a quienes tienen el privilegio de verse beneficiados por la paridad cambiaria y compran autopartes cada vez más baratas, a quienes tienen el privilegio de gozar de protecciones arancelarias y políticas de regulación que no tienen otras empresas, les damos además el privilegio de desfinanciar el sistema estatal jubilatorio.

Esto mismo se reitera este año en el presupuesto 1995, en medio de una situación de crisis fiscal, habiendo otros sectores que también han tenido abundantes utilidades, como es el caso de las empresas de servicios públicos privatizadas. Muchas de ellas gozan de contratos de privatización con rentabilidades garantizadas. Nos dijeron que a los jubilados esto no se les podía asegurar, pero a las empresas multinacionales se les garantiza en sus contratos.

Estas empresas, que han tenido utilidades mayores a los 1.200 millones de pesos en tres años —como las telefónicas—, también se verán favorecidas este año por esta curiosa solidaridad de los jubilados hacia ellas.

El único que no se puede mover y al que nadie pregunta si le alcanza o no la plata que le queda de su salario para llegar a fin de mes o para pagar las cuotas comprometidas, es el trabajador, y especialmente el trabajador autónomo, quien en su contribución patronal

tampoco se prevé que pueda existir una disminución de los 16 puntos que le corresponden por ser su propio patrón.

El Estado es el tercer elemento flexible que también escapa a las obligaciones y que tiene un status diferente. Es decir que la solidaridad en la práctica funciona de una manera invertida. Creo que este artículo 4º, como está plasmado y como está funcionando en la realidad, es la más clara demostración de que estamos frente a un régimen no solidario, en donde al único que se lo "aprieta" es al trabajador, y todos los otros sectores, que tendrían que ser solidarios en cuanto al financiamiento del sistema, cuentan con prebendas especiales para poder zafarse de sus obligaciones. Así es como se ven especialmente favorecidos aquellos que tienen más poder, aquellos que tienen la obligación de administrar los recursos del Estado y esas empresas que hoy tienen niveles de rentabilidad sumamente importantes.

Estos son factores que han llevado a oponernos frontalmente a este proyecto de ley de modificación del sistema previsional.

**Sr. Presidente (Romero, C. A.).** — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

**Sr. Santín.** — Señor presidente: hemos dicho que a lo largo del tratamiento de esta norma vamos a ir desentrañando la hipocresía que ella tiene.

¿A qué le pone límites este proyecto de ley? A la forma de ejercer los derechos y a la cantidad de plata que va a tener el sistema, definida por el presupuesto nacional. No le pone límites a los gastos. Pero si hablamos de recursos queremos hacerlo sin hipocresías.

Estamos frente a un sistema de reparto que no está cerrado sino a los aportes y a las contribuciones. Hay una tercera canilla —por decir así— que está dada por los impuestos votados por el Congreso de la Nación. En este sentido menciono el impuesto a los bienes personales no incorporados al proceso productivo, impuesto al que la Dirección General Impositiva no le ha dedicado casi ninguna atención. Pareciera ser que para la DGI es más importante perseguir a los quiosqueros para ver si pagan o no el IVA, que averiguar quiénes tienen bienes por más de 100 mil pesos para poder cobrar el impuesto a los bienes personales. Esta última es una tarea aparentemente imposible para Tacchi y Cossio.

Alguna vez dijeron que iban a publicar la lista de los que tenían casas en Punta del Este y que iban a valuar los yates y cuadros; pero todas estas cosas pasaron al olvido porque este impuesto tiene un único destino: los jubilados. ¡Cómo vamos a perseguir a los amigos del modelo

que deberían pagar este impuesto destinado fundamentalmente a los jubilados!

El tributo que está planteado aquí es el único en vías de extinción porque la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el día de la fecha ha emitido un despacho modificando dicho impuesto. Por lo tanto, la definición del tributo planteado como sobre los bienes personales no incorporados al proceso productivo no tendría más vigencia y correríamos el riesgo de tener que discutir la cuestión nuevamente.

Si realmente quisiéramos ser sinceros con respecto al dinero que queremos dar a los jubilados no estaríamos mencionando genéricamente los "otros tributos con afectación específica al sistema jubilatorio" sino que los precisaríamos, es decir, diríamos el 90 por ciento del 11 por ciento del IVA, el 20 por ciento del impuesto a las ganancias y el 15 por ciento de la coparticipación. Esto es lo que deberíamos hacer si pretendemos actuar sin hipocresía.

No es la primera vez que estamos planteando esta cuestión en el recinto. Ya lo hicimos cuando propusimos a la bancada justicialista incluir el listado de todos los impuestos con afectación específica al sistema jubilatorio, para que no existan dudas y poder evitar que los diputados y gobernadores se presenten ante la Justicia para reclamar porque el 15 por ciento de los impuestos coparticipables no se está destinando al sistema previsional, porque nadie tiene demasiado en claro si debe o no hacerse.

Si pretendemos financiar correctamente el sistema previsional deberíamos modificar este artículo. Dicha modificación consistiría en reemplazar del inciso d) la expresión "... otros tributos de afectación específica al sistema jubilatorio", por "el 11 por ciento del IVA, el 20 por ciento del impuesto a las ganancias y el 15 por ciento de los impuestos coparticipables".

Si es voluntad específica del bloque oficialista financiar sin que se desvíen los fondos del sistema previsional, creo que no habría inconveniente en hacer este agregado.

**Sr. Presidente (Romero, C. A.).** — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

**Sr. Armendáriz.** — Señor presidente: suscribo todas las expresiones vertidas por el señor diputado por Buenos Aires. Creo que es una imperiosa necesidad, y hace al respeto que nos merecemos entre los legisladores hablar con absoluta y total franqueza y plasmarla en la norma.

Si estos impuestos constituyen el tercer pilar del trípode que sostiene todo el sistema — como lo señalé al principio refiriéndome al artículo 2º —, por qué no incluirlos detalladamente aquí.

Por lo expuesto, coincido con la propuesta formulada por el señor diputado por Buenos Aires en el sentido de modificar el inciso d) del artículo 4º, que modifica el artículo 18 de la ley 24.241. Además quiero plantear otro agregado, que consistiría en incorporar un nuevo inciso, que llevaría la letra f) y que produciría el corrimiento de los últimos tres incisos que ya figuran en el proyecto aprobado en general. El nuevo inciso diría lo siguiente: "Los aportes del Tesoro equivalentes a las rebajas de las contribuciones patronales y a los déficit de las cajas previsionales provinciales cuando éstas sean absorbidas por la Nación".

**Sr. Presidente (Romero, C. A.).** — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

**Sr. Sueiro.** — Señor presidente: el señor diputado Santín propuso introducir una aclaración con respecto a la recaudación del impuesto sobre los bienes personales no incorporados al proceso económico, pero existe un proyecto de ley que tal vez cambie el nombre a este tributo.

Desde ya que nuestra intención consiste en que ese impuesto o el que lo sustituya se incorpore al financiamiento del sistema previsional. Consideramos que esto es necesario. Por ello proponemos la siguiente redacción para el inciso d): "La recaudación del Impuesto sobre los Bienes Personales no Incorporados al Proceso Económico, o aquél que lo sustituya en el futuro, y otros tributos de afectación específica al sistema jubilatorio".

Así creemos dar una precisión necesaria, ratificando nuestra voluntad de destinar ese tributo al sistema previsional. Esta es la modificación que vamos a proponer.

**Sr. Presidente (Romero, C. A.).** — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

**Sr. Santín.** — Había solicitado que se introdujese esa aclaración, pero también quería que se precisase el concepto vinculado con los otros tributos de afectación específica al sistema jubilatorio, indicándose que se trata del 90 por ciento del 11 por ciento del IVA, del 20 por ciento del impuesto a las ganancias y del 15 por ciento de los ingresos coparticipados.

**Sr. Presidente (Romero, C. A.).** — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

**Sr. Sueiro.** — Señor presidente: vamos a mantener nuestra posición porque en las leyes específicas ya se señala el destino de esos fondos. La aclaración nos parece innecesaria. Nuestro cambio salva, fundamentalmente, la recaudación del impuesto sobre los bienes personales no incorporados al proceso económico.

**Sr. Presidente (Romero, C. A.).** — Tiene la palabra el diputado por Buenos Aires.

**Sr. Armendáriz.** — No entiendo cuál es la razón por la cual, si existen varios impuestos que sostienen al sistema jubilatorio, sólo se enumere uno, dejándose a los otros como si tuvieran una importancia secundaria, cuando en realidad son los que realmente gravitan, como el 90 por ciento del 11 por ciento del IVA. No me parece coherente esa redacción.

Además insisto con algo que se conversó el otro día y que permitió que llegáramos a un acuerdo para debatir este tema. Se trata del procedimiento a seguir cuando existan rebajas de contribuciones patronales o cuando se absorban las cajas previsionales provinciales, que son decididamente deficitarias y que perjudicarían los recursos globales que existen para atender a los jubilados.

**Sr. Presidente (Romero, C. A.).** — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

**Sr. Sueiro.** — Señor presidente: con respecto a lo planteado por el señor diputado Armendáriz quiero señalar que se ha acordado la redacción de dos artículos vinculados con esa cuestión, que serán incorporados luego del artículo 11. Esto está en manos del bloque radical.

**Sr. Presidente (Romero, C. A.).** — Se va a votar el artículo 4º.

—Se practica la votación nominal.

**Sra. Secretaria (Pérez Pardo).** — Sobre 170 señores diputados presentes han votado 78 señores diputados por la negativa, registrándose además 88 abstenciones. No se ha registrado el voto de 3 señores diputados por no haber hecho uso de sus respectivas llaves.

**Sr. Presidente (Romero, C. A.).** — Se ha descompuesto el sistema de registro electrónico.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

**Sr. Matzkin.** — Señor presidente: la totalidad de los diputados presentes sabemos que hay inconvenientes con el sistema electrónico. Sugiero que la Presidencia lo exprese con claridad para que quede debida constancia ya que en el tablero se registra un resultado que no corresponde con la realidad.

**Sr. Presidente (Romero, C. A.).** — La Presidencia ya ha indicado que el sistema se ha caído. Por lo tanto la votación no es válida y en vista de ello haremos un nuevo intento.

**Sr. González Gaviola.** — Señor presidente: solicito que la votación se realice con los mismos diputados que votaron anteriormente.

**Sr. Presidente (Romero, C. A.).** — Sí, señor diputado; los legisladores no se han movido de sus bancas.

**Sr. González Gaviola.** — Un diputado se sentó después de practicada la votación y otro está ingresando al recinto en este momento.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

—Se practica la votación nominal.

**Sra. Secretaria (Pérez Pardo).** — Sobre 173 señores diputados presentes han votado 86 señores diputados por la negativa, registrándose además 83 abstenciones. No se ha registrado el voto de 3 señores diputados por no haber hecho uso de sus respectivas llaves.

**Sr. Presidente (Romero, C. A.).** — El sistema de registro electrónico no funciona, señores diputados. Debemos buscar otro mecanismo.

**Sr. González Gaviola.** — Solicito que se vote nominalmente en forma oral.

**Sr. Calván.** — Que se vote en forma nominal verbalmente.

**Sr. Matzkin.** — Señor presidente: propongo que se vote por signos.

**Sr. Lamberto.** — Pido la palabra para una aclaración.

**Sr. Presidente (Romero, C. A.).** — Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

**Sr. Lamberto.** — Señor presidente: en atención a su naturaleza y contenido, este artículo no debería ser conflictivo. En él establecemos de dónde proceden los fondos que se destinan a los jubilados.

Votar en contrar sólo puede obedecer a no haber leído el texto de este artículo o a un deseo de obstaculizar el funcionamiento de esta sesión.

Sólo decimos de dónde provienen los fondos que se destinan al sistema. Sería suficiente con una votación por signos; no creo necesario tomar mayores recaudos en este caso.

**Sr. Presidente (Romero, C. A.).** — Pido a los señores diputados un poco de paciencia; trataremos de poner en funcionamiento el sistema.

**Sr. Matzkin.** — Señor presidente: formulé una moción concreta y solicito que se someta a votación.

**Sr. Presidente (Romero, C. A.).** — Lo que ocurre es que han solicitado que la votación se practique en forma nominal.

**Sr. Matzkin.** — El sistema no está en condiciones operativas y la sesión debe continuar.

Invito formalmente a la Cámara a que prosigamos trabajando y que para ello utilicemos el sistema de votación más tradicional. Posible-

mente usted no haya escuchado cuando formulé mi propuesta; solicito que sea puesta a consideración de la Cámara para que ella decida.

Por otra parte, está pidiendo una votación nominal quien pretendió dejar a la Cámara sin quórum. Esto no tiene sentido.

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — Señor diputado Matzkin: el señor diputado Santín está solicitando otra cosa.

Sr. Matzkin. — Señor presidente: usted tiene la responsabilidad de que la sesión avance...

Sr. Santín. — Pido la palabra para una aclaración.

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Santín. — Señor presidente: en primer lugar, quiero aclarar al señor diputado Matzkin que yo no dejé a la Cámara sin quórum y que pedí que la votación de todos los artículos se hiciera en forma nominal.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Santín. — En segundo término, el bloque de la Unión Cívica Radical no tiene apuro dentro del marco de esta sesión; por lo tanto, vamos a otorgar a la Presidencia el tiempo necesario para solucionar los problemas que se han producido en el sistema electrónico.

Por otro lado, queremos aclarar al señor diputado Lamberto lo siguiente: mediante esta votación no estamos aprobando los recursos del sistema, porque estos se hallan contemplados en el artículo 18 de la ley 24.241. Es decir que si la votación resultara negativa, se continuaría con los recursos previstos en esa ley, con lo cual los jubilados estarán mejor. Con esto he querido aclarar la confusión que el señor diputado Lamberto quiso generar en esta Cámara.

Sr. González Gaviola. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. González Gaviola. — Señor presidente: a los efectos de que se cumpla estrictamente con el reglamento, quiero aclarar que he contabilizado más de seis diputados del bloque Justicialista que han ingresado al recinto luego de la primera votación...

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. González Gaviola. — Si la Presidencia no mantiene en el recinto a los mismos diputados que participaron de esa votación...

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — Si me permite, señor diputado, desco aclararle que no ha sido solicitada la rectificación de la votación.

Por otro lado, mientras se estaba votando, la Presidencia advirtió a la Honorable Cámara que se había caído el sistema electrónico. En consecuencia, señor diputado, no corresponde la indicación que usted acaba de formular.

Ruego a los señores diputados que aguarden en sus bancas y sean pacientes hasta tanto se solucione el problema generado en el sistema electrónico.

—Luego de unos instantes:

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — Se va a votar por el sistema electrónico en forma tentativa.

—No se registra resultado en el tablero electrónico por defecto del sistema.

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — En virtud de que resulta imposible continuar votando por el sistema electrónico, se procederá a votar por signos.

Tiene la palabra el señor diputado por La Rioja.

Sr. Galván. — Señor presidente: a fin de facilitar el desarrollo de la sesión nos avenimos a votar por signos, pero advierto que el bloque radical en cada oportunidad procederá a aclarar el sentido de su voto.

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — Tiene la palabra el señor diputado por Misiones.

Sr. Golpe. — Señor presidente: propongo que se proceda a votar y posteriormente cada diputado haga llegar por escrito a la Presidencia las observaciones que pensaba realizar.

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — Se va a votar el artículo 4º.

—Resultado afirmativa.

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — Tiene la palabra el señor diputado por La Rioja.

Sr. Galván. — Señor presidente: dejo constancia de que el bloque de la Unión Cívica Radical ha votado en forma negativa.

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Polino. — Señor presidente: aclaro que el interbloque ha votado por la negativa.

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — En consideración el artículo 5º.

Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. González Gaviola. — Señor presidente: el artículo 5º pretende modificar el artículo 32 de la ley 24.241, que hace referencia a la movilidad de las prestaciones. Estamos hablando de

que uno de los temas básicos es el de la solidaridad y vemos que a través de esta modificación que se pretende hacer se desvirtúa totalmente el régimen previsional, independientemente de que sea de reparto. Las mismas observaciones hicimos cuando se planteó el sistema de capitalización, en el sentido de que a efectos de dar previsibilidad y seguridad al sistema debería haber una garantía de prestación mínima y un mecanismo de movilizaciones que permitan que estas prestaciones se vayan adecuando a las modificaciones de las situaciones vitales de los jubilados en el futuro.

Cuando nosotros dejamos que la movilidad quede definida por el presupuesto y no establecemos una escala de valores dentro de él respecto de qué es más importante ajustar, estamos desprotegiendo al sector porque permitimos que, a pesar de que debe estar especialmente protegido, sea puesto en el orden de necesidades en un lugar que no es el que coincide con el nivel de vulnerabilidad que tiene.

Definir una garantía de prestación y una movilidad acorde a lo que suceda es la mejor forma de ver el sistema previsional. Verlo desde el presupuesto es utilizar un criterio de caja y no de política social. Sin descuidar el criterio de caja, creo que el tema de la movilidad tiene que tender a garantizar que si no hay plata por lo menos tiene que alcanzar para los sectores que son más vulnerables, recortando los recursos de los sectores más prescindibles.

Analizando el presupuesto de 1995, vemos que hay asignación de recursos para áreas que son mucho menos necesitadas que la de los jubilados. Para hacer una reseña podemos decir que el Poder Ejecutivo nacional se reserva para una partida de más de 1.200 millones de pesos que no tiene destino específico, denominada partidas de transferencia, que utiliza para someter las voluntades de los gobiernos provinciales. Este rubro podría ajustarse más fácilmente que el de los jubilados. Sin embargo, la escala de valores de esta mayoría parlamentaria circunstancial prefiere seguir sometiendo a los jubilados a la indignidad de los 140 pesos y destinar recursos presupuestarios sin que quede una escala de valores definida.

Ni hablar de partidas como las que se denominan de gastos centrales y ministerios, por las que el presidente de la Nación tiene más de 115 millones, el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos más de 120 millones, el Ministerio de Cultura y Educación —que ha transferido todos sus servicios— más de 140 millones, y hospitales que tienen casi el presupues-

to de salud de algunas provincias y que están bajo la administración nacional.

Este artículo de la movilidad es uno de los que sepulta definitivamente la garantía y la actualización, no sólo del régimen de reparto, porque lo mismo hemos dicho cuando tratamos el sistema de capitalización. Definimos un sistema de capitalización en donde no haya una empresa testigo que pueda fijar un piso con respecto a las actualizaciones sino que a éstas se las vinculó con el promedio de tasas pasivas del sistema. Con ese artículo de la movilidad no estamos destruyendo el sistema de reparto sino que estamos terminando con la funcionalidad que tiene que tener un sistema previsional, que es dar garantía de seriedad para que la gente en determinado momento de la vida pueda tener un salario sustitutivo. Esto no tiene nada que ver con el espíritu del artículo 5º, para el cual nuestra bancada adelanta su voto negativo.

**Sr. Presidente (Romero, C. A.).** — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

**Sr. Santín.** — Señor presidente: decíamos hace un rato que a medida que avanzáramos en la discusión de cada uno de los artículos íbamos a ir descubriendo la hipocresía de este proyecto de ley. El planteo del bloque oficialista es que se puede pagar en función de los recursos que se tengan y que no se puede ir más allá de eso.

La ley 24.241 prevé un régimen de movilidad basado en ese marco. Ha definido una figura llamada AMPO, que es el aporte medio previsional obligatorio, referido a la cantidad de jubilados que tiene el sistema y al monto que se recauda. Por lo tanto, con respecto a lo que planteaba el señor diputado Sueiro en el sentido de que los recursos que tengamos de más tenemos que destinarlos a los que menos ganan, pensamos que con el AMPO y alguna modificación que habíamos propuesto acerca de que los primeros recursos que se obtuvieran se volcaran en forma automática cada seis meses a los que menos reciben en función de que aumentaría la recaudación propia del sistema, se mejoraría la situación de los jubilados; pero no es así.

Ahora, conforme con este artículo ya no importa que el límite sean los recursos con que se cuente, porque la cuestión la va a definir el presupuesto nacional cada año. Se arranca con el actual período de 1995. ¿Cuál es la movilidad para este año? Cero.

Este es el planteo de fondo que estamos formulando; porque los legisladores dicen "¿cómo no vamos a tener la responsabilidad de dar movilidad al sistema? En el presupuesto nacional lo vamos a contemplar y discutir para darle mo-

vilidad." Ya estamos en febrero de 1995. Como al presupuesto que rige no lo vamos a modificar, los jubilados tendrán que empezar a soñar que en 1996 los legisladores del oficialismo —espero que seamos nosotros el año que viene— practiquen un ajuste de sus haberes. Esto forma parte de ese planteo hipócrita del bloque Justicialista, un planteo según el cual el límite está dado por las cuentas cuando se tiene que reducir el dinero destinado al sistema previsional, pero cuando ese dinero tiene que ir a los jubilados deciden que el ajuste sea igual a cero.

**Sr. Presidente** (Romero, C. A.). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

**Sr. Armendáriz**. — Señor presidente: el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, así llamado antes de la reforma llevada a cabo el año pasado, establecía en forma clara, expresa y taxativa la movilidad de las jubilaciones y pensiones.

Los convencionales constituyentes de 1957 quisieron conferir a esta institución la jerarquía que le corresponde y, al mismo tiempo, otorgar al ciudadano la garantía de que sus derechos consagrados en la Carta Magna están bien asegurados.

La redacción del artículo 5º, tal como lo ha señalado el señor diputado Santín, contiene groseras implicancias que de alguna manera rompen, imposibilitan y debilitan la movilidad de las prestaciones, porque todo lo va a circunscribir, adecuar y dirigir a la existencia de recursos presupuestarios.

El señor diputado Santín se ha referido a lo que sucederá en el presupuesto de este año, pero me ubico al fin del actual período, cuando en noviembre o diciembre se proceda a votar el presupuesto para el año que viene. Entonces vendrá un presupuesto con un monto determinado para el sistema de seguridad social, y lo más probable es que esta Cámara pretenda incrementarlo. Pero sabemos que cuando se modifican las cifras que vienen del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, indefectiblemente son votadas.

Podría ocurrir otra cosa: que el ministro mandara cifras que a consideración de los señores diputados fuesen aceptables y entonces el Congreso las aprobara. Resulta que transcurre el año y al siguiente vuelven las mismas cifras. Entonces, estamos dependiendo permanentemente ya no de lo que resuelva el Congreso sino directamente de lo que se incluya en el proyecto de presupuesto. Es decir que aquí prácticamente la movilidad ha desaparecido.

Por lo tanto, entiendo que el artículo en consideración —luego en el 7º se repite lo mismo— es total y absolutamente nulo porque es incons-

titucional, por lo que adelanto nuestro voto negativo.

**Sr. Presidente** (Romero, C. A.). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

**Sr. Sueiro**. — Señor presidente: la comisión insiste en la reducción de este artículo y ratifica que a su juicio no existe mejor garantía para la movilidad que la de otorgarse a los jubilados que los diputados y senadores de la Nación dispongan de las sumas en cada presupuesto para dar la movilidad y el incremento que sean oportunos en ese ejercicio anual.

Consecuentemente, es mentira que la movilidad haya caído o que no vaya a existir movilidad. Por el contrario, vamos a dar movilidad pero diferenciada. Vamos a aumentar las jubilaciones y pensiones de quienes perciben menos mientras que a los que perciben más vamos a decirles que esperen porque, a nuestro juicio, ésta es la mejor forma de hacer solidario al sistema.

**Sr. Presidente** (Romero, C. A.). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

**Sr. Santín**. — Quisiera preguntar al señor diputado Sueiro cuál es la movilidad para este año.

**Sr. Matzkin**. — Eso está incluido en el presupuesto; búsquelo, señor diputado.

**Sr. Sueiro**. — Aclaro al señor diputado Santín que el presupuesto de 1994 otorgaba 14 mil millones de pesos al sistema previsional, mientras que el de 1995 destina 15.800 millones, con lo cual se convierte en el presupuesto más alto destinado a esa finalidad en la historia de la República Argentina.

**Sr. Presidente** (Romero, C. A.). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

**Sr. Balter**. — Señor presidente: voy a ser muy breve y me referiré también a otros tres artículos posteriores que están muy relacionados con el que la Cámara está considerando, a los efectos de no retardar la votación respectiva.

En oportunidad de la visita del señor ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos a esta Cámara el año pasado, hemos expresado claramente cuál era nuestra posición con respecto a este tema. Si bien ya hemos dado algunos datos, voy a insistir en ellos porque son relevantes para que no nos engañemos entre nosotros y mucho menos lo hagamos con el resto de la ciudadanía cuando estamos prestando nuestra conformidad o votando en contra de esta norma.

El sistema previsional argentino cuenta en este momento con 3.215.464 beneficiarios, de los cuales 8.596 perciben un haber superior a los 2.000 pesos. Si redujéramos estos 8.596 casos a 2.000 pesos como máximo, tendríamos un ahorro mensual



de 11.135.664 pesos. ¿Qué nos está indicando esta cifra? Que con el ahorro que vamos a realizar al votar esta disminución —que incluso es menos significativa que el importe que he expresado— nunca vamos a poder cumplir —por lo menos en el corto y en el mediano plazo— con esta aspiración de que haya movilidad; estaremos muy lejos de cumplir con lo que se prevé en el artículo 8º, es decir, con los 450 pesos de asignación mínima mensual.

Tenemos 2.838.458 casos de jubilados y pensionados que perciben menos de 450 pesos mensuales. Esto significa que tendríamos que incrementar las partidas presupuestarias de este año para llegar a ese haber mínimo, porque se necesitarían 669.701.269 pesos más por mes, lo que significaría tener que incrementar el presupuesto anual en 8.036 millones de pesos, lo que todos sabemos que no va a ocurrir.

En definitiva estamos votando algunos artículos que no van a tener cumplimiento efectivo, por lo menos en los próximos años. Se trata de una aspiración legítima el hecho de tratar de llegar a los 450 pesos por mes. Pero que no se utilice este instrumento que hoy se está por sancionar para decir a los jubilados que de ahora en más, gracias a esta normativa, se podrá cumplir con este reclamo que ellos hacen desde mucho tiempo atrás, porque la movilidad que podrá haber anualmente nunca será significativa.

Con esta reflexión, tratando de recordar algunos de los conceptos vertidos en ocasión de la visita del señor ministro, y sabiendo de la poca disponibilidad a la modificación del artículo que estamos tratando, doy por finalizada mi intervención.

**Sr. Presidente (Romero, C. A.).** — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

**Sr. Polino.** — Señor presidente: nuestro bloque desea dejar constancia del voto negativo a la norma en consideración, por las siguientes razones; porque no es justo que para resolver el problema de muchos se les quite parte del haber jubilatorio a aquéllos que aportaron durante una determinación cantidad de años para tener una jubilación digna. No hay ningún derecho para proceder así, de manera confiscatoria.

No se aplica un principio de equidad social, esto es, que los que ganan más efectúen un sacrificio para resolver el problema de los que ganan menos, porque la clara elocuencia de los números que aquí se han expresado demuestra que esa quita que se les hará a los jubilados que ganan por encima del tope que aquí se establece no va a alcanzar para resolver el pro-

blema de ningún jubilado que esté ganando el mínimo.

Aquí se trata de que el Estado asuma las responsabilidades que tiene con la seguridad social y que por medio de nuevos enfoques y criterios se atiendan las necesidades de la clase pasiva en su conjunto.

El Estado no puede hacer este tipo de asistencialismo que quiere llevarse a cabo con la redacción de este artículo, porque ello implicaría engañar a la gente ya que en los hechos esto no va a producir ninguna mejora para los sectores más postergados de la clase pasiva. Por estas razones vamos a votar en contra de este artículo.

**Sr. Presidente (Romero, C. A.).** — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

**Sr. Lamberto.** — Señor presidente: me había propuesto no hablar en esta sesión pero la circunstancia de que se ha implantado la temática de que los diputados expresen sus opiniones en cada artículo, a fin de que se demore la sanción de esta iniciativa, me obliga a hacerlo. Hay cosas que no podemos dejar pasar por alto.

He escuchado a los campeones de la justicia social, de la distribución, a los que nos enseñaron cómo se deben hacer las cosas; pero resulta que llegamos a este estado de situación por hacer lo que ellos propusieron, y por tratar de arreglar los problemas que nos dejaron.

Cuando tomamos una decisión política absolutamente clara para dejar definitivamente solucionado el problema más grande que tiene la Argentina, pagando los costos que hay que pagar porque somos el partido del gobierno, dando al Poder Legislativo el verdadero poder que es el de decidir qué se hace con los recursos del Estado, cómo se recauda y en qué se gasta, y cuando asumimos el verdadero desafío de poner de pie al Parlamento argentino, de pronto se dice que nos refugiamos en el índice, sosteniéndose que eso es algo teórico y que no se relaciona con la movilidad. ¿Pero qué movilidad representan los índices cuando se confunden con la realidad para encontrar una forma de engancharlos en un sistema de precios? ¡Si en ninguna época hubo movilidad porque las jubilaciones nunca siguieron a los precios! La prueba está en que cuando éstos se dispararon las jubilaciones quedaron atrás. Sólo se trata de una movilidad teórica a la que se refieren los abogados en sus discursos; pero en la práctica no se tradujo en el bolsillo durante muchos años porque el sistema no era viable ni financiable.

Hoy queremos establecer un sistema financiero, sostenible, previsible, para que podamos pagar y decidir cada año cómo lo hacemos y dónde sacamos el dinero.

Este es el debate de un Parlamento serio y no el hecho de esconderse en índices, hipótesis o esquivar el bulto. Cuando podamos pagar vamos a decir que les aumentamos y cuando no, con el mismo coraje, diremos que no. Si vamos a ser un país en serio debemos empezar a asumir responsabilidades para que el Parlamento sea la principal fuente de poder político.

Hagamos el debate presupuestario considerando el gasto público en forma global, y no analicemos presupuestos por partes, que son cuestiones predeterminadas que le restan autoridad a este Parlamento. Debemos volver al presupuesto global donde consideramos cada gasto; establezcamos las prioridades en el Parlamento y que sea responsabilidad del poder político decidir cómo se gastan los fondos públicos.

Esto es lo que proponemos y los invitamos a acompañarnos. No esquivemos el bulto porque nosotros hemos demostrado que hemos venido a solucionar los problemas. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — Se va a votar el artículo 5º.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — En consideración el artículo 6º.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Sueiro. — Señor presidente: en este artículo proponemos una modificación al punto 5, que quedaría redactado de la siguiente manera: "El goce de la prestación del retiro por invalidez es incompatible con el desempeño de cualquier actividad en relación de dependencia". En cuanto al resto de la redacción, se mantiene su texto.

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Santín. — Quiero adelantar que el bloque de la Unión Cívica Radical va a votar este artículo por la afirmativa.

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.

Sra. Guzmán. — Señor presidente: propongo suprimir el punto 4 de este artículo que se vincula con quienes prestaron servicios en tareas penosas, riesgosas o insalubres. Considero que ellos deben tener la posibilidad de regresar al trabajo, sin que haya incompatibilidad con el beneficio previsional obtenido y sin efectuar diferencias en función de la tarea a la que reintegren.

Hago esta propuesta en función de lo que observo en la realidad, ya que esos trabajadores

se encontrarían discriminados. Se trata del caso de los trabajadores mineros, por ejemplo, quienes a veces deben regresar a alguna otra tarea, que quizás no sea la minera, pero que sí puede ser calificada como penosa, riesgosa o insalubre. Si tuviesen la dicha de encontrar otro trabajo, se encontrarían con una incompatibilidad y se les suspendería el pago de los haberes correspondientes al beneficio previsional.

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Sueiro. — La comisión va a mantener la redacción del punto 4, porque todo beneficiario de una jubilación obtenida en virtud de un régimen especial está habilitado para volver a trabajar. Sólo no puede hacerlo en la actividad en virtud de la cual obtuvo ese beneficio. No hay ninguna discriminación en tanto puede volver a trabajar en cualquier otra actividad que no originó el beneficio especial.

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. López (A. H.). — Señor presidente: si se aprobase el punto 5 tal como lo ha leído el señor diputado Sueiro, el bloque Justicialista tendría que retirar el proyecto sobre accidentes de trabajo que hoy se discute en comisión. En esta iniciativa se señala que el trabajador accidentado que tiene una incapacidad y vuelve a trabajar será asistido por el Sistema de Seguridad Social, de acuerdo con la ley 24.241, según un porcentaje de incapacidad. Entonces, el punto 5 propuesto está en contradicción con el proyecto que está en estudio en comisión y que envió el Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — Se va a votar el artículo 6º, con la modificación propuesta por el miembro informante.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — En consideración el artículo 7º.

Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. González Gaviola. — Señor presidente: en este artículo nuevamente se aborda un tema importante como el de la movilidad de las prestaciones.

Se trata de ver si el sistema propuesto es o no solidario. Más allá de los discursos y de las expresiones de deseo, de la lectura de este proyecto surge con claridad cuál es la escala de valores del oficialismo y que la propuesta carece absolutamente de solidaridad en relación con los trabajadores y los jubilados.

Ya desde el inicio de la ley de convertibilidad, y a pesar de que los jubilados tenían sus derechos perfectamente establecidos por la legislación vigente y por nuestra Constitución, el ministro de Economía y, en suma, el gobierno nacional, se han negado sistemáticamente a actualizar sus haberes según la movilidad correspondiente.

En este artículo que se pretende modificar llegamos al extremo de legislar retroactivamente, tratando de convalidar una conducta ilegal llevada a cabo por el Ministerio de Economía.

Habría que analizar quiénes son los que han tenido movilidad de haberes en este último período y quiénes realmente la tendrán de acuerdo con esta modificación. A pesar de las imputaciones formuladas por el ministro Cavallo durante su última interpelación en este recinto, según las cuales se mantenían privilegios por descuidos del Ejecutivo o por imposición de algunos legisladores del oficialismo, con este proyecto continúan los privilegios de los regímenes especiales y de ese modo la injusticia golpea con más rigor y falta de solidaridad a los trabajadores que se rigen por las leyes 17.038 y 18.037.

De esta manera vemos que la solidaridad del oficialismo opera en forma totalmente inversa a como debiera hacerlo.

Con esta modificación se pretende legislar hacia atrás y es así que este artículo resulta absolutamente inconstitucional. Por ese motivo la bancada del interbloque Alternativa Federal adelanta su voto negativo.

**Sr. Presidente (Romero, C. A.).** — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

**Sr. Santín.** — Señor presidente: el texto de este artículo debería haberse incluido en el artículo 5º, que modifica el artículo 32, cuya denominación es "Movilidad de las Prestaciones", que es justamente el título de este artículo 7º. Desde el punto de vista legislativo este otro ordenamiento parece incoherente.

Por otra parte, con este artículo se intenta resolver la injusticia que normalmente comete la ANSES en los reclamos por el cálculo de las jubilaciones. El 90 por ciento de las presentaciones judiciales se debe a que aquellas fueron mal calculadas. Ello es así porque la ANSES ha diseñado una tabla —que es la que figura como anexo I—, que fue hecha al arbitrio de los ajustes que se consideraba debían operarse en el sistema.

Dado que las jubilaciones se calculaban sobre los mejores tres años de los últimos diez —ahora se calculan sobre los últimos diez años—, era necesario contar con una estructura de ajuste de las remuneraciones con el objeto de calcular

correctamente el haber previsional. Si los mecanismos utilizados deprecian las remuneraciones, sin duda se obtendrán jubilaciones mucho más bajas de las que corresponden.

Sobre este particular la Cámara de la Seguridad Social había entendido que la encuesta de salarios era la mecánica más apropiada para actualizar las remuneraciones de aquellos que pretendían jubilarse con el fin de calcular su primer haber jubilatorio. Mediante esta inclusión en la ley que pretende sancionar el oficialismo, no sólo estamos recortando derechos de los jubilados sino que, además, les decimos que su jubilación no se va a ajustar en función de la encuesta de salarios del INDEC. Esta era la mecánica para poder verificar el movimiento de los salarios y actualizarlos correctamente, teniendo en cuenta que la jubilación se calcula de esa manera. Por lo tanto, aprobar este artículo implica colocar a los futuros jubilados en la situación de que sus haberes van a estar absolutamente distorsionados respecto de lo que cobraron en los diez últimos años, porque esta tabla no actualiza correctamente siguiendo la mecánica que marca la realidad.

Por otro lado, la ANSES entiende que a partir del 1º de abril de 1991 el índice de actualización de las jubilaciones es 1 y sobre esa base será actualizada la estructura salarial. Pero como desde esa fecha al presente los precios se incrementaron en más de un 60 por ciento y los salarios en un 64 por ciento, según encuestas del INDEC —si es que se le puede creer—, mediante la aprobación de este artículo, quien en el futuro pretenda jubilarse sufrirá una restricción con respecto al cálculo de su primer haber, es decir, su haber de cese.

Por lo expuesto, el bloque de la Unión Cívica Radical entiende que este artículo es perverso pues no sólo no se actualizarán las jubilaciones sino que además tampoco se calculará correctamente el salario percibido por el trabajador en los últimos diez años en función de la determinación de su haber jubilatorio.

**Sr. Presidente (Romero, C. A.).** — Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

**Sr. Pernasetti.** — Señor presidente: el punto 1 del artículo 7º se refiere a "sistemas públicos de previsión de carácter nacional". Solicito que la comisión aclare si se trata de un error gramatical, pues considero que el plural es incorrecto dado que sólo hay un sistema público de previsión. Ello, salvo que se quiera incluir a los sistemas transferidos por las provincias, pero aun así, cuando una provincia transfiere su caja a la Nación, aquélla ingresa al sistema nacional. Solicito a la comisión que también

aclarar si acepta la modificación propuesta por el señor diputado Santín en relación con la denominación del título de este artículo.

**Sr. Presidente (Romero, C. A.).** — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

**Sr. Sueiro.** — Señor presidente: interpretamos que es correcta la redacción que cuestiona el señor diputado preopinante, que en forma genérica está referida a los sistemas públicos. Al respecto no existe error gramatical alguno ni se pretende que el artículo abarque conceptos distintos de los que precisa la ley.

Por lo expuesto, mantenemos en ese sentido la redacción del artículo. Con respecto a la propuesta del señor diputado Santín, también conservamos el texto original.

**Sr. Presidente (Romero, C. A.).** — Se va a votar el artículo 7º.

— Resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Romero, C. A.).** — En consideración el artículo 8º.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

**Sr. Santín.** — Señor presidente: como señaló el señor diputado Lamberto, los diputados vamos a tener la posibilidad de definir cada aumento o cada movilidad. Cuando votamos un artículo de esta iniciativa, también somos los diputados los que tenemos la oportunidad de definir si otorgamos o no la movilidad; no es necesario esperar el tratamiento de la ley de presupuesto para establecer determinadas cuestiones ya que no sólo ejercemos nuestra potestad al considerarse aquella norma sino en cada una de las leyes que sancionamos. No debemos olvidar que el Parlamento transmite sus inquietudes a la sociedad a través de la legislación que genera.

Mediante el artículo en consideración el Poder Ejecutivo formula un planteo que parece kafkiano, porque por un lado deja entrever la posibilidad de llegar a los 450 pesos de haber jubilatorio pero, por otra parte, no incorpora un solo recurso a tal objeto.

En virtud de que reiteradamente el Poder Ejecutivo expresa que no se debe hacer demagogia cuando se sanciona una ley, pido que se nos aclare cuál será el camino a recorrer para alcanzar los 450 pesos de haber jubilatorio, porque si bien estamos de acuerdo con este propósito, no dejamos de tener en cuenta que sólo se trata de una expresión de deseos porque no se propone ninguna mecánica a seguir. No ocurriría lo mismo con la propuesta formulada por el bloque radical, en la que lo establecido en

el artículo referido a la movilidad permitiría contar con recursos que propendían a aumentar las jubilaciones.

Nuestra iniciativa hablaba de algo concreto; sin embargo, en el presente artículo se utiliza el término "preferentemente", lo que indica que es algo que se podrá llevar a cabo o no.

El presente proyecto cercena todos los derechos de los actuales y futuros jubilados. Por ello entiendo que es una hipocresía incorporar estos cuatro renglones al artículo en discusión.

**Sr. Presidente (Romero, C. A.).** — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

**Sr. Sueiro.** — Señor presidente: la comisión sostiene la redacción del artículo en tratamiento y aclara que es nuestra aspiración llegar a los 450 pesos de haber jubilatorio. Ese es el objetivo que nos proponemos alcanzar y para ello seguramente contaremos con la imaginación y creatividad del señor diputado Santín, quien posiblemente nos señale el camino indicado para obtener los recursos que se volcarán al incremento jubilatorio.

Lamentablemente, hasta ahora no escuché ninguna propuesta concreta. De todos modos el oficialismo está analizando diversos temas que le permitirían presentar alguna propuesta vinculada con el incremento de los haberes jubilatorios.

**Sr. Presidente (Romero, C. A.).** — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

**Sr. Armendáriz.** — Señor presidente: el artículo en consideración resultaría más creíble y se alejaría de las utopías si fijáramos un piso a las jubilaciones mínimas.

Por otra parte, teniendo en cuenta que en junio del año pasado demostramos que existían los recursos necesarios para fijar una jubilación mínima de 294 pesos, solicito a la comisión que coincidamos en alguna cifra que se acerque a los 400 pesos.

Por lo expuesto, en el presente artículo debería fijarse un haber mínimo de 400 pesos. Para lograrlo — y con esto contesto al señor diputado Sueiro — es pertinente hacer más progresivo el impuesto a las ganancias y, al mismo tiempo, recomendar al señor Tacchi que cobre los impuestos atrasados que adeudan los grandes empresarios ya que tiene una lista que aún no ha puesto en ejecución.

**Sr. Presidente (Romero, C. A.).** — Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

**Sr. Campero.** — Señor presidente: se ha esbozado un error, porque si se establecen 450 pesos se estará perpetuando un valor que necesariamente deberá ser ajustado en el tiempo.

Por ello considero oportuno buscar una redacción que contemple los distintos valores que sucesivamente se vayan incorporando mediante la ley de presupuesto o sus equivalentes.

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Sueiro. — Señor presidente: a efectos de ordenar la discusión propongo que en adelante se formulen todas las objeciones que se deseen realizar al artículo que en ese momento estuviera en discusión, y que la comisión se expida en último término, porque de lo contrario permanentemente se están reiterando conceptos ya vertidos.

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — Lo que sucede es que después de que la comisión se expide, los señores diputados siguen pidiendo el uso de la palabra.

Sr. Sueiro. — Entonces propongo a la Presidencia que la comisión se expida después de que todos los señores diputados hayan hecho uso de la palabra.

La comisión mantiene la redacción del artículo en cuestión y solicitamos que se vote.

Sr. Leconte. — Pido la palabra para una aclaración.

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.

Sr. Leconte. — Señor presidente: en nombre del Partido Liberal, del Partido Autonomista y del Movimiento Popular Jujeño quiero anticipar que vamos a votar favorablemente este artículo tomándolo como una mera expresión de anhelos que en forma inmediata no va a beneficiar a los jubilados.

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — Se va a votar.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — En consideración el artículo 9°.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Santín. — Señor presidente: estamos de acuerdo con el planteo general de este artículo. Compartimos el criterio de que las jubilaciones máximas tengan un tope y de que aquellos que tengan jubilaciones elevadas afronten una especie de impuesto por este motivo.

Entendemos que la jubilación es una estructura solidaria del sistema previsional y tiene que permitir mantener el nivel de vida que se tenía antes de jubilarse, pero no debe servir para la acumulación debido a que interpretamos que es un sistema solidario. Por lo tanto,

para aquellas jubilaciones que son importantes, ya sea porque se han hecho aportes en función de lo que se ganó o porque pertenecen a regímenes especiales que permiten tenerlas, nos parece absolutamente lógico el régimen planteado en el marco del artículo 9°.

En función de lo que el ministro de Economía planteó muchas veces en este recinto en el sentido de que es culpa de las jubilaciones de más de 2.000 pesos que el resto de los jubilados cobre 150, queremos agregar a este artículo una cláusula que establezca que el ahorro que se obtenga al imponer topes al sistema jubilatorio y por las quitas a las jubilaciones mayores, sea volcado a las jubilaciones mínimas. Esta será una forma de ir cumplimentando la utopía del artículo 8°.

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Sueiro. — Señor presidente: la comisión va a mantener la redacción del artículo y quiero dejar sentado que es prácticamente idéntico al que la bancada de la Unión Cívica Radical votó afirmativamente en la reunión de comisión correspondiente.

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — Se va a votar el artículo 9°.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — En consideración el artículo 10.

Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Lafalla. — Señor presidente: voy a proponer un nuevo artículo que en realidad no sustituye al que se encuentra en consideración, sino que se trata de un nuevo texto que llevaría a que el actual artículo 10 pasara a ser el 11.

La redacción que propongo es la siguiente: "Convalidase en lo que fuera competencia del Congreso y desde su vigencia, el decreto 78 del 19 de enero de 1994, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 4° de la ley 24.347".

Sin lugar a dudas los legisladores saben de qué se trata. Esto implica la derogación de las leyes 22.731, 22.929, 23.026, 23.626, 24.016 y en especial la 24.018, todas ellas referidas a las llamadas jubilaciones de privilegio.

No se me escapa la mecánica de funcionamiento de la Cámara en cuanto a los acuerdos entre los bloques mayoritarios acerca de los temas a incluir durante la consideración de una norma. No está en mi ánimo obstaculizar ni desconocer esta metodología; de modo que queda en claro que hablo a título personal y

de ninguna manera en representación de mi bloque.

El hecho de que el texto que propongo no sea una ocurrencia mía sino que ha sido propuesto por el Poder Ejecutivo, y que el decreto esté vigente no obstante algunos fallos, me lleva a plantear la cuestión como un deber ineludible, atento a que todos los señores diputados preopinantes sin excepción —me incluyo— hemos invocado durante la consideración de esta iniciativa el mejor camino para plasmar un régimen posible y solidario.

No es mi intención retrotraer la discusión a los artículos que ya han sido aprobados, porque he dado mi opinión y he dicho que entiendo que estamos frente a un buen régimen y que es solidario, a pesar de lo opinable que ello pueda resultar.

Hemos invocado permanentemente el tema de la solidaridad y por ello tengo un deber de conciencia que me lleva a plantear un concepto que no quiero imponer a nadie. Estamos introduciendo modificaciones al régimen jubilatorio de la envergadura de las que estamos votando, con opiniones disímiles que llevan a defender con calor la idea de que éste es el camino de la salvación del régimen previsional o a decir que es una infamia. Esto me lleva a creer que no podemos invocar en esta oportunidad el principio de solidaridad sin incluirnos en la cuestión, esto es, ratificar la voluntad del decreto 78 en el sentido de derogar definitivamente los llamados regímenes jubilatorios de privilegio o de excepción, entre los que se incluye el que beneficia a los legisladores y a la dirigencia política.

Entiendo que privilegio no significa recibir algo a lo que no se tenga derecho. Es muy probable que el ejercicio de cada una de las actividades a las que se refieren estos regímenes en sí mismos justifique que quienes se acojan a ellos sean merecedores de este beneficio. Pero los privilegios tienen que ver con las comparaciones, y cuando una cosa por justa que parezca no presenta igualdad de condiciones para todos y sólo se destina a un sector, a mi criterio se convierte en un privilegio. Por eso creo que es acertada la denominación popular de régimen de privilegio dada a la ley 24.018 que nos involucra.

Entonces, mal podría dar mi aprobación a los artículos que acabo de votar invocando el sentido común al que hice referencia en mi anterior exposición y la solidaridad, si no tuviera la decisión de excluirme de un régimen de privilegio. La función política conlleva necesaria y obligatoriamente el deber de ejemplaridad, que no tienen otras actividades, profesiones o traba-

jos en la sociedad. La nuestra sí, porque tiene la característica de ser absolutamente voluntaria. Nadie tiene la obligación del ejercicio de la función política como única posibilidad de trabajo o subsistencia, como les ocurre a muchos otros argentinos que tienen una sola alternativa para obtener los medios que necesitan para vivir.

El hecho de desempeñar una actividad voluntaria y de ejercer una representación pública me hace tener la convicción de que el ejercicio de la función política conlleva necesariamente el deber de ejemplaridad que implica no poseer lo que nuestros representados tampoco poseen o, dicho de otra forma, no preservar para nosotros lo que el Estado no puede garantizar al resto de los argentinos.

Entiendo que me estoy refiriendo a un tema conflictivo en el cual no quiero involucrar a nadie. Solamente hablo por mí mismo. Respeto las muchas razones que cada uno de mis compañeros de bancada o los señores legisladores pertenecientes a otros bloques tengan para pensar distinto. Pido para mí el mismo respeto. Es decir que si invoco solidaridad y conciencia, requiero que se me respete porque lo hago de buena fe.

En síntesis, voy a proponer la inclusión del nuevo artículo que acabo de enunciar y a pedir que se deje constancia —aun a riesgo de la soledad, porque éstos son los riesgos que impone lo que yo creo un deber de conciencia— de aquel o aquellos que voten en favor de esta modificación, pese a las dificultades que tenemos con la registración electrónica.

**Sr. Presidente (Romero, C. A.).** — Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.

**Sr. Leconte.** — Señor presidente: de acuerdo con la redacción que tiene el despacho de la comisión, este artículo 10 es a mi criterio inconstitucional y afecta un tema que hoy adquiere mayor urgencia que nunca, como es la seguridad jurídica en el país.

Se ha dicho en estos últimos días, a raíz de la conmoción...

**Sr. Lafalla.** — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con el permiso de la Presidencia?

**Sr. Leconte.** — Sí, señor diputado.

**Sr. Presidente (Romero, C. A.).** — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

**Sr. Lafalla.** — Señor presidente: a los efectos de ordenar el debate, debo señalar que he propuesto un nuevo artículo y entiendo que el señor diputado Leconte se está refiriendo a un tema distinto.

**Sr. Presidente (Romero, C. A.).** — El señor diputado formuló una propuesta y hay muchos ora-



dores anotados para referirse a este artículo. Cuando la comisión se expida va a contestar al señor diputado y entonces su propuesta se pondrá a votación si la comisión la estima procedente.

**Sr. Lafalla.** — Son dos artículos distintos, señor presidente.

**Sr. Presidente** (Romero, C. A.). — Pero se considerará cuando la comisión se expida. Tal es la manera de trabajar.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Corrientes.

**Sr. Leconte.** — Señor presidente: cuando se trate la propuesta del señor diputado Lafalla me voy a referir a su iniciativa. Ahora continuaré refiriéndome al artículo 10.

Tal cual está redactado, resulta verdaderamente inconstitucional y genera una inseguridad jurídica que hoy más que nunca tenemos que evitar, sobre todo cuando todavía estamos sacudidos por los efectos de la conmoción financiera de México, que a todos nos han llegado; y como bien decía un diario en los últimos días, es evidente que en el país estamos en el camino correcto, pero no hemos llegado a destino porque tenemos que alcanzar una serie de objetivos, para cuyo logro la seguridad jurídica es fundamental.

— Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, doctor Carlos Ernesto Soria.

**Sr. Leconte.** — Como siempre que cuestiono alguna iniciativa, propongo otra en su reemplazo. En sustitución de la segunda parte del artículo en consideración, sugiero el siguiente texto: "No se aplicará retroactivamente a los beneficiarios de regímenes anteriores a su entrada en vigencia." La actual redacción dice: "No se aplicará retroactivamente respecto de haberes correspondientes a períodos anteriores a su entrada en vigencia".

Tal cual está el texto, significa que lo que ya hubieran percibido los jubilados antes de la fecha de sanción de la ley no entra en discusión. Pero los haberes ulteriores de los que hoy son beneficiarios sí pueden ser modificados, y esto quiere decir retroactividad de la ley, que es justamente lo que la Constitución prohíbe.

En este sentido, existe una abundante jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; menciono a título de ejemplo: "Recurso de hecho deducido por Rodolfo Alvarez en la causa Alvarez, Rodolfo, s/jubilación", "Petrino, Pedro, s/recurso extraordinario", "Tangari, Luis Salvador, s/recurso extraordinario". En homenaje a la brevedad, solicito que se inserten en el Dia-

rio de Sesiones, a esta altura de mi exposición, los textos conteniendo los aspectos fundamentales de estos fallos jurisprudenciales.

#### Inserción solicitada por el señor diputado Leconte 1

"Recurso de hecho deducido por Rodolfo Alvarez en la causa Alvarez, Rodolfo, s/jubilación". 19 de diciembre de 1983: "..., aun cuando el Tribunal se ha expedido en el sentido de limitar la protección constitucional al otorgamiento del beneficio previsional, admitiendo la posibilidad de alterar los sistemas en virtud de los cuales se fija la movilidad de los haberes, tal modificación debe entenderse limitada a las hipótesis en que dicho cambio no produzca lesión al patrimonio del jubilado. Que, es precisamente la necesidad de atender a las circunstancias particulares del caso, especialmente al régimen originario a cuyo amparo se adquirió la condición de jubilado y a la comparación de la situación patrimonial derivada de aquél y del nuevo adoptado, lo que ha de contemplar para efectuar un juicio válido que ponga en relieve la existencia o no de la lesión constitucional que se alega... Sin perder de vista que el peticionario obtuvo un beneficio que le aseguraba el 82 % móvil del sueldo que percibiría el agente en actividad del mismo cargo, corresponde aceptar que la reducción convalidada en autos, derivada de la aplicación del sistema de coeficientes, se presenta como irrazonable, por excesiva... El nuevo pronunciamiento deberá contemplar la situación del peticionario, tratando que la actualización de los haberes se realice de modo tal que le permita mantener el nivel de vida alcanzado durante su actividad laboral, para lo cual deberá disminuirse el porcentaje admitido al presente...".

"Petrino, Pedro, s/recurso extraordinario". 24 de mayo de 1983: "No es arbitraria la sentencia que ha buscado la solución que mejor se compadezca con los principios constitucionales, en particular si se atiende al carácter alimentario del beneficio, pues si a la inseguridad derivada de las fluctuaciones económicas, se le suma la no menos grave incertidumbre impuesta por coeficientes que, como en el caso, no siempre respetan de manera objetiva el respectivo haber jubilatorio, se tornaría ilusorio el carácter sustitutivo del beneficio que responde al fin superior de permitir que el afiliado pueda gozar, en la última etapa de su vida, del nivel alcanzado durante la actividad laboral. Corresponde confirmar la sentencia que declara la inconstitucionalidad del artículo 17 de la ley 18.037".

"Tangari, Luis Salvador, s/recurso extraordinario". 14 de marzo de 1978. "Si bien es constitucionalmente descalificable, a la luz del artículo 14 nuevo de la Ley Fundamental, la privación absoluta de movilidad en los haberes jubilatorios por un término incierto (cfr. causas I. 22, XVII 'Incarnato, A. A.' y V. 86, XVII 'Verón, Antenor B.', fallos del 31 de agosto de 1976 y del 15 de marzo de 1977 y sus citas, respectivamente), el tribunal ha declarado también que la mo-

1 Véase la aprobación de la inserción solicitada en la página 5759.

validad de las prestaciones que contempla el artículo 51 —texto originario— de la ley 18.037, sobre la base del haber que se determina de acuerdo con el artículo 45 de ese texto, constituye una reglamentación razonable del principio de la movilidad que consagra la cláusula constitucional predicha (sentencia del 31 de agosto de 1976, cons. 6º, en la ya citada causa H. 45. XVII)."

Sr. Leconte. — Sin perjuicio de estos antecedentes, desco referirme especialmente a un fallo de esta Corte, de fecha 24 de marzo de 1994, que lleva la firma de los doctores Julio Nazareno, Carlos Fayt, Augusto Belluscio, Enrique Petracchi, Ricardo Levene (h.) y Eduardo Moliné O'Connor.

Dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los autos "Jawetz, Alberto s/apelación resolución de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal": "...este tribunal ha decidido en forma reiterada que la Constitución Nacional no impone una versión reglamentaria en materia de validez intertemporal de leyes, por lo que el legislador o el juez, en sus respectivas esferas, podrán establecer o resolver que la ley nueva destruya o modifique un mero interés, una simple facultad o un derecho en expectativa ya existente. Pero en cada oportunidad en que se ha sentado dicho principio esta Corte ha expresado con particular énfasis que ni el legislador ni el juez podrían en virtud de una ley nueva o de su interpretación arrebatar o alterar un derecho patrimonial adquirido al amparo de la legislación anterior, pues en este caso el principio de la no retroactividad deja de ser una norma infraconstitucional para confundirse con la garantía de la inviolabilidad de la propiedad reconocida por la Ley Suprema...".

Este fallo terminante de la actual y cuestionada Suprema Corte de Justicia muestra la jurisprudencia que defiende los derechos adquiridos. En materia jubilatoria, con el artículo 10 propuesto por la Comisión quedan en el aire todos los derechos de los tres millones 200 mil jubilados del país, ya que con la ley de presupuesto cada año se podrán modificar para arriba y también para abajo sus haberes violando, en este último caso, la Constitución y generando un semillero de pleitos.

Sobre este mismo tema la doctrina ha sido terminante. En este sentido el doctor Germán Bidart Campos, en la página 675 del tomo 104 de "El Derecho", dice textualmente: "Desde tiempo atrás habíamos sostenido nosotros —como principio— la inconstitucionalidad del tope máximo en los beneficios de la seguridad social, no tanto en algunos casos —como éste que en particular comentamos— porque esconda cercenamiento

desproporcionado, sino en otros. Y ello porque si el afiliado mientras trabaja está obligado a aportar sobre la totalidad de su remuneración, por elevada que sea, no es justo que al jubilarse se le retacee el haber que de acuerdo a la ley debe guardar, en su primera fijación originaria, determinada relación numérica...".

La doctrina y la jurisprudencia de la Corte Suprema nos enseñan el camino y nos muestran la gravedad de la norma que se quiere imponer. Gregorio Badeni, en su *Tratado de derecho constitucional*, capítulo referido a las libertades y garantías, dice textualmente refiriéndose a la jurisprudencia de la Corte, en la página 493: "El legislador puede disponer que la ley nueva destruya o modifique un mero interés, una simple facultad o un derecho en expectativa ya existentes, pero no puede arrebatar o alterar un derecho patrimonial adquirido al amparo de la legislación anterior, porque en este caso se estará vulnerando la inviolabilidad de la propiedad prevista en el artículo 17 de la Constitución".

La norma que se quiere sancionar afecta derechos adquiridos en general y no mejora la condición de aquellos que menos tienen. También afecta a muchos ex magistrados judiciales que actuaron honestamente, se dedicaron por entero al noble ejercicio de administrar justicia y un buen día, al término de sus tareas, descubren que sus jubilaciones pueden ser cercenadas con grave daño para su propio patrimonio: lo que es peor, ello abre la tentación de buscar recursos de otra manera que no sean las legítimas que corresponden a una Justicia honesta, porque podrían temer encontrarse con una jubilación que no les permitiría vivir dignamente. Y eso a cambio de no mejorar nada a nadie.

Cuidemos la seguridad jurídica, la independencia del Poder Judicial y evitemos semilleros de pleitos. Por las razones expuestas, vamos a votar en contra de este artículo 10 tal cual ha sido propuesto por la comisión.

Con la misma manera constructiva en que siempre encaramos los debates, proponemos una redacción alternativa, compatible con la Constitución y con las intenciones que con respecto al futuro tiene el despacho en consideración. Por ello vamos a votar por la negativa.

Al término del debate de este artículo quisiera conocer la opinión de la comisión, a quien ya adelanté el sentido de mi propuesta, que consiste en sustituir la redacción del punto 2 del artículo 10 por el siguiente texto: "No se aplicará retroactivamente a los beneficiarios de regímenes anteriores a su entrada en vigencia". Reitero que el texto de la comisión expresa: "No se aplicará retroactivamente respecto de haberes

correspondientes a períodos anteriores a su entrada en vigencia”.

Con relación a la iniciativa del señor diputado Lafalla, luego brindaremos nuestra opinión.

**Sr. Presidente (Soria).** — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

**Sr. Natale.** — Señor presidente: el señor diputado Leconte ha señalado con precisión el carácter inconstitucional del segundo apartado del artículo en consideración. Yo quiero referirme al primer apartado, que también incurre en una grosera inconstitucionalidad.

Allí se dice que la presente ley es federal, lo que parecería constituir una perogrullada. No se trata de una ley de carácter provincial, porque el Congreso Nacional no sanciona leyes provinciales, ni tampoco está actuando como legislatura local de la Capital Federal. De manera que una ley sancionada por el Congreso de la Nación siempre es federal.

Inmediatamente después el primer apartado declara que la presente ley es de orden público, lo que constituye otra perogrullada, porque ninguna de sus disposiciones podría ser alterada por acuerdo entre las partes. Ningún jubilado podría expresar su voluntad de cobrar menos de lo que le corresponde, ni la ANSES podría disponer pagar a un jubilado más de lo que le corresponde. Entre ellos no pueden pactarse modificaciones a las disposiciones de la presente ley. Obviamente, una norma de este tipo es de orden público.

Si se trata de dos perogrulladas, cabe preguntarse por qué han sido colocadas en el texto por la pluma sutil de la asesoría jurídica del Ministerio de Economía. Quiero enunciar algunas razones para ello, las que muestran el alcance inconstitucional de esta norma.

El viejo inciso 11 del artículo 67 de la Constitución Nacional disponía que corresponde al Congreso dictar los códigos Civil, Comercial, Penal, de Minería, y del Trabajo y Seguridad Social. Actualmente esta disposición se encuentra en el inciso 12 del artículo 75 de la Constitución Nacional.

La materia previsional es competencia del Congreso de la Nación, pero la Constitución dispone que esa atribución no altera el ejercicio de las jurisdicciones locales. Vale decir que toda esa legislación federal es aplicada por los jueces provinciales y no por los federales. Por ello, para ejercer la xia jurisdiccional la ley 23.473 creó la Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social, que es una cámara local que actúa en la Capital Federal. No es una cámara federal y por eso se llama nacional, siendo la única que tiene competencia para conocer en esta materia

como alzada de las disposiciones administrativas de la ANSSAL.

Ahora bien, al declararse federal la legislación, se lo hace en forma concomitante con la decisión de transformar la cámara nacional en cámara federal. ¿Para qué se hace esto? ¿Simplemente para cambiarle el nombre? No, señor presidente; se lo hace para habilitar una apelación ordinaria ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si la cámara nacional siguiese siendo tal, la apelación ante la Corte tendría que ser extraordinaria, pero como pasa a ser federal, la apelación puede ser ordinaria.

¿Y para qué habilitar una apelación ordinaria? Para crear luego la casación que prevé el artículo 17 *in fine*: “Los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación serán de obligatorio seguimiento por los jueces inferiores en las causas análogas.”

La casación de las sentencias dispuestas por la Corte puede ser largamente debatida en el campo doctrinario —inclusive ha existido en nuestro país—, pero evidentemente está reñida con los principios tradicionales de nuestro sistema constitucional que dispone que los jueces tienen independencia para juzgar según su leal saber y entender. Naturalmente que, al ser definitivos, los fallos de la Corte serán tenidos en cuenta por los jueces. Sin embargo, muchas veces los jueces de primera instancia, o las cámaras, son quienes comienzan a sentar jurisprudencia que finalmente termina recepcionando la Corte Suprema.

Por otra parte, puede cambiar la composición de la Corte, o bien su criterio, y de esa manera renace el derecho creado por los jueces con una interpretación distinta de la utilizada hasta ese momento.

Se va a innovar en una materia en la que realmente no tiene sentido hacerlo. ¿Con qué efecto, con qué alcance y objetivo se va a llevar a cabo?

Si la Corte establece que, por ejemplo, en la causa Benito procede o no el reajuste, luego sabremos si las cámaras se adecuan o no a ese fallo. Si no lo hacen, sus decisiones serán revocadas por la Corte, pero seguirán manteniendo su independencia de criterio.

Se me podrá decir que esto obliga a un trámite burocrático mayor. Es posible, pero ese es el sistema de derecho argentino y no veo razón para alterarlo en un caso particular como el del sistema previsional.

Volviendo al origen, se declara federal para sustraerla del principio jurisdiccional de que la competencia es la local, la del inciso 12 del artículo 75 de nuestra Constitución, que figuraba bajo el inciso 11, artículo 67, antes de su modifi-

cación. Acudir a la justicia Federal en competencia ordinaria en esta materia es jugar con lo que expresamente establece la Constitución.

No sé lo que la Corte podrá decir algún día sobre el particular, pero estoy seguro de que ningún tribunal bien plantado podrá sostener otra cosa que la que señalo en este momento porque es el abecé del derecho constitucional argentino.

Declarar federal esta legislación para el arbitrio posterior del recurso ordinario y de la casación de la sentencia es realmente una aberración y no ya una perogrullada, como señalé al comienzo.

Lo mismo ocurre con la declaración de orden público. La ANSES no va a pagar más de lo que debe ni los jubilados van a renunciar a cobrar lo que les corresponde. Estas normas no son de libre disponibilidad para las partes.

Se procede de esta forma para poder invocar la vieja norma del Código Civil según la cual nadie tiene derechos irrevocablemente adquiridos frente a una ley de orden público.

A esto se ha referido el señor diputado Leconte cuando cuestionó el segundo apartado de este artículo en el que se liquidan los derechos adquiridos de los beneficiarios del sistema previsional en contra de la jurisprudencia de esta Corte Suprema.

Tal como señaló el señor diputado Leconte hace unos instantes, se declara de orden público el contenido de esta ley para hacerla jugar con el antiguo principio del Código Civil que acabo de mencionar acerca de la inexistencia de los derechos adquiridos frente a leyes de orden público, reformado, desde luego, por el actual artículo 3º de dicho Código.

Es notorio que cualquier tribunal que realmente esté dispuesto a aplicar la Constitución Nacional y la doctrina permanente y constante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde hace muchísimas décadas hasta nuestros días, revocará disposiciones de esta naturaleza. Por lo tanto, votaremos en contra de este artículo tal como ha sido propuesto por la comisión. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Soria). — Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.

Sr. Lahoz. — Señor presidente: me referiré al segundo párrafo del artículo 10.

Coincido con la postura del señor diputado Leconte en cuanto a los riesgos de inconstitucionalidad de esa disposición. La Corte Suprema establece en su jurisprudencia que no existen derechos adquiridos en materia previsional hasta tanto los derechos sean otorgados efectivamente mediante la legislación. Cuando se ha fijado un monto de jubilación y el beneficiario

tiene derecho a cobrar una determinada suma de dinero, ya no se trata de un derecho previsional sino de un derecho de cobro de pesos. Por lo tanto, estoy convencido de que este artículo ataca ese derecho y, por tal razón, también estoy convencido de su inconstitucionalidad.

Sr. Arias. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la venta de la Presidencia?

Sr. Lahoz. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Soria). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Arias. — Señor presidente: reiteradamente se ha invocado la jurisprudencia de la Corte Suprema en torno de esta cuestión. Distintos expositores que me precedieron en el uso de la palabra han alegado que mediante el proyecto de ley en debate se estarían violando normas constitucionales.

La jurisprudencia permanente de la Corte establece que los montos de los beneficios previsionales pueden ser disminuidos, sin menoscabo de la garantía del artículo 17 de la Constitución, por razones de orden público o bien general, siempre que la reducción no resulte confiscatoria o arbitrariamente desproporcionada. Esta es una constante que se observa en la colección de "Fallos", por lo menos desde el tomo 174 en adelante. Al respecto no haré ninguna cita particularizada, pues todos los repertorios contienen información sobre cada oportunidad en que la Corte ha ratificado este precedente.

En otras palabras, se pueden reducir y modificar los haberes previsionales sin que por ello se atente contra el principio de los derechos adquiridos. En este sentido, la Corte ha establecido lo siguiente: "Por razones de interés general y cuando el estado financiero de las cajas así lo aconsejara, resulta legítima la rebaja de los haberes jubilatorios, en tanto ello no importa lesión a derecho adquirido alguno; empero, cuando la pérdida del poder adquisitivo de la prestación ocasionada que provenga de dicha quita es de tal magnitud que se traduce en un menoscho del nivel de vida del afiliado..." —es decir, cuando se afecta el principio de razonabilidad—, "...especialmente en épocas caracterizadas por las agudas fluctuaciones económicas, no es posible desatender al fin último de la previsión social ni a los principios que la sustentan, resultando admisible estimar irrazonable, por excesiva, la reducción aceptada por la sentencia respecto a la desproporción que convalida, al aplicar los topes máximos impuestos por el decreto 3.190/77". En consecuencia, no deben quedar dudas de que

lo dispuesto armoniza en un todo con la jurisprudencia sentada por las distintas composiciones de la Corte —ya sea en gobiernos constitucionales o de facto— en el sentido de no afectar derechos adquiridos cuando se toman medidas de esta naturaleza.

Sr. Presidente (Soria). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Corrientes.

Sr. Lahoz. — Señor presidente: comparto parcialmente lo manifestado por el señor diputado preopinante, porque si bien existen fallos de la Corte Suprema en el sentido por él apuntado, también hay otros que alegan otra posición, según lo cual se estaría dañando la constitucionalidad de un derecho cuando se ve disminuido por alguna ley o reglamentación.

De todos modos, considero inoportuno que esta norma se vea dañada por algún viso de inconstitucionalidad, sobre todo si tenemos en cuenta que los montos a los que se refiere el artículo en consideración son mínimos y estarían destinados sólo a 8 mil beneficiarios.

Sr. Presidente (Soria). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Polino. — Señor presidente: cuestiono lo dispuesto en el artículo en consideración por las razones apuntadas al tratarse los artículos 1º y 2º en lo relativo a la transformación del fuero común en federal para el tratamiento de las cuestiones previsionales, en virtud de que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha señalado en forma coincidente que éstas son de derecho común y no de derecho federal.

Por otra parte, coincido con el planteo formulado por el señor diputado Natale al cuestionar que en el texto del proyecto se exprese concretamente que la presente ley es federal y de orden público. Hago mías sus expresiones porque coincido con la interpretación de los textos constitucionales que el señor diputado realizó.

Además, el inciso 12 del artículo 75 de la Constitución Nacional es lo suficientemente claro como para abundar en mayores consideraciones. No obstante, advierto que lo que se pretende lograr con esta sanción es que la Corte Suprema de Justicia emita pronunciamientos en materia previsional favorables al criterio del Poder Ejecutivo nacional, que luego deberán ser aceptados por los tribunales inferiores quitándole autonomía a la Cámara de la Seguridad Social.

Por las razones expuestas, dejó constancia de nuestro voto negativo al artículo en consideración.

Sr. Presidente (Soria). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Hernández. — Señor presidente: adelanto el voto negativo del bloque de la Unión Cívica Radical al artículo en consideración por ser manifiestamente inconstitucional.

Para reforzar esta posición no he de abundar en mayores argumentaciones en virtud de que han sido suficientemente claras las razones expuestas por los señores diputados Natale, Leconte y Polino.

Estamos convencidos de que con esta norma se rompen criterios elementales del derecho constitucional argentino, se rompe la división de las distintas leyes que sanciona el Congreso de la Nación y se atenta indudablemente contra el sistema federal argentino.

Debo también hacer presente que en la reforma constitucional uno de los puntos centrales ha sido el fortalecimiento del federalismo de los argentinos, y si en este momento posibilitamos la sanción de esta norma no tengo la menor duda de que se va a producir un grave ataque al federalismo.

Por todas estas razones es que la Unión Cívica Radical, en defensa de claros principios constitucionales, en defensa del federalismo de los argentinos y en la idea de que la seguridad jurídica es un valor esencial dentro del estado de derecho, va a votar negativamente esta norma y las que tengan íntima correlación con ella.

Sr. Presidente (Soria). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Durañona y Vedia. — Señor presidente: por cierto que me han satisfecho las palabras que hemos escuchado de los señores diputados Leconte, Natale, Polino y Hernández, porque reconozco que han tocado cuestiones esenciales al sistema de la legislación argentina. Han dado elevación al debate las intervenciones que tomaron esta posición, sin perjuicio de las otras intervenciones que estimaron lo contrario.

No sé si es esta la oportunidad, en la que estamos tratando este proyecto de ley, para hacer ese examen tan prolijo y minucioso acerca de los defectos que la legislación argentina viene arrastrando desde décadas. Lamentablemente, se perdió una oportunidad en ocasión de la reforma constitucional realizada en las ciudades de Santa Fe y Paraná el año pasado. En lugar de haberse convalidado sistemas que ya hacían agua a principios de siglo y fueron denunciados por grandes autoridades de la política y del derecho, se tendrían que haber eliminado tales sistemas que hoy traen estos inconvenientes.

Como muy bien señalaron los señores diputados Polino y, en segundo lugar, Natale, el inciso 12 del artículo 75 de la Constitución Nacional dice que corresponde al Congreso dictar el Código de la Seguridad Social, o el Código del Trabajo y la Seguridad Social, para ser más exacto, y que corresponderá el juzgamiento de los casos que se presentaren a la justicia local ordinaria, como es bien sabido en estos casos, porque la propia Constitución se encarga de determinar que los códigos se dictan sin alterar la jurisdicción local, sea ésta judicial o administrativa.

¿Qué es lo que ocurre hoy en este ámbito de la seguridad social? Presentado un caso cualquiera en la provincia de Santa Fe, ¿alguien va a ir a la justicia local porque se trata de un sistema de seguridad social que está reservado a los jueces locales? No, señor presidente. ¿Alguien va a ir a la provincia de Corrientes, provincia que tan dignamente representa el señor diputado Leconte, a plantear a un juez local un problema de seguridad social? ¿Alguien va a plantear alguna cuestión porque el código no altere la jurisdicción local? No, señor presidente. Ha sido sustraído a las provincias el conocimiento de estos temas por la jurisdicción judicial y administrativa local.

Esto no ocurre a raíz de este proyecto, sino que viene de antes, porque hay un organismo administrativo federal que interviene en las cuestiones de seguridad social y por sus decisiones se debe recurrir a la Cámara Nacional de Apelaciones que está en la Capital Federal. ¿Dónde están las jurisdicciones locales de la Constitución Nacional?

Entonces, no es motivo esta iniciativa para hacernos cruces con las cosas que ya hemos hecho con la legislación argentina, donde no se cumple estrictamente el principio constitucional

Estaría de acuerdo si pudiéramos salvar en esta instancia la aplicación del principio constitucional con respecto al sistema de la seguridad social, pero ya no podemos hacerlo, porque tenemos un régimen que ha sustraído la competencia local y ha implantado la competencia federal en todo el país. Por consiguiente, esta reforma no trae las consecuencias que han mencionado los señores diputados.

Es verdad que esto también ocurre en otras disciplinas, porque el Código Penal también se dictó sin que se alteren las jurisdicciones locales, y por eso existió en tiempos de una adecuada técnica legislativa la famosa ley 49, que estableció el juzgamiento de los delitos federales.

Esa ley no existe más. Todos los delitos han sido incorporados al Código Penal, código que

se dictó sin alterar las jurisdicciones locales y, sin embargo, hay jueces federales en todo el país entendiendo en cuestiones penales porque lo indican las leyes respectivas, entre ellas las de lucha contra el narcotráfico, porque no son éstas disposiciones que estén en la Constitución.

Esto ocurre también en materia minera y con las leyes llamadas federales —indebidamente— de granos, de carnes, de té, de algodón, de azúcar, de yerba mate, que sustrajeron la competencia de comercialización en las provincias a la jurisdicción administrativa.

De manera que la oportunidad para esto era en Santa Fe el año pasado, no ahora en virtud de considerarse este proyecto, porque el vicio no viene con él, como muy bien han señalado los señores diputados.

Coincidió en que no hay razón para llamar federal a una ley, porque supongo que estamos en el Congreso federal. Entiendo que la Constitución ha organizado un gobierno federal —así lo llama— con tres poderes, y aquí estamos integrando uno de ellos, que es el Congreso federal, que obviamente dicta leyes que tienen ese origen.

Según la Constitución, las leyes son nacionales o provinciales. Esto de ley federal no tiene razonabilidad alguna, ni siquiera la que apuntaba como posible motivación el señor diputado Natale.

De todas maneras, tampoco es este el primer proyecto que incurrirá en esa especie de jactancia legislativa cuyo significado no se entiende muy bien. Estoy de acuerdo si se pretende borrar la palabra "federal". No vamos a resolver la situación de todas las demás leyes que se han dictado, y con respecto a algunas ya he hecho mención expresa de este asunto en el recinto.

Dice el señor diputado Natale que con esto se busca que nadie tenga derechos irrevocablemente adquiridos respecto de una ley de orden público.

Efectivamente, nadie tiene derechos irrevocablemente adquiridos respecto de una ley de orden público, y esta iniciativa tiene esa característica, porque hay cierta advertencia de parte de sectores oficiales sobre lo que se ha hecho en los últimos tiempos, en que las partes han ido a convenir libremente en los juzgados cómo van a componer sus intereses con homologación judicial. Esto dio lugar a escandalosos casos de venalidad donde se han combinado representantes de la administración pública con particulares, y hemos tenido en esta Cámara incluso la sanción y acusación de jueces que han estado implicados en ese tipo de cuestiones. No vaya a ocurrir que demandas de esta



naturaleza puedan tener una composición de interés distinta a la que dice la ley.

Entonces, no me parece mal invocar el orden público, y lo natural en este tema es que así suceda. No existen personas que posean derechos irrevocablemente adquiridos respecto de una ley de orden público.

Cuando se reformó la Constitución de mi provincia en 1934, se propuso suprimir una cláusula constitucional que establecía la prohibición de las leyes sentencia. La Convención votó esta supresión y se hallaba todavía reunida cuando se dictó una ley que implicaba una reducción a los haberes previsionales. Entonces, los constituyentes reaccionaron y dijeron que ésa era la consecuencia de haber suprimido la prohibición de las leyes sentencia, que son las que ponen fin al pleito por parte del propio Estado demandado.

Correspondió al diputado conservador José Arce —médico— la explicación más notable sobre cómo con esas previsiones o sin ellas nadie puede tener derechos irrevocablemente adquiridos en sistemas como estos que tratamos. Recomendando los antecedentes que citó ese antiguo constituyente —después embajador de la República— que a mi entender dio un final rotundo en un debate donde se trataron cuestiones de esta naturaleza.

Creo que el derecho adquirido que es doctrina de la Corte, el derecho adquirido que es de la civilización y de nuestro orden jurídico está dado en que no puede revocarse el otorgamiento definitivo de un beneficio previsional; no está en el monto que tenga ese beneficio. Existe también jurisprudencia de la Corte que así lo ha declarado.

Nuestra primera ley de jubilaciones, muy imperfecta, que data de alrededor de 1880, ya decía que puede reducirse el haber previsional siempre que la reducción tenga la característica de la generalidad, y me parece que no se afecta esa característica porque la reducción general es para aquellos que tienen haberes máximos de jubilación, tal como lo afirma la jurisprudencia de la Corte. Ojalá que las reducciones fueran todas como ésta en un sistema de solidaridad, y no la disminución compulsiva que se sufrió en este país cada vez que se envileció el valor de la moneda, cada vez que se emitió sin tasa ni medida y cada vez que se pulverizaron el salario y la jubilación.

Vean los señores diputados lo que quedó de las jubilaciones en la Argentina en una época más o menos reciente, para saber que nada tiene que ver ese atropello omnipotente del Estado para disminuir las prestaciones de las

personas con esta otra reducción de solidaridad previsional.

He conversado con jueces de la República, por quienes tengo el respeto de quien ha nacido en el hogar de un magistrado que ejerció durante 56 años tales funciones. Si bien ellos habían reclamado por los principios que sostenía el texto originario de este proyecto porque era realmente confiscatorio, encuentran ahora que esta modalidad que ya hemos votado en el artículo anterior está ajustada a una razonabilidad. Por eso considero que estas cuestiones que se discuten debieron debatirse en la Asamblea Constituyente.

Hoy en día, tenemos que esperar el debate sobre el sistema de la legislación argentina para impedir que se sigan poniendo motes inebidos en la legislación, pero no es en este caso donde está ocurriendo el pecado mayor.

Por consiguiente, sin perjuicio de que estaría conforme en que se dijera que la presente ley es de orden público, me parece que en lo demás la Cámara puede votar el artículo tal cual está redactado.

No lamento demasiado el tiempo que han llevado estas exposiciones, porque es un tema que de todos modos había que tratarlo. En las discusiones en particular es donde se arroja claridad acerca del pensamiento de los legisladores. En este sentido, observo ahora en los tribunales los problemas gravísimos que creó nuestra deficiente discusión en particular de la famosa ley conocida como la del dos por uno, donde nadie sabe si es para procesados o para condenados que cumplen su condena.

Me parece que tenemos que ser más prolijos en orden a esta discusión de las leyes artículo por artículo, por lo que entiendo que el tiempo que hemos insumido los señores diputados en este debate resultará beneficioso.

**Sr. Presidente (Soria).**— Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

**Sr. Sueiro.**— Señor presidente: la comisión mantiene el texto del artículo tal como figura en el texto en consideración.

**Sr. Leconte.**— Pido la palabra para una aclaración.

**Sr. Presidente (Soria).**— Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.

**Sr. Leconte.**— Señor presidente: ratifico todo lo expuesto en esta materia. Si bien hay algunos fallos de la Corte que destacan que no se trata de un principio absoluto, y que mientras no sea confiscatorio ni irrazonable puede hacerse algún recorte muy parcial, reitero los fundamentos de la doctrina que son los que yo interpreto y uti-

lizo en respaldo de mi propuesta de modificación, a pesar de que el representante de la comisión acaba de adelantar que se mantiene el texto original.

**Sr. Presidente (Soria).** — Se va a votar el artículo 10.

— Resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Soria).** — En consideración el artículo 11.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

**Sr. Sueiro.** — Señor presidente: respecto de este artículo la comisión propone la siguiente modificación en el punto 1º, que quedaría redactado de esta forma: "Deróganse los artículos 125, 158, inciso 6, y 160 de la ley 24.241, así como toda otra disposición que se oponga a la presente ley".

El punto 2º quedaría redactado tal cual está.

**Sr. Presidente (Soria).** — Se va a votar el artículo 11 con la modificación propuesta por la comisión.

— Resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Soria).** — En consideración el artículo 12.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

**Sr. Durañona y Vedia.** — Señor presidente...

**Sr. Sueiro.** — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con el permiso de la Presidencia?

**Sr. Durañona y Vedia.** — Sí, señor diputado.

**Sr. Presidente (Soria).** — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

**Sr. Sueiro.** — Señor presidente: se había acordado la incorporación de dos artículos al texto de la norma. En definitiva queremos saber si la propuesta la efectuará la comisión.

**Sr. Presidente (Soria).** — La propuesta debe formularla usted, señor diputado.

**Sr. Sueiro.** — Entonces, sugerimos incorporar como nuevo artículo 12 el siguiente texto: "Cuando de acuerdo con lo establecido por el pacto fiscal (ley 24.307) para la producción y el empleo, se transfieran cajas de previsión social provincial al régimen previsional público nacional, y los primeros registraren déficit operativo, deberá habilitarse el correspondiente crédito presupuestario sin que afecten los recursos que la presente ley asigna al sistema previsional público nacional".

**Sr. Presidente (Soria).** — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

**Sr. Santín.** — Señor presidente: el bloque de la Unión Cívica Radical adhiere a la redacción de este artículo.

**Sr. Presidente (Soria).** — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

**Sr. González Caviola.** — Señor presidente: creo que este artículo es nada más que una expresión de deseos, que va a servir como excusa al radicalismo para blanquear su presencia en el recinto. La variable de ajuste es el presupuesto nacional, y esto que se plantea aquí y en el otro artículo al que seguramente van a dar lectura con posterioridad, es totalmente insustantivo porque lo que se quita en una partida se pone en la otra como compensación.

Distinto habría sido si se hubiese aceptado la propuesta en el sentido de que se definieran con claridad los aportes en lugar de dejar librada la cuestión a esta masa negra de recursos que puede ser fácilmente manipulable.

**Sr. Santín.** — Pido la palabra para una aclaración.

**Sr. Presidente (Soria).** — Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

**Sr. Santín.** — Señor presidente: el complejo que tiene el señor diputado por Mendoza por sentirse responsable de haber entregado el régimen previsional en la Argentina dando quórum a una ley fundamental, lo lleva a pensar que los demás bloques tenemos necesidad de blanquearnos. El radicalismo no es una alternativa oportunista que nace y desaparece y que accede al poder de la mano de Menem y después lo entrega en función de estas cosas. (Aplausos.) No necesitamos blanquearnos en absoluto. Esto lo hacemos en defensa del sistema jubilatorio.

Si el señor diputado por Mendoza cree que las cajas deben ser financiadas con los fondos de los jubilados que lo diga con absoluta claridad.

Según la posición en la que nos puso la ciudadanía que designó 83 diputados por el radicalismo y una mayoría justicialista, la responsabilidad de esta norma es del bloque oficialista. Nosotros hacemos todos los intentos posibles dentro de ese marco para que la iniciativa sea lo mejor posible dentro de lo peor.

En función de ello, con estos dos artículos tratamos de que se desfinancie lo menos posible el sistema jubilatorio y de evitar que los jubilados tengan cada vez menos.

**Sr. Presidente (Soria).** — Por haber sido aludido, tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

**Sr. González Gaviola.** — Señor presidente: de ninguna manera me siento arrepentido por haber votado una ley previsional en la que se dotaba de garantías y de sistemas de movilidad tanto al régimen de capitalización como al de reparto. Eso tenía visos de ser un sistema previsional —tanto en un caso como en el otro— que permitía mejorar el ya existente que estaba en crisis.

No me senté a votar —y esto lo saben los compañeros de mi bancada— hasta que aparecieron las garantías y el 40 por ciento del salario mínimo en la prestación básica universal. En caso contrario, yo no daba quórum ni votaba con mi bancada. Una conducta firme como la que mantuve —que fue acompañada por la de muchos compañeros— permitió que esa ley fuera mejorada sustancialmente. Lo que hoy estamos votando es de tal indignidad que no resiste ningún parangón. Tenemos una iniciativa que no tiene garantías ni movibilidades. Si la Unión Cívica Radical tuviese una conducta consecuente, no estaríamos a punto de consumir esta indignidad que hoy tenemos que vivir en este recinto.

**Sr. Presidente (Soria).** — Se va a votar el nuevo artículo 12 propuesto por la comisión.

—Resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Soria).** — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

**Sr. Sueiro.** — Voy a proponer un nuevo artículo, que llevaría el número 13: "Incorpórase como segundo párrafo del artículo 188 de la ley 24.241, el siguiente texto: 'Las contribuciones patronales destinadas al financiamiento de la seguridad social podrán ser disminuidas por el Poder Ejecutivo nacional únicamente en la medida en que fueran efectivamente compensadas con incrementos en la recaudación del sistema, o con aportes del Tesoro que equiparen dicha reducción'".

**Sr. Presidente (Soria).** — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

**Sr. Santín.** — Señor presidente: en primer lugar, quisiera saber si el señor diputado González Gaviola votó por la negativa el artículo anterior.

**Sr. Presidente (Soria).** — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

**Sr. González Gaviola.** — Las propuestas de los dos últimos artículos me parecen una muy

bucna expresión de deseos. He votado afirmativamente, señalando que se trata de una expresión de deseos y no de algo sustantivo.

**Sr. Presidente (Soria).** — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

**Sr. Santín.** — El bloque de la Unión Cívica Radical adelanta el voto por la afirmativa con respecto al nuevo artículo propuesto por el señor diputado Sueiro.

**Sr. Presidente (Soria).** — Se va a votar el nuevo artículo, que llevaría el número 13.

—Resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Soria).** — En consideración el artículo 12, ahora artículo 14.

Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

**Sr. González Gaviola.** — Señor presidente: a esta altura de la noche y dado lo avanzado del trámite, me voy a permitir salir un poco de la solemnidad y expresar una ironía. A esta iniciativa se la ha tratado con el título de "Ley de Solidaridad". Apelando a una figura que no sé si sigue siendo menemista, diría: "Solidaridad, ja, ja, ja".

En estas modificaciones que se plantean al régimen procedimental de la justicia se muestra con claridad cuál es el efecto de la solidaridad y para quienes funciona. Voy a hacer un análisis global de todo el tema para evitar dar una interpretación de cada artículo en particular...

**Sr. Presidente (Soria).** — Señor diputado: se está tratando artículo por artículo, por lo que la Presidencia le solicita que se refiera específicamente al artículo en consideración.

**Sr. González Gaviola.** — El artículo 12, ahora 14, habla de las normas por las que deberá regirse el sistema procedimental, lo que torna absolutamente inviable la posibilidad de que un jubilado acceda a la Justicia.

Este proyecto pretende ser solidario, pero sin embargo aquellas personas de menores recursos, que cobran 140 pesos y que tenían la posibilidad de litigar sin cargo, a partir de estas normas tendrán que hacerlo con cargo a su orden.

Por otra parte, las modificaciones al sistema procedimental alargarán los plazos, que hoy se estiman en un promedio de un año y medio, los que en casos extremos llegarán a cuatro o cinco años.

Por si ello fuera poco, si un jubilado tiene suerte y logra alguna sentencia favorable no tiene la garantía de que se le liquidará lo que esa sentencia ordena porque se genera en el

Estado un status jurídico superior según el cual los fondos de la ANSES son inembargables.

Queda claro que esta solidaridad juega en contra de los jubilados y a favor del Estado y de los intereses con los cuales está asociado en este momento.

Sr. Presidente (Soria). — Se va a votar el artículo 12, ahora 14.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Soria). — En consideración el artículo 13, ahora 15.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Gauna. — Señor presidente: no voy a repetir la discusión planteada en cuanto a la ley federal, nacional o local, pero debo señalar que en esta norma que estamos por votar la competencia se otorga a los juzgados federales en lo contencioso administrativo de la Capital Federal y a los juzgados federales con asiento en las provincias.

Más allá de esta cuestión, quiero plantear que estamos cambiando el régimen que antes consistía en un recurso directo ante la Cámara Nacional de Previsión Social. Estamos transformando este mecanismo en una acción contencioso administrativa, lo que encierra un grave peligro si no se aclaran algunos aspectos.

Todos sabemos que el Estado es renuente a ser llevado ante los jueces y el mecanismo contencioso administrativo que surge de la ley 19.549 nos plantea la necesidad de que esclarezcamos precisamente —este es un tecnicismo que lamento, pero que debo plantear— que la habilitación de la instancia no dependerá de ningún administrativo que pretenda agotar la vía administrativa.

Este es el problema de la ley contencioso administrativa. Para llegar a sede de la justicia hay que agotar la vía administrativa. Si no ponemos una frase en la que se establezca que directamente se va a ir luego de la decisión de la ANSES y que la habilitación de la instancia ocurrirá sin necesidad de recurso administrativo alguno, lo que vamos a conseguir será que los fiscales digan que no está habilitada la instancia porque no se ha planteado el recurso de reconsideración frente a esa decisión. Por ende, todos aquellos que vayan a los jueces contenciosos o jueces federales se encontrarán con que la instancia no está habilitada.

Por tal motivo propongo que al final del artículo se agregue: "Para la habilitación de la instancia no será necesaria la interposición de recurso alguno en sede administrativa".

Con esto quedará superada esta espada de Damocles que tendrá quien quiera pleitear frente a esta nueva circunstancia en una acción contencioso administrativa.

Por ello solicito a la comisión —aunque advierto que el señor diputado Sueiro no me está escuchando con mucha atención— que se agregue en este artículo, repito, la siguiente frase: "Para la habilitación de la instancia no será necesaria la interposición de recurso alguno en sede administrativa". Esto quiere decir que con la resolución de la ANSES directamente queda habilitada la instancia en la sede de los juzgados federales que aquí se mencionan.

Sr. Presidente (Soria). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Orquín. — Señor presidente: sin entrar a contestar los agravios que se nos han proferido hace algunos minutos acerca de nuestra permanencia en el recinto, quiero manifestar que uno de los motivos de nuestra permanencia aquí es casualmente este artículo 13 del proyecto, que ha pasado a ser 15.

En la propuesta original del Poder Ejecutivo se establecía que todos los juicios en materia previsional se iban a tramitar en la Capital Federal ante la Cámara Nacional de la Seguridad Social. Esto implicaba que todos los habitantes de la República, fueran del lugar que fuere, debían tramitar sus pleitos en Buenos Aires; esto sí hubiera significado una denegatoria de justicia.

Como señalaran el señor diputado Santín y otros compañeros de bloque, ha habido una serie de conversaciones. Una de las modificaciones que logramos que el oficialismo aceptara —no bleza obliga— fue casualmente aquella que se refiere a la posibilidad de que los jubilados del interior promuevan sus demandas ante los juzgados federales de cada una de las provincias. El logro no ha sido poco. Si esta hubiese sido la única causa por la que permanecemos en el recinto, personalmente no habría estado arrepentido de hacerlo así.

Sr. Presidente (Soria). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Durañona y Vedia. — Señor presidente: efectivamente, el señor diputado Orquín fue la voz cantante de esa modificación, que se obtuvo a sus instancias. No sé si los jubilados se lo van a agradecer, porque habrá que ver cómo funciona esto en la práctica. De todas maneras, en la Comisión de Justicia compartimos su inquietud.

Con respecto a la propuesta formulada por el señor diputado Gauna, aconsejo aceptarla, y en consecuencia, incorporar el texto que ha sido leído por él.

**Sr. Presidente (Soria).** — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

**Sr. Sueiro.** — Señor presidente: quiero aclarar que en relación con este tema asume la condición de miembro informante el señor diputado Durana y Vedia, quien es el presidente de la Comisión de Justicia. Formulo esta aclaración a la Presidencia, pues hace instantes el señor diputado Gama dijo que yo no lo escuchaba, pero posiblemente fue él quien no escuchó que el miembro informante sería el señor diputado Durana y Vedia.

**Sr. Presidente (Soria).** — Se va a votar el artículo 13, ahora 15, con la modificación propuesta y aceptada por la comisión.

— Resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Soria).** — En consideración el artículo 14, ahora 16.

Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.

**Sr. Garay.** — Señor presidente: en este artículo se establece la posibilidad de que la Administración Nacional de la Seguridad Social argumente en su defensa la limitación de recursos del presupuesto, lo que representa a su vez una restricción de responsabilidad que unilateralmente impone el Estado en los pleitos en los que es parte. Esto es igual a que un acreedor diga que no tiene dinero en el bolsillo y ello sea suficiente para suspender o agotar la instancia. Por supuesto, esta posibilidad no respeta la igualdad de las partes en un juicio y le da un irritante privilegio al Estado.

De todos modos, más allá de las falencias que tiene el artículo en consideración, solicito a los miembros informantes que expliquen qué sucede con las costas cuando con legítimo derecho el actor promoviera y acreditara suficientemente el crédito que tiene contra el Estado y éste opone la excepción establecida en el presente artículo en el sentido de que en el presupuesto no están calculados los medios suficientes para cubrir la demanda. En ese caso, ¿quién paga las costas?

Por otra parte, ¿la excepción suspende el proceso y el actor puede cobrar en el próximo presupuesto? ¿Enerva definitivamente la acción y la agota por vía de la excepción?

Requiero de los señores miembros informantes se sirvan aclarar cuál es la interpretación del presente artículo y en caso de que no hayan tomado en cuenta que estas pautas deben ser reguladas les propongo —dentro de lo pésimo que resulta lo que estamos haciendo como acto legislativo— que se aclare qué sucede con las costas, y si la excepción simplemente suspende

la acción en qué término lo hace o si ello significa el agotamiento de la acción, lo que implicaría la necesidad de promover una nueva demanda en el presupuesto inmediato siguiente.

Entiendo que estas cuestiones deben quedar perfectamente aclaradas en el presente artículo.

— Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, don Alberto Reinaldo Pierri.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Tiene la palabra la señora diputada por Salta.

**Sra. Maidana.** — Señor presidente: deseo hacer conocer el criterio que sustenta el Partido Renovador de Salta en relación con lo dispuesto en los artículos 16, 17, 20 y 21.

Adelanto que votaremos en contra de lo dispuesto en los referidos artículos por entender que el Estado no puede renunciar al derecho y la obligación de atender la seguridad social. Tampoco puede cruzarse de brazos ni disponer como defensa en ninguna instancia del juicio que no va a atender el reclamo que le formule algún beneficiario porque carece de recursos.

Consideramos que el cumplimiento de una obligación es básico en cualquier sistema jurídico de un país ordenado. Por ello, si este gobierno se precia de eficiente y pretende que la Argentina llegue al año 2000 como un país del primer mundo, no puede renunciar a esta elemental obligación para con los beneficiarios ni expresar que no ha de arbitrar una solución adecuada para casos semejantes, porque ello implicaría introducir un elemento perturbador en nuestro orden jurídico ya que en ninguna etapa de nuestra organización política y constitucional he encontrado una norma que sirva de antecedente para que un organismo estatal diga que no va a cumplir una obligación porque carece de fondos. Esto es un mal ejemplo para la comunidad. Pienso que si sancionamos esta norma en algún momento el consumidor se presentará también a decir a su almacenero que no le va a pagar porque no tiene recursos, y de esta forma llegará a perturbarse toda la paz que debe existir en un pueblo que realmente es organizado.

Esto no puede hacerlo el Estado y pienso que una norma semejante no es ética. De modo que vamos a votar en contra de estos dos textos y de los que tienen correlatividad, que vendrían a ser con la nueva numeración los artículos 22 y 23.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

**Sr. Ibarreche.** — Señor presidente: todo el capítulo referente al procedimiento en la instancia judicial lo puedo calificar con un tinte de injusto y casi reprochable de ilegítimo. Hemos venido pensando que las resoluciones de los organismos de seguridad social estarían referidas a conceder el beneficio jubilatorio y eventualmente a conceder la justicia del monto consecuente.

Con respecto a las obligaciones de los contribuyentes quiero traer a colación el caso práctico que se presenta a muchas empresas en las que ante la determinación del organismo surgen montos adeudados muchas veces absolutamente mal calculados e injustos, por lo que se ven obligadas al procedimiento de pagar primero y repetir después. Creo que tal cual están fijadas las pautas de este procedimiento que si bien es sumario es de conocimiento, y como tal puede hacer absolutamente engorrosa la justicia, va a llevar a que aquella supuesta obligación del contribuyente tenga que ser abonada. En su defecto, la administración tiene derecho a ejercer un juicio de apremio con todo lo que esto implica.

Incluso el acta de verificación da lugar a que en 48 horas la administración tenga que informar a las instituciones bancarias de la mora, lo que puede traducirse en una afectación a su crédito público, todo ello partiendo de la posibilidad de que una verificación hecha por un inspector sin los debidos resguardos de conocimiento pueda ser absolutamente injusta.

En consecuencia, debemos pensar en este tipo de procedimientos que afectan la seguridad jurídica.

Hemos escuchado que el ministro decía que esta ley era decisoria para el advenimiento de nuevas inversiones. Creo que ningún directorio de empresa, advertido de esta situación, va a ver con ligereza la inversión que el país reclama.

Traigo a la reflexión de esta Cámara que más allá de que le puede ser reprochado de inconstitucional, como lo ha sido el conjunto del procedimiento, en la práctica se dan estas situaciones absolutamente de injusticia. Primero, va a aumentar el plazo, que puede superar los cinco años en el caso de las resoluciones definitivas, con un recurso objetable pero recurso al fin ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con costas por el orden causado. Esto último también es absolutamente injusto en la medida en que se está reclamando lo que corresponde por haber tenido que pagar inde-

bidamente por una irregular determinación de la autoridad de aplicación. A eso hay que agregarle la tasa de justicia y en definitiva el organismo puede decirle: señores, aquello que tomé indebidamente no se lo puedo devolver porque no tengo dinero. Por eso votaré en contra del capítulo referido al procedimiento.

**Sr. Presidente (Pier).** — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

**Sr. Gauna.** — Señor presidente: votaré en contra de este artículo, que constituye el inicio —porque hay que combinarlo con otras disposiciones que se pretenden sancionar— de lo que considero en su conjunto una regresión significativa del Estado frente al derecho.

Conocemos las dificultades —no voy a extenderme sobre su historia— que siempre hubo para llevar a juicio al Estado, no sólo en materia de responsabilidad, que se demoró aún mucho más en el tiempo. Ya en la discusión de la Constitución de 1853-60 no hubo acuerdo acerca de la redacción del artículo 100 y se llegó a una solución intermedia: establecer que la Corte Suprema y los tribunales inferiores conocerían en las causas en las que la Nación fuera parte. Pero como se quería poner parte actora exclusivamente, se consideró que esto no podía ser sancionado en la Constitución de esa manera y se determinó que la cuestión fuera decidida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El planteo de la indemandabilidad del Estado proveniente de las monarquías absolutas también llamó a confusión a la Corte, porque en sus primeros fallos denegó toda posibilidad de que el Estado fuera llevado a juicio como parte demandada.

Diría que esta confusión duró hasta el año 1900, en que se sanciona una ley que también se menciona aquí, la número 3.952, de demandas contra la Nación, en la que se postula en el artículo 7º —aún vigente— que dice que las sentencias contra el Estado son meramente declarativas y no ejecutorias.

Esto significó que ya avanzado el siglo, en 1960, la Corte se planteaba si el Estado se hallaba fuera o dentro del derecho, si debería respetar o no las sentencias de sus jueces y, por ende, en un fallo dictado en la causa "Pietranera, Josefa c/Nación Argentina" decidió que a través de un mecanismo específico había que intimarlo a partir de la sentencia condenatoria, y si no cumplía en el plazo que se indicaba debía ejecutarse la sentencia sobre los fondos que tuviera la repartición en el Banco de la Nación Argentina.



¿Por qué determinó esto la Corte? Porque consideró que se hacía inevitable que el Estado se insertara en el derecho y que por consiguiente respetara las sentencias de sus jueces, cumpliendo sus dictados más allá de concederle el privilegio de contar con mayor tiempo para cumplirlas.

Aquí se postula esta regresión que he comentado, una regresión al siglo pasado o al absolutismo monárquico. Comenzamos diciendo que siempre se ha sostenido que el Estado es solvente más allá de sus reparticiones, porque ningún Estado puede reconocer su propia quiebra; esto lo estamos consagrando aquí. El Estado, más allá de que estamos hablando del régimen de la seguridad social —porque es el que brinda esta prestación— está reconociendo que se halla limitado en sus recursos y que por ello no va a afrontar el juicio.

Entiendo que esta es una regresión inadmisibles que combinada con todo lo que vamos a decidir, que las sentencias de 1995 pasan a 1996, que si además no alcanza el presupuesto de ese año fiscal las sentencias pendientes pasan al siguiente y que si tampoco se cobran en ese año pasan nuevamente al otro, equivale a decir que estamos consagrando en definitiva la irresponsabilidad del Estado. Esto me parece gravísimo a la altura de los tiempos que vivimos, próximos al ingreso al siglo XXI.

Con estos fundamentos dejo planteada nuestra oposición más absoluta a esta curiosa excepción de reconocimiento de la insolvencia estatal.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

**Sr. Natale.** — Señor presidente: los señores diputados Garay y Gauna, al igual que otros legisladores, tienen solidísimas razones en los argumentos que acaban de exponer. No deseo aportar nada nuevo a lo que ellos han dicho con tanta precisión. Ya no es el Estado que se exceptúa de pagar porque no tiene recursos sino que va a articular como una defensa en la tutela de su derecho la carencia de esos recursos, no para postergar el pago de una obligación sino para hacer decaer el derecho subjetivo de quien recurriera ante la Justicia, ya que presentará una defensa que en última instancia permitirá al juez decir que el Estado no está obligado a pagar. Ni siquiera ocurre como en la vieja ley de demandas contra el Estado, que mantenía el crédito pendiente, sino que ahora el Estado podrá utilizarlo como defensa, vale decir, como oposición definitiva al derecho crediticio de quien concurra ante los tribunales.

A pesar de todo, quiero llevar cierta tranquilidad a los señores legisladores, particularmente al señor diputado Gauna. Como todos sabemos, la Constitución Nacional recientemente reformada ha creado la Auditoría General de la Nación, órgano que tendrá una participación activa en estos procesos. A renglón seguido, el ex artículo 15, ahora 17, establece que en el supuesto de que la ANSES articulara la defensa de limitación de recursos se admitirá la prueba pericial correspondiente, a ser diligenciada por integrantes del cuerpo de peritos o funcionarios de la Auditoría General de la Nación.

Es decir que la ANSES dice que no paga y articula la defensa de falta de recursos, porque si pagase en estas condiciones, de acuerdo con el artículo anterior, la eventual extensión a casos análogos crearía una situación de imposibilidad de pago. Pero esta argumentación de la ANSES está sujeta a lo que prevé el artículo siguiente, esto es, una prueba pericial, que no estará a cargo de cualquier perito sino de uno especial designado por la ley: la Auditoría General de la Nación.

La Auditoría General de la Nación que, como acabo de recordar, posee ahora entidad constitucional, debe ser presidida por una persona propuesta por el principal partido de la oposición, tal como expresamente lo establece la Constitución Nacional.

En consecuencia, a tenor de lo que dispone la Constitución y de lo que está por establecer esta ley, la suerte del jubilado resultará de la oposición o no de esta excepción de falta de recursos que invocará el funcionario de la ANSES naturalmente designado por el partido de gobierno, y corroborado por la pericia que realice el funcionario de la Auditoría General de la Nación, naturalmente designado por el principal partido de la oposición. De esta manera, quedarán saldadas las cuentas, y si se entienden entre unos y otros el jubilado podrá llevar adelante su demanda, mientras que de lo contrario correrá otra suerte.

Por esta vía tan singular de la Constitución y de la ley que estamos por sancionar, la suerte del jubilado quedará en manos de quienes deciden en los dos grandes partidos. En consecuencia, nosotros, que nada tenemos que ver en la decisión sobre la suerte que correrán los jubilados, votaremos en contra de este artículo.

**Sr. Gauna.** — Pido la palabra para una aclaración.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Gauna. — Señor presidente: el fino e irónico argumento del señor diputado Natale no se compadece con la realidad porque todos sabemos que en la Auditoría General de la Nación la mayoría está en manos del oficialismo, por más que la presidencia sea ejercida por la oposición.

Me parece que ése es un argumento liviano frente a algo mucho más grave como es el reconocimiento de la insolvencia del Estado. Debería haberse centrado allí el punto, pero agradezco al señor diputado Natale su aclaración, aunque también quiero que quede constancia de la mía.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Durañona y Vedia. — Señor presidente: no he comprendido bien esta última cuestión, salvo que se trate de alguna humorada del señor diputado Natale, como creo que realmente lo es; porque no admito que él piense que funcionarios de la Auditoría General de la Nación —que además son peritos que van a actuar ante los tribunales— irán a llevar instrucciones particulares del doctor Gil Lavedra o de quien ocupe ese alto cargo dependiente del Congreso de la Nación.

Tampoco he entendido mucho las palabras del señor diputado Ibarreche cuando sostuvo que este capítulo estaba teñido de no sé qué cuestiones. En reiteradas oportunidades se ha aclarado que la Comisión de Justicia que presido deliberó varias veces y a ella concurren los funcionarios invitados, los señores camaristas del fuero de la seguridad social y los representantes de entidades y colegios. Todos, incluso los señores diputados, se expresaron con total libertad.

El tema se trató en el plenario de las tres comisiones, donde el capítulo que se aprobó es éste que precisamente estamos tratando. Así que, sin perjuicio de toda observación que legítimamente quiera y deba hacerse, este capítulo, en todo caso, está teñido del trabajo común que distinguió el cometido de la comisión que ahora represento.

En el año 1900, cuando fue sancionada la ley 3.952 a que hicieron referencia algunos señores diputados, no había en el país un régimen de atropello del Estado; no había un sistema de estatismo o perversidad ni representativo de un Estado agazapado a la búsqueda de negar derechos a los particulares.

El presidente de la República era el general Roca. Existía una adecuada técnica legislativa. Las ideas liberales prevalecían en la legislación

argentina. Bartolomé Mitre y Carlos Pellegrini eran los senadores de mi provincia que votaron esa ley.

Me parece un poco raro decir que la mención de esa ley nos lleva a épocas de oscurantismo, cuestión que jamás hubiera creído que pudieran expresar los señores diputados Garay y Natale. Yo creo que esa es una ley sabia de la República, porque el Congreso vota anualmente el presupuesto de la Nación y la administración pública debe ceñirse a él. Por lo tanto, las obligaciones del Estado —compras, contrataciones y demás— deben estar contempladas en la ley de leyes.

Por supuesto que pudo ocurrir en 1900 —como en 1995— que alguien entable una demanda contra el Estado. Pensemos en el caso del daño ecológico, con cientos de millones de pesos en materia de indemnización. ¿De dónde saldrá esa plata? Si un juez dice —como va a decir según una ley que se está preparando— que el Estado responde económicamente por el daño ecológico, ¿de dónde saldrá la plata? ¿De la emisión monetaria? ¿Del envilecimiento del valor de la moneda? No; saldrá de la asignación presupuestaria que haga el Congreso de la Nación año tras año para atender las obligaciones del Estado. Y esta parte es muy importante, porque se ha hablado mucho de esta defensa basada en el “no pago porque no tengo plata”. El Estado no es un particular; no tiene el mismo régimen —patrimonialmente hablando— de los particulares. El Estado no paga sus deudas con la Plaza de Mayo o con el Cabildo, sino que lo hace con el sacrificio impositivo de la población, cuando el Congreso establece año a año cuáles son las asignaciones presupuestarias.

Entonces, no tiene nada de extraño que aquella ley sabia de la República dijera que las sentencias contra el Estado son meramente declarativas porque la concepción de la condena por parte del actor necesariamente tenía que pasar por la consideración de las Cámaras del Congreso.

Esa ley significó una renovación porque antes había que venir al Congreso a pedir permiso para demandar a la Nación; justamente al ser el Congreso el que iba a votar los recursos, debía analizar el tipo de demanda que se hacía contra el Estado nacional. Por eso no hubo inflación en la Argentina entre 1900 y 1945.

Después apareció la costumbre de incorporar al Estado como cualquier particular. El Estado no es como cualquier particular; no administra su patrimonio como lo hace un particular. Por consiguiente, estas liberalidades de tratar al Estado como un particular llevaron a la negli-

gencia de la administración de contratar y obligarse por toda clase de servicios, aumentar el gasto público, emitir dinero para pagar las demandas contra el Estado, cuando no la venalidad de los que arreglaron los juicios contra el Estado en la forma que tristemente hemos conocido en los últimos años.

No hay ninguna novedad en dotar al Estado no de un privilegio sino de las características que tiene como persona necesaria de derecho público. Acá no se dice que no se va a pagar sino que se va a pagar con la asignación que todos los años establezca el Congreso. Esa es la garantía del sistema previsional. Lo que se quiere —y aquí respondo a las inquietudes lógicas del señor diputado Garay— es establecer un sistema de presupuesto para el régimen de previsión. Es la respuesta que el país real está esperando; saber que el sistema previsional no es un barril sin fondo sino un sistema de cuya extralimitación deberá preocuparse el Congreso todos los años.

Es importante entonces que el juez o la autoridad judicial conozcan cuándo una demanda o muchas —cientos y miles de ellas— están afectando los recursos aplicados al sistema.

Este artículo se discutió mucho en la Comisión de Justicia. Allí propuse reemplazar la expresión “defensa de excepción” por el término “articulación”. Esto significa que el funcionario o la administración va a advertir al juez que se trata de esos casos cuyo acogimiento va a traer aparejado la extralimitación de los recursos destinados a ellos. Para nada significa detener el curso del proceso ni cambiar el curso de la sentencia. Después de la toma de razón de las distintas demandas, se sabrá cuáles son las que deben ser atendidas con recursos específicos que cada año establecerá el Congreso de acuerdo al artículo 18.

Por lo tanto —y esto es bueno que se aclare para la interpretación de los jueces—, no se trata de una excepción ni de un previo pronunciamiento; no modifica el contenido esencial que va a tener el fallo sino que significa la presencia del sistema, también en sede judicial, hecha por la propia administración.

Por las razones expuestas creo que el artículo tiene la redacción correcta. La pericia que pudiera hacerse —lo señala el artículo siguiente— en orden a esta defensa o articulación, va a ser hecha por funcionarios integrantes del cuerpo de peritos de la Auditoría General de la Nación. Por consiguiente, no habrá costas al respecto. Aconsejo aprobar el artículo tal como ha sido presentado en el despacho de comisión.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

**Sr. Natale.** — Como el señor diputado Gauna no entendió bien mi sentido del humor, quería señalar que la referencia que hice no tenía el alcance que él le otorgó y que fue bien comprendida por el señor diputado Durañona y Vedia. Comparto con el señor diputado Gauna las críticas al artículo en consideración. Al señor diputado Durañona y Vedia le expreso que jamás califiqué como autoritaria a la vieja ley de demandas contra la Nación, cuya apología él hizo y que yo de ninguna manera cuestioné. Con esto quiero poner punto final a la controversia.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.

**Sr. Garay.** — Señor presidente: yo había formulado una solicitud a la comisión, que sin duda en este momento está siendo representada por el señor diputado Durañona y Vedia. La expresión “articulación de la defensa” es absolutamente ambigua. Si se hubiese hecho referencia a una excepción sabríamos que ellas son expresas y en qué momento deben ser interpuestas en el proceso.

La articulación de la defensa de la insolvencia —por darle un nombre más sencillo e inteligible— no sabemos en qué momento se puede presentar y cómo se inserta en el proceso, ya que no es una excepción. ¿Habrá que esperar que se dicte la sentencia que determine en favor del actor sus créditos previsionales contra el Estado? ¿Esta defensa recién se puede articular una vez que se dictó la sentencia o se puede interponer al promover la demanda, a fin de que también en la etapa probatoria las pruebas versen sobre la solvencia o no del Estado en el presupuesto de ese año? Creo que todos estos aspectos quedan sin respuesta. Particularmente, habrá una inmensa cantidad de pleitos que van a terminar siendo resueltos fácilmente por la Corte Suprema de Justicia, que dictará una norma estableciendo qué debe suceder en el proceso. Solicito que le ganemos de mane a la Corte Suprema de Justicia y que, siendo competentes para ello, legislemos sobre este aspecto.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

**Sr. Durañona y Vedia.** — Señor presidente: para quienes tenemos alguna experiencia, como la posee el señor diputado Garay, hablar de excepción es poner un palo en la rueda del interesado. Resulta mejor hacer referencia a la articulación de defensa. Ya sabrán los señores

jueces interpretar esta cuestión. Me parece que políticamente conviene que quede como está redactado.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar el artículo 16, antes 14.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración el artículo 17, antes 15.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Durañona y Vedia. — Señor presidente: propongo que a la parte final del artículo se agregue el siguiente texto: "de acuerdo a la reglamentación que expida dicho organismo".

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Gauna. — Señor presidente: lamentablemente no se me otorgó la palabra cuando se estaba por votar el artículo anterior. Solicito a la Presidencia que me tenga en cuenta en la consideración de casi todos estos artículos. Como ya he manifestado en los fundamentos del artículo anterior, me opondré a toda la segunda parte, que establece: "salvo que la Administración Nacional de Seguridad Social articulare la defensa de limitación de recursos...".

Ya he dado suficientes fundamentos. No me conmovieron los sagaces argumentos del señor diputado Durañona y Vedia. Parecería que esto se hubiera establecido para que los jueces llegaran a un arreglo; podrían hacerlo al comienzo, cuando se inicia la demanda, o al final, después de la sentencia.

Juega con el concepto de articulación de la defensa de limitación de recursos; es una postura sagaz a la que nos tiene acostumbrados el señor diputado Durañona y Vedia. Será un semillero de interlocutorios comprender qué se quiere decir y en qué estadio del proceso se va a plantear.

Quiero dejar constancia de que personalmente considero que el artículo que estamos tratando debería terminar en la expresión "para mejor proveer".

Sr. Presidente (Pierri). — ¿La comisión acepta la modificación propuesta?

Sr. Durañona y Vedia. — La comisión ha adoptado este texto, que contiene el agregado que he propuesto, y por las razones expuestas no se admitirán modificaciones.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar el artículo 15, ahora 17, con las modificaciones propuestas y aceptadas por la comisión.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración el artículo 16, ahora 18.

Se va a votar.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración el artículo 17, ahora 19.

Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.

Sr. Garay. — Señor presidente: he hecho alusión a este artículo al hablar del 2º porque guardan estrecha relación y responden a la misma base argumental que campea en todo este autoritario proyecto que estamos votando.

A través de los artículos 17 y 18, que nos hablan de una especie de *writ certiorari* que en su momento se quiso sancionar junto con el *per saltum* —que posiblemente hayan sido retirados por vergüenza política—, sin duda se quiere plantear una facultad legislativa que se vincula con una vieja discusión que existió en el derecho y que ha desaparecido, en torno de los efectos vinculantes o no de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En un fallo de 1870, lacónico y ambiguo —según el doctor Sagües en sus comentarios a ese fallo—, la Corte estableció la obligatoriedad, para todos los jueces de la Nación y de las provincias, de seguir la doctrina por ella impuesta.

Lógicamente, con el paso del tiempo y la evolución de las costumbres se advirtió que eso era absolutamente incompatible con la naturaleza de una sentencia que apunta a dirimir un conflicto entre dos o más partes y que pone fin al proceso, pero de ningún modo puede resultar obligatoria para los jueces, porque si así fuera se quedarían al poco tiempo, luego de varias sentencias de la Corte, prácticamente sin trabajo, limitándose a copiar los fallos del Tribunal Supremo para resolver cada uno de los problemas que se les plantean.

Luego vino la doctrina de las sentencias no vinculantes de la Corte. Es una doctrina actual y hay varios fallos relacionados con este aspecto específico. Con la Constitución de 1949 hubo un período dentro del cual se estableció la obligatoriedad o el carácter vinculante del fallo. En el artículo 95 se expresaba: "La interpretación que la Corte Suprema de Justicia haga de los artículos de la Constitución por recurso extraordinario y de los códigos y leyes por recursos de casación será aplicada obligatoriamente por los jueces y tribunales nacionales y provinciales".

No obstante la reciente reforma, esa doctrina no fue insertada en la Constitución actual, aun-

que tampoco fue incluida, lógicamente, en la Constitución de 1853/60 y sus reformas.

La Constitución material, ese conjunto de pautas y normas que van surgiendo a raíz de la aplicación de la Carta Magna, ha hecho una correcta interpretación hasta llegar a algunos fallos cuya parte pertinente me permitirá leer, pues ilustra lo que actualmente es doctrina pacífica en lo que respecta al poder vinculante de los fallos.

En torno de la doctrina del no sometimiento, la Corte efectúa una evaluación en los autos "Ferrocarril del Sud c/Pedro U. Draque y Cía.". Allí proclamó que la facultad de interpretación de los jueces y tribunales inferiores no tiene más limitación que la que resulta de su propia condición de magistrados, y en tal concepto pueden y deben poner en ejercicio todas sus aptitudes y medios de investigación legal, científica o de otro orden, para interpretar la ley, si la jurisprudencia violenta sus propias convicciones. Este argumento se repite en los autos "Nación Argentina c/Luis E. Bemberg y otros".

La Corte expresó que el poder vinculante de los fallos debe guardar similitud con el efecto de la ley; éste es un acto propio del Poder Legislativo y nunca del Poder Judicial.

A fin de no volver sobre este tema durante la discusión del artículo siguiente, también quiero mencionar que, como si fuera poco, este imperio judicial que se establece en el artículo 17 también está contenido en el artículo 18. Se habla del *certiorari*, es decir, fallos que no requieren fundamentación alguna cuando ya existen otros de similares características. A la Corte le basta con el rechazo *in limine* del recurso argumentando que ya se ha expedido en casos análogos.

Por otra parte se estaría consagrando la doctrina de la arbitrariedad, ya que si la sentencia debe ser la derivación razonada del derecho vigente, el litigante debería analizar si la interpretación que se ha hecho en otros fallos tiene similitud o es susceptible de aplicación al caso particular, lo que nos lleva a un decreimiento en la Justicia que en adelante no sólo va a tener un poder de imposición coercible a todos y cada uno de los ciudadanos a través de sus fallos, sino que también podrá actuar de igual manera con la mera invocación de una sentencia anterior y sin fundamentación alguna, según reza el próximo artículo a considerar.

Por las razones expuestas votaremos en forma negativa el artículo en consideración y el siguiente, además de dejar constancia de nuestro rechazo al proyecto en su totalidad.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Gauna. — Señor presidente: no he de abundar en mayores consideraciones teniendo en cuenta los argumentos expuestos por el señor diputado preopinante, con los que coincido.

De todos modos, me he de permitir formular algunas reflexiones. Tengo presente el apuro del bloque oficialista por sancionar este proyecto, pero hay aspectos que no puedo dejar pasar por alto.

Es importante destacar que haremos de la Corte Suprema un tribunal de la previsión social, porque todo recurso ordinario —cualquiera fuere su monto— tendrá acceso a ella.

Se dice que la enorme cantidad de juicios en los que la Corte debe expedirse conspira contra su buena labor; no quiero imaginar lo que ocurrirá a partir de ahora con la aplicación de este recurso extraordinario. Vamos a convertir a la Corte en un tribunal común, con lo cual perderá su jerarquía de suprema dentro del orden de la Justicia de la Nación.

Me preocupa lo establecido en el último párrafo del artículo en consideración cuando hace referencia a que los fallos de la Corte serán de obligatorio seguimiento por los jueces. En este sentido, el señor diputado Garay expresó algunas consideraciones y es mi intención coadyuvar a su planteo.

A la Corte Suprema le ha costado entender que una cosa es la superintendencia administrativa que tiene en relación con los jueces inferiores —que a veces delega—, donde no puede haber más que subordinación por parte de los jueces, y otra muy distinta es cuando los jueces ejercen su función jurisdiccional. No debemos olvidar que en nuestro país el juez es quien hace cumplir el cuerpo normativo jurídico de la Nación y no está obligado —como ocurre en la tradición anglosajona— a seguir el precedente; por el contrario, debe interpretar la ley y tiene amplia libertad para ello. A veces puede ocurrir que, cuando existen reiterados fallos de la Corte Suprema, un juez de primera instancia diga que deja a salvo su opinión pero que, por razones de economía procesal y atento a la reiteración de las distintas composiciones del Alto Tribunal, decide fallar en el sentido por él indicado. Pero si obligamos a los jueces a seguir lo dictaminado por la Corte en sus diversos fallos estamos cercenándoles la posibilidad de interpretar la ley y, en última instancia, llegamos a la amarga conclusión de que resultarían innecesarios los tribunales de primera y segunda instancia, ya que dejando a la Corte como único

tribunal estaríamos solucionando mejor las cosas.

Por lo expuesto, adelanto mi absoluta oposición al artículo en consideración.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Durañona y Vedia. — Señor presidente: cuando ha intervenido el organismo administrativo con apelación judicial ante la Cámara, un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación parece razonable. Por obra de la propuesta del señor diputado Orquín se extendió luego la jurisdicción, llevando a la intervención de los juzgados federales provinciales.

Considero que el recurso ordinario ante la Corte es harto discutible, pero de todas maneras estoy sosteniendo el despacho de comisión en mi carácter de presidente de la Comisión de Justicia, luego de haber intervenido en el plenario de las comisiones. En tal sentido debo señalar que, no obstante mi idea particular al respecto, estas propuestas no deben aceptarse. La obligación a los jueces inferiores nace de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación cumple de algún modo una función de casación en materia de seguridad social.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar el artículo 19, antes 17.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración el artículo 20, antes 18.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Durañona y Vedia. — Señor presidente: en relación con este artículo voy a proponer la sustitución de la expresión "respecto a" por "en favor de", de tal modo que la redacción sería la siguiente: "Cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación se hubiere pronunciado reiteradamente en casos análogos en favor de la aplicación de la presente ley, podrá rechazar *in limine*, el recurso interpuesto, sin otra fundamentación". De esa manera tiene sentido la frase.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Arias. — Señor presidente: voy a proponer un agregado a esa redacción, porque de lo contrario quedaría trunca la frase. La expresión diría: "en los casos en que se pretenda desconocer esa doctrina".

Sr. Presidente (Pierri). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Durañona y Vedia. — Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar el artículo 20, antes 18, con las modificaciones propuestas y aceptadas por la comisión.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración el artículo 21, antes 19.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Gauna. — Señor presidente: se han expuesto diversos argumentos con respecto al tema de las costas.

Sr. Presidente (Pierri). — Ruego a los señores diputados que permanezcan en sus bancas a fin de no comprometer el quórum.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Gauna. — Señor presidente: con respecto a este artículo 21, —antes 19— que dice: "Las costas serán por su orden", creo que hay que modificar la redacción. Estos juicios tienen naturaleza alimentaria, por lo que no deberíamos tener esta espada de Damocles pendiendo sobre aquellos que reclaman patéticas remuneraciones y tienen que cargar también con las costas. Si bien la pericia sobre la limitación de recursos estará en manos de la Auditoría General de la Nación, otro tipo de pericias no dependerá de ésta ni de otro organismo del Estado. Entonces, se corre el riesgo de que —como los peritos pueden perseguir a cualquiera de las partes y no sólo a la vencida— el jubilado tenga que hacerse cargo de esta modalidad de pago.

Por lo tanto, teniendo en cuenta que se trata de juicios de naturaleza alimentaria, solicito que no se impongan costas a quienes los inician.

Sr. Presidente (Pierri). — ¿La comisión acepta la propuesta?

Sr. Durañona y Vedia. — Propongo que el artículo diga: "en todos los casos las costas serán por su orden".

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar el artículo 21 —antes 19— con la modificación propuesta por la comisión.

—Resulta afirmativa.

Sr. Calván. — Pido la palabra para una moción de orden.

Sr. Presidente (Pierri). — Para una moción de orden tiene la palabra el señor diputado por La Rioja.

Sr. Calván. — Señor presidente: propongo a la Honorable Cámara un cuarto intermedio hasta mañana a las 10 horas ya que no podemos continuar trabajando en estas condiciones.



**Sr. Presidente (Pierri).**— Se va a votar la moción de orden formulada por el señor diputado por La Rioja.

—Resulta negativa.

**Sr. Presidente (Pierri).**— Queda rechazada la moción.

**Sr. Calván.**— Ante la negativa de concedernos el cuarto intermedio, el bloque de la Unión Cívica Radical se va a retirar de este recinto.

**Sr. Matzkin.**— Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Pierri).**— Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

**Sr. Matzkin.**— Señor presidente: evidentemente, no existe razón alguna para que el cuerpo deje de funcionar en estos momentos. Hemos estado trabajando durante toda la tarde, y el radicalismo no tiene por qué abandonar el recinto. No es seria esa actitud. No quieren trabajar.

Igualmente vamos a sancionar la ley, tal como lo hemos hecho con las principales leyes que interesan al país, a pesar de los radicales. No cumplen con los acuerdos, faltan a su palabra, no dicen la verdad. La única verdad es que aquí existe un problema de extorsión, y formulé una denuncia concreta: como no se arreglan los problemas de la provincia de Río Negro se levantan de sus bancas. Nosotros no trabajamos con extorsiones. Lo vamos a hacer con la verdad. (*Aplausos.*) ¡Que se vayan si quieren!

El justicialismo hoy tuvo 116 diputados en sus bancas y vamos a seguir estando junto con el resto de los bloques que estén dispuestos a trabajar esta noche. Independientemente del sentido del voto de cualquiera de los bloques políticos, vamos a reiterar nuestro deseo y nuestra convicción política de continuar trabajando. Por eso vamos a completar las 116 bancas peronistas y creo que vamos a poder reunir el quórum. Responderemos a la extorsión con hechos concretos, con la votación de las leyes que el país necesita.

**Sr. Presidente (Pierri).**— En consideración el artículo 21, antes 19.

Se va a llamar para votar.

—Se llama para votar.

—Mientras se llama para votar:

**Sra. Guzmán.**— Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Pierri).**— Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.

**Sra. Guzmán.**— Señor presidente: hemos escuchado decir que aquí no se cumplen los com-

promisos a que arribó el justicialismo con el radicalismo. Nosotros venimos a esta sesión sin ningún tipo de compromisos. Por eso mientras se forma el quórum, nos gustaría conocer cuáles son esos compromisos de los que hablan.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

**Sr. Presidente (Pierri).**— Se va a votar el artículo 22, antes 20.

—Resulta afirmativa.

—Sin observaciones, se votan y aprueban los artículos 23 y 24, antes 21 y 22.

**Sr. Presidente (Pierri).**— Se va a llamar para votar el artículo 25, antes 23.

—Se llama para votar.

—Mientras se llama para votar:

**Sr. Presidente (Pierri).**— Espero que ningún diputado esté presionando otra banca para lograr el quórum, porque lo voy a denunciar públicamente.

Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

**Sr. D'Ambrosio.**— Agradezco la actitud que está asumiendo la Presidencia. Cualquiera comprenderá el estado espiritual en el que me encuentro, pero todo tiene su límite. Voy a esperar un minuto más y luego me retiraré.

**Sr. Presidente (Pierri).**— La Presidencia agradece mucho al señor diputado.

Tiene la palabra la señora diputada por Córdoba.

**Sra. Casari de Alarcía.**— Señor presidente: solicito a los señores diputados del radicalismo presentes que esperen cinco minutos más. Además, quiero rendirles mi homenaje, porque han pensado más en el país que en su partido. Esa es la única forma de construir algo en la Argentina. Por ello pido un aplauso para todos esos diputados. (*Aplausos.*)

**Sr. Presidente (Pierri).**— Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

**Sr. Balestra.**— Señor presidente: en la discusión que se ha llevado a cabo en el día de hoy en torno de este proyecto de ley he advertido que a veces muchos diputados bien intencionados se equivocan acerca de lo que es el Congreso.

El Congreso es una congregación de seres humanos que tienen discrepancias y enfrentan posiciones; ésa es mi concepción personal. Significa quedarse y discutir; es perder y es ganar.

Mi situación es relativamente fácil porque soy un invitado en este bloque. No se trata de que nos aplaudan o nos dejen de aplaudir; es un imperativo de conciencia que tenemos tanto el diputado D'Ambrosio como quien habla.

De eso se trata. Creemos que debemos quedarnos en el recinto y hemos respondido a ese imperativo.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Se va a votar el artículo 25, antes 23.

— Resulta afirmativa.

— Sin observaciones se votan y aprueban los artículos 26 a 28, antes 24 a 26.

**Sr. Presidente (Pierri).** — En consideración el artículo 29, antes 27.

Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

**Sr. Vicchi.** — Señor presidente: solicito un breve cuarto intermedio en las bancas para permitir que el presidente de nuestro bloque llegue al recinto y ocupe su lugar para hacer uso de la palabra. Luego podremos continuar con el tratamiento de los artículos restantes.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Si hay asentimiento se procederá en la forma solicitada por el señor diputado.

— Asentimiento.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Invito a la Honorable Cámara a pasar a un breve cuarto intermedio, permaneciendo los señores diputados en las bancas.

— Se pasa a cuarto intermedio a la hora 22 y 48.

— A la hora 22 y 52:

**Sr. Presidente (Pierri).** — Continúa la sesión. Tiene la palabra el señor diputado por La Rioja.

**Sr. Galván.** — Señor presidente: muy pocas veces como esta noche los partidos políticos, a través de sus representaciones parlamentarias, viven situaciones tan difíciles.

De por sí, el proyecto de ley en discusión fue conflictivo desde su inicio. Nuestro bloque hizo los mayores esfuerzos para mejorarlo y perfeccionarlo, sin pensar en resultados electorales sino apuntando al interés de la gente, dados los perjuicios que podría ocasionar a la Nación lo que, a nuestro juicio, era una ley inadecuada para los tiempos que se viven.

Debo reconocer con lealtad que tanto el bloque Justicialista como otras bancadas han pue-

to la mayor buena voluntad para que se sancionara la mejor ley posible, dentro de los intereses que cada uno tiene y de las circunstancias políticas. Pero el nuestro no es un bloque de ficciones.

Seguramente algunos criticarán el exceso de franqueza, porque ésta es una virtud dejada un poco de lado en los tiempos en que vive nuestra sociedad política. En nombre de esa franqueza y de esa sinceridad debo manifestar a la Cámara que durante el transcurso de las horas de esta tarde y de esta noche, nuestro bloque ha estado embargado por una profunda inquietud política. Sólo el politicólogo, el analista frío, aquel que tiene una heladera en la cabeza, el día de mañana podrá hacer disquisiciones sobre cuál fue el interés prevaleciente, pero olvidando las palabras de un filósofo alemán, que decía: "el hombre político para caracterizarse como tal, tiene que ser un hombre de pasión". ¡Nosotros somos hombres de pasiones argentinas y radicales!

Como formamos parte de un partido que durante más de cien años ha puesto su esfuerzo al servicio de la República, creo que nuestras ideas pueden teñirse —sin mayor arrogancia en lo que voy a decir— con los tenues colores azul y blanco de la nacionalidad de los argentinos; pero inocultablemente somos radicales, y la inquietud que hoy teníamos —debemos expresarlo con toda franqueza— estaba motivada por el hecho de que un grupo enquistado en el poder, sobre todo en representación del ministro de Economía, trata de ahogar a la provincia de Río Negro para frustrar las legítimas y democráticas aspiraciones del candidato de la Unión Cívica Radical.

Pero nadie podrá decir que estamos anteponiendo situaciones partidistas a los altos intereses de la Nación.

No tenemos vocación de extorsionadores, estamos defendiendo al candidato de la Unión Cívica Radical frente a un ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos que en 24 horas les dio 75 millones de dólares a los parientes del presidente de la República. Sin embargo, a través de formulismos y formalidades bancarias está ahogando las posibilidades de nuestro candidato al negarle plata que es de todos los argentinos.

Asimismo, hoy denunciemos que se enviaron —por parte de una facción que no sé a qué personaje oscuro de la política responde— 200 colectivos con gente cuyo fin es perturbar en la provincia de Río Negro.

Estos son algunos de los hechos que legítimamente han inquietado al bloque de la Unión Cívica Radical. Aclaro que esta situación la conocen el señor ministro del Interior y el señor secretario general de la Presidencia.

La pregunta crucial era: ¿qué hacemos los radicales frente a nuestro candidato que en el futuro puede ser presidente de la República y que ahora se encuentra ahogado por estas bajas circunstancias plagadas de vicios que pretenden desdibujar su imagen frente a la opinión pública? Tenemos en cuenta que también debemos cumplir con nuestro deber de diputados de la Nación.

No faltará quien diga que hemos sido comprados para que votemos este proyecto. Esos quedarán arrinconados en las sombras de la infamia, porque tampoco queremos que el gobierno nos señale como los causantes de la crisis nacional que se avecina.

Pretendemos que se nos comprenda; no podemos romper una regla de oro en la política cual es la de ser solidarios con nuestro candidato a presidente de la Nación.

Pero tampoco pueden dejar de reconocer la responsabilidad política demostrada por el bloque radical al venir a expresar sus disidencias y ayudar a que esta norma sea sancionada, aunque el tiempo será quien la juzgue.

Seguramente, algún politólogo pagado por el gobierno el día de mañana podrá poner en duda estas virtudes de auténtica solidaridad política de los hombres que pertenecemos al viejo partido de Hipólito Yrigoyen y de Leandro N. Alem; si lo hace es porque no conoce a los políticos.

Quien haga prevalecer el amor propio por sobre la responsabilidad que venimos a exhibir también será un extraviado en el razonamiento.

Venimos a votar de acuerdo con la disidencia democrática que hemos marcado desde el 23 de diciembre del año pasado y reiterando la nulidad del decreto presidencial del 27 del mismo mes y año.

Pretendemos decir a los jubilados argentinos que hemos hecho todos los esfuerzos posibles para mejorar esta norma e impedir que se continúen avasallando sus derechos.

Quedará para la intimidad radical el haber dicho a nuestro candidato, el doctor Horacio Massaccesi, que desde estas bancas de la Unión Cívica Radical, hoy 15 de febrero de 1995, a tres meses de los comicios en los que se elegirá el presidente de la Nación, hemos sido solidarios para que un hombre joven, talentoso y honrado sea el futuro presidente de la República.

Con estas condiciones venimos a seguir el debate sin apartarnos un solo centímetro de nuestras convicciones radicales y tampoco sin ceder nada de nuestras convicciones democráticas. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar el artículo 29, antes 27.

— Resulta afirmativa.

— Sin observaciones, se votan y aprueban los artículos 30 a 34, antes 28 a 32.

— El artículo 35 — antes 33 — es de forma.

Sr. Presidente (Pierri). — Queda sancionado el proyecto de ley.<sup>1</sup>

Se comunicará al Honorable Senado. (Aplausos.)

Sr. Brunelli. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Brunelli. — Señor presidente: dado que hubo inconvenientes en el sistema electrónico y que debió votarse a mano alzada, deseo dejar constancia de mi voto afirmativo al artículo 9º, de mi voto negativo al artículo 21 — antes 19 — y de mi abstención en el resto de los artículos del proyecto de ley que acaba de ser sancionado.

Sr. Presidente (Pierri). — Quedará constancia, señor diputado.

Se va votar la inserción solicitada por el señor diputado Leconte.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — Queda autorizada la inserción peticionada.<sup>2</sup>

3

### MOCION DE ORDEN

Sr. D'Ambrosio. — Pido la palabra para formular una moción de orden.

Sr. Presidente (Pierri). — Para formular una moción de orden tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. D'Ambrosio. — Señor presidente: formulo moción de orden para que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento a efectos de pronunciarse sobre el tratamiento sobre tablas de un proyecto de declaración que quince señores legisladores de la Unión Cívica Radical hemos presentado, en-

<sup>1</sup> Véase el texto de la sanción en el Apéndice. (Página 5762.)

<sup>2</sup> Véase el texto de la inserción en la página 5769.